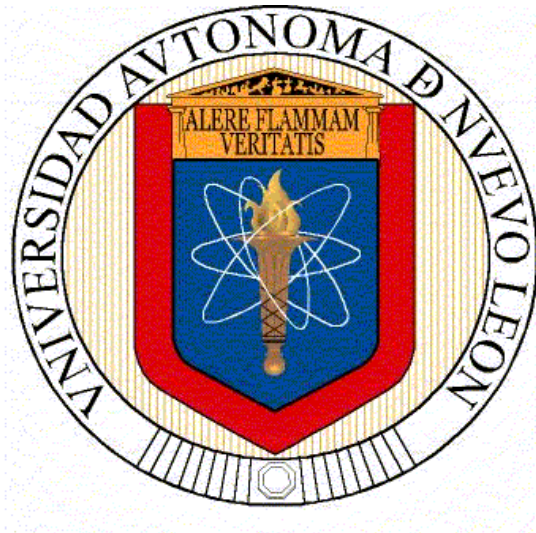


# **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES**



**TESIS**

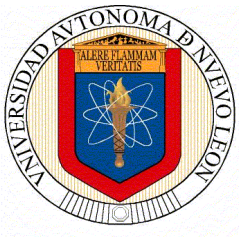
**“CONFLICTO DE PODER ENTRE EL CONGRESO Y LA CORTE  
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA”**

**PRESENTA**

**JORGE ELIÉCER BOLÍVAR BERDUGO**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN FILOSOFÍA  
CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS**

**MAYO, 2019**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES**



**TESIS**

**“CONFLICTO DE PODER ENTRE EL CONGRESO Y LA CORTE  
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA”**

**PRESENTA**

**JORGE ELIÉCER BOLÍVAR BERDUGO**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN FILOSOFÍA  
CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS**

**DIRECTORA DE TESIS  
KARLA ANNETT CYNTHIA SÁENZ LÓPEZ**

**MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO,**

**MAYO DE 2019**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS  
LOS INTEGRANTES DEL H. JURADO EXAMINADOR DEL SUSTENTANTE

**JORGE ELIÉCER BOLÍVAR BERDUGO**

Hacemos constar que hemos revisado y aprobado la tesis titulada:

**“CONFLICTO DE PODER ENTRE EL CONGRESO Y LA CORTE CONSTITUCIONAL  
DE COLOMBIA”**

FIRMAS DEL HONORABLE JURADO

\_\_\_\_\_  
**JESSICA MARISOL VERA CABRERA**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**KARLA ANNETT CYNTHIA SÁENZ LÓPEZ**  
**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**PEDRO PAÚL RIVERA HERNÁNDEZ**  
**PRIMER VOCAL**

\_\_\_\_\_  
**RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ LARRAGOITY**  
**SEGUNDO VOCAL**

\_\_\_\_\_  
**MARÍA LEONOR RAMOS MORALES**  
**TERCER VOCAL**

Monterrey, Nuevo León, México

Mayo de 2019

## **DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD**

En honor a la verdad, declaro solemnemente que el documento que enseguida presento es fruto de mi propio trabajo, y hasta donde estoy enterado no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, excepto aquellos materiales o ideas que por ser de otras personas les he dado el debido reconocimiento y los he citado debidamente en la bibliografía o referencias.

Declaro además que tampoco contiene material que haya sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro grado o diploma de alguna universidad o institución.

ATENTAMENTE,

*“Alere Flammam Veritatis”*

Monterrey, Nuevo León a 16 de mayo de 2019

**JORGE ELIÉCER BOLÍVAR BERDUGO**

## **DEDICATORIA**

A mis padres Pedro Pastor y Ana Rita por la vida maravillosa que me dieron, que aun y cuando ya no están físicamente sus recuerdos viven en mi mente y mi corazón.

A Andrea por ser mi cómplice en este camino, por no soltarme de la mano, por el apoyo incondicional, por disfrutar juntos este logro.

A mis hijos, permanente motivación de mi existencia; alfa y omega de mi vida.

A mis nietos, esperanza de la nueva y motivante vida

## **AGRADECIMIENTOS**

En memoria de José Consuegra Higgins, siempre maestro, siempre amigo

A la Universidad Simón Bolívar, por su permanente presencia en cada momento, por su apoyo y solidaridad de siempre y por la oportunidad y apoyo para alcanzar este nuevo sueño.

A la Universidad Autónoma de Nuevo León, por sus conocimientos, por sus motivaciones y alientos en esta travesía del saber.

A la señora directora y asesora de la tesis doctora KARLA ANNETT CYNTHIA SAENZ LOPEZ, por su presencia permanente su confianza y los consejos siempre pertinentes y efectivos

Al doctor FRANCISCO JAVIER GORJÓN GOMEZ, motivador, profesor y amigo, muestrario del docente entregado a su labor de gran maestro enseñando con el ejemplo y la práctica

A los compañeros de curso por su acompañamiento en este viaje a la Itaca de los sueños.

## Índice de Contenido

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD .....	iii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTOS .....	iv
INDICE DE GRÁFICAS.....	ix
INTRODUCCION. ....	1
CAPITULO I. METODOLOGIA.....	4
1.1 Antecedentes.....	4
1.2 Planteamiento del problema.....	8
1.3 Justificación. ....	11
1.4 Objetivos.....	12
Objetivo General.....	12
1.5 Hipótesis .....	13
1.7 Marco Conceptual .....	13
1.8 Tipo de Investigación .....	21
1.9 Modelo de investigación .....	22

1.10 Diseño de investigación .....	23
CAPITULO II. EL PODER POLÍTICO EN COLOMBIA.....	25
2.1. Ciencia política y poder .....	25
<b>2.2. Conceptualización .....</b>	<b>26</b>
2.3. Poder político y democracia .....	30
<b>2.4. El poder como Objeto de Control .....</b>	<b>33</b>
2.5. Factores de poder en Colombia.....	34
2.5.1. La Constitución Política de 1991.....	34
2.5.2. La insurgencia y el poder .....	36
2.5.3. Actores Externos.....	40
2.5.4. El poder del Estado colombiano .....	41
CAPITULO III. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA JUSTICIA EN COLOMBIA.....	46
3.1. El Estado Social de Derecho .....	46
3.1.1. Colombia Estado social de Derecho.....	46
3.2. El Congreso de la Republica funciones constitucionales .....	57
CAPITULO IV. CONFLICTO DE PODER Y SOCIEDAD .....	71



4.1 Relación entre el poder político y la sociedad .....	71
4.2 Factores reales de poder en Colombia.....	74
4.3. La legitimidad e Institucionalidad del Congreso.....	78
4.3.1. La legitimidad Originaria.....	79
CAPÍTULO V. COMPROBACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA.....	82
5.1. Método .....	82
5.2. Participantes.....	85
5.3. Muestra .....	85
5.4. Análisis de Resultados .....	86
5.4.1. Pérdida de la institucionalidad de la corte y del congreso.....	88
5.4.2. Revocatoria.....	95
5.4.3. La desconfianza .....	97
5.4.4. Control judicial.....	102
5.4.5. Incredulidad en la Corte Constitucional. ....	107
5.4.6. Inseguridad jurídica .....	112

5.4.7. Corrupción.....	119
5.4.8. Desacreditación.....	123
5.4.9. Clientelismo .....	125
5.4.10 Poder Político del Congreso .....	129
5.4.11. Legislar .....	130
5.4.12. Intromisión .....	132
5.5. Discusión de Resultados .....	135
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS .....	147
REFERENCIAS .....	153

## **INDICE DE GRÁFICAS**

Gráfica 1 Pérdida de institucionalidad .....	90
Gráfica 2 Incredulidad en la Corte Constitucional.....	109
Gráfica 3 El Poder Político del Congreso .....	129

## **INTRODUCCION.**

La aprobación de la Constitución Política de Colombia, que entró en vigencia en el año 1991, trajo cambios significativos para la vida económica, social, económica, cultural, política y jurídica de la sociedad colombiana.

El primer cambio fue el pasar de un Estado de Derecho, que se rige por un sistema de leyes, es decir, un Estado que tuvo como característica fundamental la prevalencia de la norma sobre los aspectos sociales económicos y políticos, concepto proveniente de la dogmática jurídica en la cual se crea una propuesta legal abstracta, impersonal y coercitiva diseñada por el poder público centralizado en un Estado que legisla, interpreta y aplica esa norma abstracta, la justicia, es una instancia de aplicación de normas establecidas con anticipación, de allí que se les haya dado el nombre de operador judicial. De este tipo Estado se pasó a uno nuevo al que se le agregó el apelativo de social de derecho, cuyo alcance más importante es su sentido garantista y su sentido social, connotación que trajo consigo una serie de características como la ampliación y el reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales y la protección de estas garantías a través de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La nueva Carta modificó la estructura de la Rama judicial creando dos nuevas Cortes La Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; a la primera se le confió la guarda y supremacía de la Constitución y Revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos fundamentales, papel que ha dado inicio a los conflictos de poder que hoy se suscitan con las demás cortes.

La Constitución además, otorgó poder político a las cortes para tomar decisiones alejadas de la administración de justicia; por ejemplo el Fiscal general de la nación es elegido por la Corte

Suprema de justicia de terna enviada por el presidente de la República; El Contralor general de la Nación, es elegido por el Congreso de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte suprema de Justicia y el Consejo de Estado; El Procurador General de la Nación es elegido por el Senado de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esta función de las cortes ha propiciado que su verdadero papel de administrar justicia se vea opacado por su papel en la toma de decisiones políticas y se convierte en fuente generadora de Conflictos.

El trabajo de investigación que se propuso determinar los factores que han originado la perdida de legitimidad de la justicia en Colombia a partir del Conflicto de poder ente el Congreso de la República y de la Corte Constitucional.

El desarrollo de la investigación en cinco capítulos; el primero de ellos, presenta la metodología empleada, los antecedentes del conflicto de poderes, la formulación del problema de investigación, la justificación, los objetivos planteados, el marco teórico y conceptual, la hipótesis de investigación; se hizo uso de la entrevista semiestructurada para la recolección de la información, realizando diez entrevistas a miembros tanto del Congreso como de la Corte Constitucional.

Para el análisis de la información recabada. en esta investigación de carácter cualitativo se empleó el programa informático MAXQDA, que permitió afrontar el análisis contextualizado confrontándolo con la hipótesis

En el segundo capítulo se presenta un análisis del poder y la política en Colombia, sus orígenes, los principales tratadistas sobre el tema, los tipos de poder, los factores de poder, el poder y la democracia, la insurgencia y el poder, se trata de fundamentar la investigación sobre los conflictos de poder, para entender a cabalidad la esencia de ese conflicto y qué hay en el centro de la confrontación.

En el tercer capítulo: Estado social de derecho y justicia, se profundiza en el tipo de Estado que es el colombiano, su cambio a partir de la Constitución de 1991, en donde se convierte en un Estado garantista pasando de un Estado de derecho traído desde la Constitución de 1886 a un Estado social de Derecho que amplía el reconocimiento de derechos fundamentales, derechos económicos sociales y culturales y los nuevos derechos colectivos y del medio ambiente, culminando con un estudio del Congreso de la República.

El cuarto capítulo Conflictos de poder y sociedad, en él se realiza un análisis de los conflictos de poder, iniciando con Thomas Hobbes, con su teoría del Estado en la que dio inicio sistemático de las causas de la discordia entre los hombres: la competencia en busca de beneficios, la desconfianza que genera violencia buscando con ella seguridad, y el honor y la gloria para imponer reputación por la fuerza.

Al avanzar el capítulo se profundiza en el estudio de la relación entre el poder político la sociedad sobre la idea de mostrar en un análisis comparativo, cómo se legitima el poder político, desde la Constitución como estructura racional de la norma, hasta la dinámica de los factores de poder en Colombia, pasando por la legitimidad normativa del Congreso y la pérdida de credibilidad tanto del Congreso como de la Corte Constitucional

El quinto y último capítulo: Comprobación cualitativa de resultados a través de la entrevista semiestructurada, el análisis de resultados mostró que realmente existe una pérdida de institucionalidad tanto del Congreso como de la Corte Constitucional que debilita su poder y con ello la justicia entra a ser descalificada por la sociedad.; aparecen los indicadores como la revocatoria de la leyes, la desconfianza de las personas hacia esas instituciones; el estudio permite analizar las razones de la incredulidad de las personas sobre el Congreso y la Corte Constitucional.

La investigación permitió de manera fehaciente probar La hipótesis planteada

## **CAPITULO I. METODOLOGIA**

### **1.1 Antecedentes**

Colombia es un Estado Social de Derecho. El artículo 1º de la Constitución Política establece el tipo de Estado que es Colombia. De manera textual el artículo expresa:

"Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general" (Gómez Sierra, 2013)

La expresión Colombia es un Estado Social de Derecho, fue acuñada en el año 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creada para la renovación de la Constitución de 1886, en representación del pueblo decidió esa forma particular y específica de Estado.

Esta fórmula de Estado Social de Derecho, que se encuentra ampliada y sustentada en toda la Carta Política, tiene una connotación sin precedentes en nuestra historia constitucional, ello implicó una definición de los derechos fundamentales, económicos sociales y culturales y a su relación con el derecho de tutela, cuya interpretación dio nacimiento a un conflicto de competencia entre las Cortes de cierre judicial: La Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico – política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Esta respuesta está fundamentada en nuevos valores – derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en ejercicio del poder y sobre todo, a través de la

consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política.

La teoría Política considera que el Estado Social de Derecho es un sistema social, político y económico fundamentado en un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas sobre las cuales se levanta la vida socio- jurídica de la Nación. En términos generales la mayor parte de autores de filosofía del derecho coinciden en que un Estado Social de Derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida para participar como miembro pleno en la sociedad.

La Constitución de 1991 estableció como principio fundante de Colombia ser un Estado Social de Derecho. Este principio constitucional es soporte de la actual forma de nuestro Estado.

Desde el preámbulo de la Constitución se advierte la identidad política del Estado, su rumbo y decisión misional de ser una carta Política Garantista, signada por un “ethos” superior inspirado en el concepto de libertad, criterio que trae consigo el carácter obligatorio de este preámbulo que dice así:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la Unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice u orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sancionar y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA”

Reafirmado el carácter garantista de la Constitución aparece el Título Primero de la Carta que expresa: Artículo 1º. “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,



democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

El Estado Social de Derecho, como principio fundante de la República ha brindado a la Constitución una serie de características que identifican entre ellas la carta reconoce una amplia gama de derechos fundamentales y mecanismos para protegerlos; la preservación permanente del principio democrático, la participación ciudadana en la vida social económica y política de la Nación, enmarcado todo ello en el principio de que la dignidad humana es el eje central del Estado Social de Derecho.

El artículo 2º constitucional señala: Son fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  
(Constitución Política de Colombia)

En este sentido expresa Norberto Bobbio .”Las sociedades modernas buscan actualmente los mejores medios para transitar hacia un modelo de organización política en que la democracia formal se vuelva más real, la democracia política se extienda a la sociedad y la democracia representativa se complementan con mecanismos de democracia directa. Se pretende pues, la complementación de los dos modelos - democracia representativa y directa -, aprovechando las virtudes del sistema representativo e incorporando las ventajas de la

participación ciudadana, todo lo cual estructura la base del esquema de democracia participativa”. (Bobbio, 1986)

En cumplimiento de esos fines del Estado, la misma Asamblea Nacional Constituyente, fijó la Estructura del Estado en una organización con separación de poderes y colaboración armónica; es así como el Título V, DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, CAPITULO I de la Carta Magna la estableció así:

Las ramas del poder público, separación de poderes y colaboración armónica, el Congreso de la República, Rama legislativa, el Presidente de la República, Rama Ejecutiva, la Administración de Justicia, Rama Judicial, Los Órganos de Control, el Ministerio Público, el Control de la gestión Pública, la Organización Electoral, señalando además en su artículo 121 una norma de taxatividad de las funciones de la autoridades del Estado: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. (editorial legis, 2017)

Muy a pesar de estar precisadas tanto en la Constitución Política como en las Leyes, las funciones de cada una de las instituciones y estamentos del Estado, se han presentado conflictos de poder entre las Instituciones.

La justicia en Colombia, ha recibido muchas reformas, sin embargo, sigue siendo lenta, tardía, ineficiente y brinda poca satisfacción a quienes acuden a ella

Una importante situación de crisis es la protagonizada en la rama Judicial, en la que están inmersas las cabezas de cierre de las jurisdicciones: la corte Constitucional, la Corte Suprema de justicia y el Consejo de Estado, se han trenzado en un conflicto de competencias, problemática que ha agudizado la prestación del servicio público de la justicia y ha llevado a que las tres instituciones hayan perdido credibilidad y confianza en todos los estamentos y el país se encuentre sumido en una inseguridad jurídica que ha llevado a las otra ramas a

establecer una normatividad de “equilibrio de poderes” para poner fin a esta “lucha de trenes” como el público denomina este conflicto.

Sin embargo la crisis que más afecta la institucionalidad de la Nación, es el conflicto de poder que se presenta entre el poder legislativo y el poder judicial; concretamente entre el Congreso de la República, Institución creada para producir las leyes que rigen los destinos del país y de los colombianos y la Corte Constitucional, alto Tribunal que tiene como fin esencial la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución sobre las demás normas que expidan las autoridades administrativas, sobre las decisiones de los tribunales de justicia y sobre las mismas leyes que expida el propio Congreso de la República.

El trabajo de investigación que se propone realizar pretende Analizar y determinar las causas y consecuencias del conflicto de poder entre las Cortes Constitucional Colombiana y el Congreso de la República

## **1.2 Planteamiento del problema**

En el Estado colombiano tiene una estructura que muestra una separación de poderes y una colaboración armónica de las mismas; armonía que se encuentra rota desde el inicio de la Nueva Constitución que la generó.

El Artículo 113 constitucional expresa: “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” (Legis, 2107)

Si nos atenemos a la teoría de Montesquieu, con su valioso aporte al Derecho Constitucional y a la Ciencia Política, la teoría tripartita, en Colombia, con la Norma Superior se cumple ese

postulado: La Rama legislativa hace la Ley, el ejecutivo la hace cumplir y la rama judicial resuelve las controversias o declara el derecho en litigio. (Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 2015)

Aunque en la época actual, el Estado moderno ha rebasado esta división tripartita, por cuanto tiene funciones más amplias como a) la función fiscalizadora representada por la Contraloría General de la República y en el Ministerio Público (Lizarralde, 1960) b) las funciones económica o de intervención en la explotación de las industrias, el comercio y el trabajo, mediante la planeación técnica y científica, que envuelve procedimientos nuevos, distintos a la labor legislativa o a la pura ejecución de la ley, c) la función diplomática, de dirección y desarrollo de la política internacional, esta función, dice el profesor Luis Carlos Sáchica, escapa a la división tripartita señalada por el Barón de Montesquieu (Sáchica Aponte, 1992)

; y c) la función financiera y fiscal, para el recaudo, distribución, inversión y vigilancia de los recursos tributarios a través de organismos especializados.

Para los fines de esta investigación nos centraremos, muy especialmente en el estudio de las ramas legislativa y judicial, y más específicamente a las tareas que les corresponden al Congreso de la República y a la Corte Constitucional para precisar el alcance y las limitaciones en el ejercicio de cada una de ellas y determinar los actores que han dado nacimiento al conflicto de poder entre ambas instituciones y las consecuencias que este problema ha traído para la institucionalidad del país.

El artículo 114 señala las atribuciones del Congreso de la República y dice: Corresponde al Congreso, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la Administración (Rama ejecutiva). El Congreso de la República está integrado por el senado y la cámara de Representantes.

En Colombia, la Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, La fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Así lo señala el artículo 116 Constitucional. (Gómez Sierra, 2013);

Es precisamente en la aplicación de esta parte del artículo en el que se inicia el conflicto de poder entre El Congreso y las altas Cortes pero el énfasis se muestra más crítico en la lucha de poder político que se ha planteado entre la Corte Constitucional y el Congreso de la República-

La Constitución de 1991, trajo consigo profundos cambios en la estructura y funcionamiento del Estado y especialmente en la organización y funcionamiento del Aparato Judicial. Hasta ese año, la Administración de Justicia sólo contaba con dos altas cortes: La Corte Suprema de Justicia que administraba justicia de cierre, en lo civil, en lo penal, en lo laboral y una sala especial la Constitucional que era la encargada de declarar la exequibilidad o no de la leyes aprobadas por la rama Legislativa y el Consejo de Estado cuyo papel era administrar justicia en el campo de lo contencioso administrativo.

La Asamblea Nacional Constituyente estableció la existencia de cuatro (4) altas cortes: La Constitucional, que dirige la jurisdicción Constitucional; la Suprema de Justicia, tribunal Supremo de la jurisdicción Ordinaria; el Consejo de Estado, máximo ente en lo contencioso administrativo e instituyó un nuevo tribunal creando el Consejo Superior de la Judicatura a la que dotó de dos salas: La sala Administrativa, que responde por la función administrativa de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria cuya función es decidir en juicio por las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios judiciales y por los abogados.

La nueva Constitución, estableció además, varias acciones judiciales tendientes a la protección de los derechos fundamentales de las personas, a lograr la aplicación real de las

leyes y los actos administrativos; proteger los derechos e intereses colectivos y procurar reparar los daños ocasionados al grupo, unas veces por la vía de la os o colectivos de personas.

El trabajo de investigación pretende si e Analizar los factores que han determinado la perdida de legitimidad del Congreso de la República y de la Corte Constitucional en Colombia

Se trata de explicar si el estado conflictivo entre las Corte Constitucional y el congreso de la República, si la permanente puesta en entredicho de las decisiones del congreso de la República decisiones, unas veces por la vía de la declaración de inexecuibilidad de las leyes, otras asumiendo un poder legislativo que no tiene, garantiza el cumplimiento de estos fines superiores que le ha traza la Constitución política y que reconoce la propia Corte Constitucional.

Surge entonces la pregunta que sintetiza el problema

¿Cuáles son los Factores que han originado la perdida de legitimidad de la justicia en Colombia a partir del conflicto de poder entre el Congreso de la República y de la Corte Constitucional?

### **1.3 Justificación.**

Las razones que han dado lugar a esta investigación son en primer lugar dar respuesta al interrogante del problema y es dar a conocer si el conflicto de competencias que se han presentado entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional en Colombia ha deslegitimado la actividad de ambas instituciones, y ha provocado la ausencia de credibilidad en la actuación tanto del Congreso de la república como de la Corte constitucional

En segundo lugar es el referente a la ampliación del horizonte teórico del fenómeno; comparar paradigmas y modelos de solución a la problemática que se han dado en otras latitudes.

Finalmente el criterio metodológico que tiene que ver con la estrategia para el análisis de las variables y la explicación de conclusiones; el empleo de la investigación cualitativa como método y estrategia de exploración, descripción, análisis, determinación, explicación e interpretación de un fenómeno que ha signado la vida de la justicia y del derecho en Colombia

#### **1.4 Objetivos**

##### **Objetivo General**

Determinar los Factores que han originado la perdida de legitimidad de la justicia en Colombia a partir del Conflicto de poder ente el Congreso de la República y de la Corte Constitucional

##### **Objetivo Específicos**

1. Determinar las consecuencias políticas del conflicto de competencias entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional de Colombia.
2. Evaluar el control político que ejerce la Corte Constitucional sobre el Congreso de la República
3. Establecer el alcance de la Investigaciones que hace el Congreso de la República sobre las conductas delictivas de los magistrados de la Corte Constitucional

## **1.5 Hipótesis**

Los factores que han determinado la deslegitimación de la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el congreso y la Corte Constitucional son:

La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización.

El control político y jurídico que ejerce la Corte Constitucional sobre el congreso de la República.

La pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional.

Poder político del Congreso.

## **1.6 Variables**

La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización.

La pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional.

Poder político del Congreso

## **1.7 Marco Conceptual**

La nueva Constitución Política, de Colombia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1991, trajo profundos cambios en la vida social, económica, política y jurídica del país; ella estructuró la distribución del poder de manera que hubiese una división funcional y autónoma con colaboración armónica de las mismas; sin embargo dejó plasmada la posibilidad de que los poderes entrarán en conflicto, como en efecto ha sucedido.



Artículo 3°. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece

La definición denota la amplitud del concepto de soberanía, que, como tal, viene utilizándose en el tiempo, siempre con algunas variaciones a lo largo de la historia en su intento de justificar el devenir del sujeto de la soberanía: el pueblo, la Nación, el Estado

Es Juan Jacobo Rosseau quien trae el concepto de soberanía popular y apoyado en el religioso francés Emmanuel Joseph Sieyès se arraiga además la idea de soberanía nacional, ambos conceptos se emplean en las constituciones modernas, En Colombia, la Constitución de 1991 valida el criterio de soberanía popular; es así como desde el preámbulo se reafirma esta decisión cuando expresa; el Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano. Este poder del pueblo se encarna en el Estado formado de acuerdo con la tradición por los tres elementos tradicionalmente aceptados: territorio, pueblo y soberanía, entendida como ejercicio del poder

De esta noción emerge la figura del Presidente de la República quien encarna y representa el Estado por ello, el artículo 115 de la Carta Política expresa. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Gobierno nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

El artículo 116 de la Constitución quedará así: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, \*Comisión Nacional de Disciplina, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. \* Acto Legislativo 02 de 2015 Artículo 26. Concordancias, vigencias y derogatorias. Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial” en el artículo 116 de la Constitución Política.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

Artículo 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.

Artículo 133. Acto Legislativo 1 de 2009, artículo 5°. El artículo 133 de la Constitución Política quedará así: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura

El Artículo 228 de la Carta Política expresa textualmente: La justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (Gómez Sierra, 2013).

Es en la interpretación y en el ejercicio de la desconcentración y autonomía en la que se ha dado inicio el conflicto de competencias que tiene sumidas a las Cortes en una profunda crisis de autoridad, de confiabilidad, de legitimidad, de eficiencia y que ha traído como una consecuencia directa que el legislativo haya suprimido a partir del 1º de enero de 2016 al Consejo Superior de la Judicatura, una de las cuatro Cortes creadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte Constitucional en sentencia del 5 de febrero de 1996, había expresado que “uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de estos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones, y por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro de un tráfico jurídico y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sean solo

debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver”

Es aquí, en este imperativo jurisprudencial de la Corte Constitucional en el que esta investigación adquiere importancia, se trata de saber si la Administración de justicia, debido a este conflicto de intereses que investigamos ha perdido la confianza de los asociados, si la administración de justicia en Colombia es seria, eficiente y eficaz, si el conflicto de competencias ha llevado a la ausencia de legitimación de sus fallos.

La Constitución de 1991 modificó profundamente la organización institucional del Poder Judicial en Colombia. Hasta ese momento, la administración de justicia contaba con dos altas cortes: por un lado, la Corte Suprema de Justicia, encargada de todo lo relacionado con la casación y con el control abstracto de constitucionalidad, y, por el otro, el Consejo de Estado, que tenía a su cargo la administración de justicia en el campo de lo contencioso administrativo. La nueva Constitución dispuso que existirían cuatro altas cortes: la Corte Constitucional, que es la cabeza de la jurisdicción constitucional; la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y, en esa medida, continúa a cargo de las labores de casación; el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo en materia de lo contencioso administrativo; y el Consejo Superior de la Judicatura, el cual cuenta con dos salas: la Sala Administrativa, que responde por la administración de la Rama Judicial, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que tiene a su cargo el juicio de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales y por los abogados. Además de lo anterior, la Constitución creó una serie de acciones judiciales. Así, creó la acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales de las personas, que funciona a la manera del recurso de amparo en los demás países de la región; la acción de cumplimiento, que tiene por fin lograr la aplicación real de las leyes y los actos administrativos; la acción popular, dirigida a la protección de los derechos e intereses colectivos; las acciones de grupo, con el fin de procurar el resarcimiento de los daños ocasionados a colectivos de personas; y las acciones de pérdida de investidura,

que tienen por objeto solicitar que la justicia le retire la calidad de congresistas a aquellos representantes que hayan incurrido en diferentes causales establecidas por el ordenamiento jurídico. Este conflicto de competencias que se viene presentando entre las Cortes de justicia colombiana, también ha ocurrido en otros países y la solución que se ha encontrado es a favor del Estado Constitucional, presentándose el fenómeno de la constitucionalización de la justicia.

Puede citarse entre otros en Italia en 1948, primer país en experimentar el fenómeno del conflicto de competencias entre las Cortes, se conoce con el nombre de “guerra fría entre las Cortes” (*guerra fredda le due Corti*), se hace referencia a la desobediencia de la Corte de Casación, equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia, frente a las llamadas sentencias interpretativas, para evitar excluir una norma del ordenamiento, la Corte Constitucional adecuaba su sentido al nuevo modelo de Estado Social, surgido después de la segunda guerra mundial.

En la década de los años 50 el parlamento italiano estaba controlado por una mayoría conservadora que concebía las recién expedidas normas constitucionales, como programáticas, es decir que no había que ponerlas en práctica inmediatamente, sino como un conjunto de normas que requerían un desarrollo legislativo ulterior; esta concepción era compartida por la Corte de Casación (equivalente a la Corte Suprema de Justicia colombiana) y por ello su oposición a la Corte Constitucional. A este conflicto de competencias, el conocido tratadista Pietro Calamandrei (Calamandrei, 2004) le denominó obstruccionismo de la mayoría parlamentaria, pero no quiso denominarlo conflicto de competencias por considerar que dicha figura del derecho procesal no puede presentarse en relación con una Corte Constitucional supremo intérprete de la Carta. El problema tuvo vigencia hasta 1970, dirimiéndose el conflicto en favor de los derechos fundamentales, con la aceptación definitiva entre “operadores y juristas” del denominado “diritto vivente” (derecho viviente) o

adecuación de los preceptos constitucionales a las transformaciones y necesidades sociales del momento. (Ferrajoli, 2013)

En Alemania, en 1949, el conflicto de competencias, con el nombre de *“Der Krieg Der Richter”* (la guerra de los jueces) lo inició la consagración constitucional de la tutela contra sentencias *“(verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheindungen)”*, pues en ese país el servicio de la judicatura al poder político había sido tan evidente que tuvo que consagrarse un mecanismo (la tutela) que controlase los peligros del poder judicial con violación de los derechos humanos como había ocurrido en el régimen nazi precedente

El tratadista iuspositivista (Kelsen, 2006), Al descartar de este modo todo juicio de valor ético, la teoría del derecho se convierte en un análisis lo más exacto posible de la estructura del derecho positivo; desmitificó la justicia neutral de los jueces y del derecho y la ascendencia napoleónica de los jueces alemanes, con formación positivista permitieron la instrumentalización de la judicatura. Hoy día la tutela sólo ‘procede en Alemania por lo que se denomina error notorio, lo que equivale en Colombia a la vía de Hecho.

En España, al expedirse la nueva Constitución, en 1978, el Tribunal Supremo (Corte Suprema de Justicia en Colombia), tenía poca confiabilidad por su compromiso abierto con el régimen del general Francisco Franco, sus jurisprudencia durante el período 1964 – 1974 habían acogido y actuado según los principios franquistas.

Esta dependencia sumada a la falta de formación constitucional de jueces, magistrados determinó que el Constituyente en 1978 dejara en manos del Tribunal Constitucional (Corte Constitucional en Colombia) la tarea de constitucionalizar la justicia, a través del Recurso de Amparo (Acción de Tutela) contra las decisiones judiciales con el propósito de rescatar los derechos fundamentales. El recurso, es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional siendo el objeto de este proceso la protección frente

a vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución

De acuerdo con tratadistas españoles (hacer referencia) señalan que la “guerra entre las Cortes también ha representado allí un duro enfrentamiento; sin embargo, éste ha ido disminuyendo paulatinamente, en la medida en que al Tribunal Supremo (Corte Suprema de Justicia) han ido ingresando magistrados con la conciencia constitucional y una mejor formación en derechos fundamentales

En el año 2007, El Congreso de Diputados (Parlamento español), El Congreso entre nosotros, aprobó una reforma constitucional que ratifica la Acción de Tutela contra toda actuación judicial y protege al tribunal Constitucional frente a cualquier desobedecimiento o demanda por sus actuaciones.

En los países tomados como referencia, España, Francia, Italia, Alemania, Méjico, Argentina los conflictos de competencia (Choque de trenes) se han superado fundamentalmente porque se ha aceptado:

- 1.- La falibilidad de los jueces de cualquier nivel y por tanto es viable la tutela contra decisiones judiciales.
- 2.- La necesidad de que una Instancia máxima sea el órgano de cierre en la interpretación de los derechos fundamentales.
- 3.- La omnipotencia y el carácter normativo de la Constitución y por tanto de aplicación inmediata de sus preceptos por parte de todos los jueces.
- 4.- La superación del apego a la Ley y su desarrollo en las jurisprudencias constitucionales.
- 5.- La prevalencia de la democracia sustancial sobre la democracia formal

6.- El blindaje del poder judicial frente a las presiones de las mayorías y a los poderes que de ellos se derivan: Legislativo y Ejecutivo.

7.- El poder ejercido por el Congreso de la República sobre los otros poderes o ramas creando un desequilibrio de poderes que plantea de entrada un conflicto político

### **1.8 Tipo de Investigación**

El tipo de investigación que se propone en este trabajo es cualitativa se trata de aprovechar las fortalezas de este tipo de investigación, Este modelo de Investigación presenta una perspectiva más amplia, marza teórica, mejor y mayor rigor para el uso de los datos.

El método utilizado en esta investigación es la entrevista semiestructurada, que será realizada en dos niveles: el congreso de la República Y la Corte Constitucional

Haciendo una apretada síntesis de la investigación cualitativa, se puede señalar que la investigación de tipo cualitativa, explora los fenómenos en profundidad, se trabaja en ambientes naturales, no hay lugar para la experimentación, ; los significados se extraerán de los datos recogidos en entrevistas abiertas y estructuradas, para que la riqueza interpretativa fluya.

En el sentido más amplio la metodología cualitativa que se seguirá en este trabajo de investigación tratará de identificar la naturaleza profunda de la realidad de la justicia colombiana, más exactamente al conflicto de poder existente entre las Cortes colombianas, especialmente la Corte Suprema de justicia y la Corte Constitucional, buscando analizar, explicar y determinar el origen, desarrollo y consecuencias del conflicto de poder.



## **1.9 Modelo de investigación**

El modelo que se aborda en la presente investigación es Descriptivo pues se pretende llegar a conocer los aspectos fundamentales teórico –

El método de investigación es la entrevista semiestructurada. Entrevistas semiestructuradas -El investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. -Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar. -El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural. -Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.

Determinar el objetivo por alcanzar.

Elegir los sujetos que se van a estudiar, es decir, elegir el objeto de estudio.

Elegir los instrumentos y procedimientos aplicables al mismo

Interpretar la información recolectada o resultados obtenidos —Etapas Hermenéutica—

Aplicación en las ciencias sociales.

Criterios de calidad. El término rigor de la investigación está más centrado en la relevancia del estudio que en el rigor metodológico.

Fuentes de teoría. No se plantea una teoría previa, sino que esta nace de los datos.

Tipos de conocimiento utilizado: Utilizan un conocimiento táctico, basado en intuiciones, sentimientos, etc. Instrumentos de investigación. El propio investigador es el instrumento, perdiendo en objetividad pero ganado en flexibilidad.

Diseño. Partiendo del supuesto de múltiples realidades y de la interacción entre investigador-investigados que influyen y se modifican mutuamente, insisten en un diseño abierto, no estructurado, que se va desarrollando a medida que evoluciona la investigación.

Escenario. Se lleva a cabo la investigación en un contexto natural, Colombia, en el lugar donde ocurren los hechos.

### **1.10 Diseño de investigación**

La investigación cualitativa seleccionada para este trabajo de investigación, es quizá la más flexible pues abarca gran cantidad de métodos y diseños.

Los estudios documentales y las entrevistas entre otras, son las técnicas más usadas en este tipo de investigación; de tal manera que la recolección de la información y recopilación bibliográfica juegan un papel importante en el diseño cualitativo.

Se trata de mirar los escenarios y las personas de manera holística, para comprender más adecuadamente el fenómeno que se investiga. En el caso que nos ocupa los actores son los propios magistrados de las cortes, pero también la sociedad colombiana de quien se dice ha perdido credibilidad en las decisiones de los jueces, situación que trae consigo la deslegitimación de dichas cortes. Vale decir, que además de la información documental, Jurisprudencias, doctrinas, politólogos, es necesario consultar los conceptos que sobre esos tópicos tiene la comunidad en general es necesario entonces la realización de entrevistas abiertas.

## 1.11. Matriz de congruencia

Título: “CONFLICTO DE PODER ENTRE EL CONGRESO Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA”

Tabla 1 Matriz de congruencia

Problema de investigación	Preguntas de investigación	Objetivo general	Objetivos específicos	Marco teórico	Hipótesis	Variables	Método	Instrumento de Medición
<p>Desde su aprobación, la Constitución Política de Colombia dejó planteado un <b>Conflicto de poder</b> entre el poder legislativo representado por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, pues ésta ejerce control jurídico y político sobre el Congreso, al poder revisar y revocar las decisiones de dicho ente, lo cual provoca la deslegitimación de ambas instituciones.</p> <p>El congreso por su parte investiga a los magistrados de la Corte por posibles conductas punibles, pudiendo suspenderlos de la magistratura</p>	¿Cuáles son los Factores que han originado la pérdida de legitimidad del Congreso de la República y de la Corte Constitucional?	Determinar los Factores que han originado la pérdida de legitimidad de la justicia a partir del conflicto de poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional	<p>Determinar las consecuencias políticas del conflicto de competencias entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional de Colombia.</p> <p>Evaluar el control político que ejerce la Corte Constitucional sobre el Congreso de la República</p> <p>Establecer el alcance de la Investigación penal que realiza el Congreso de la República sobre las conductas delictivas de los magistrados de la Corte Constitucional</p>	<p>Ciencia Política y poder</p> <p>El Príncipe, de Maquiavelo</p> <p>Cazorla, Hans Morgentau, David Laitin, Duque, Max Weber, Trujillo, Niklas Luhmann, Foucault, Zamorano &amp; Roger, Thomas Hobbes, Bodenheimer, Naranjo, Chalco, Norberto Bobbio</p> <p>El Estado social de Derecho.</p> <p>Alvarez &amp; Tur, Caballero y Anzola, Brey, Velasco, Unad, Montesquieu, Torres, Villa, Burdeau, Vladimiro Narnajo Mesa</p> <p>La estructura del Poder en Colombia. Libardo Rodríguez, Diego Younes Moreno</p> <p>- Reforma Constitucional. Libardo Rodríguez,</p> <p>Las decisiones políticas de las Cortes. Gómez Sierra – Galindo H. Julio</p>	<p>Los factores que han determinado la deslegitimación de la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el congreso y la Corte Constitucional son:</p> <p>La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización.</p> <p>El control político y jurídico que ejerce la Corte Constitucional sobre el congreso de la República.</p> <p>La pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional.</p> <p>Poder político del Congreso.</p>	<p>La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización.</p> <p>La pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional.</p> <p>Poder político del Congreso</p>	<p>El tipo de Investigación es cualitativa</p> <p>El método utilizado en esta investigación es la entrevista semiestructurada, que será realizada en dos niveles: el congreso de la República Y la Corte Constitucional</p>	<p>El instrumento será una entrevista semiestructurada que se practicará a 5 congresistas y a cinco magistrados de la Corte Constitucional</p>

## CAPITULO II. EL PODER POLÍTICO EN COLOMBIA

### 2.1. Ciencia política y poder

La Ciencia política es una disciplina, inscrita en el marco de las ciencias sociales y que centra su análisis en el estudio teórico y práctico de la política, del poder, de los sistemas políticos y de las conductas políticas.

Naturalmente, al momento de determinar cuál es la relación entre Ciencia política y poder, el primer paso a dar es examinar la noción de Ciencia política; esta es considerada como “una disciplina que tiene como objetivo estudiar, analizar y entender los fenómenos políticos y las relaciones de poder” (Andes, 2018). Se dice que la ciencia política moderna tiene su origen en la obra titulada *El Príncipe*, de Maquiavelo (Zamitiz, 1999).

Ahora bien, resulta posible afirmar que el concepto de *Ciencia política* guarda relación con el concepto de *poder*, esto por cuanto se dice de la ciencia política que su objeto de estudio, la materia de que se ocupa esta ciencia es el “problema básico del uso del poder. Su ejercicio legítimo, a través de las instituciones libremente establecidas y elegidas; su ejercicio meramente legal, siguiendo los procedimientos prescritos (...) y su ejercicio al margen de la legalidad y/o de la legitimidad (Cazorla, 2008, págs. 25-26)”. Dicho de otra manera, el poder es uno de los temas centrales de la ciencia política junto con las demás discusiones o tópicos que puedan surgir a partir del mismo.

Se ve, entonces, que la ciencia política y el poder no son conceptos aislados ni mucho menos incompatibles. Por el contrario, el poder y los problemas que surgen de él son materia de estudio para la Ciencia política.

El abogado y político estadounidense Hans Morgentau ha dicho acerca del tema que ocupa a la Ciencia política que “la Ciencia Política se relaciona o vincula con el problema del Poder y debe adaptarse a los criterios cambiantes de los tiempos” (Dana, 1968, pág. 185)

Sin embargo, es menester aclarar que aunque, como ya se vio, la Ciencia Política se ocupe de la pregunta por el poder, su ejercicio, su legitimidad y demás cuestiones ligadas a él; éste no es el único tema del que se ha encargado la Ciencia Política. De hecho, se ha llegado a aseverar que la ciencia política, como ciencia, no tiene un objeto claro y definido.

Además de las disputas intelectuales respecto al objeto cualificante de la ciencia política y de los enfoques teóricos múltiples y en ocasiones contrapuestos, en los desarrollos de la ciencia política en el último medio siglo se han multiplicado las líneas, las áreas y los subcampos disciplinares de tal forma que se ha llegado a plantear, como lo hace David Laitin (2004), que existe una anarquía y un caos disciplinar. (Duque, 2014, pág. 381)

En síntesis, la ciencia política está relacionado con el poder porque éste sirve de objeto de estudio, quizás no el único pero sí es un tópico ampliamente desarrollado por la ciencia política, sobre todo porque se ha entendido por política “la naturaleza, la acumulación, la distribución, el ejercicio y el control del Poder, en todos los niveles de la interacción social, con especial énfasis sobre el poder del Estado” (Dana, 1968, pág. 184).

## **2.2. Conceptualización**

Para lograr una claridad teórica acerca del concepto de *poder político*, es necesaria una revisión previa de lo que significa el *poder*, el cual contiene un aspecto político además de

que “los modernos sociólogos y juristas también han reconocido la esencia sociológica y jurídica del poder, de modo que no solo es jurídico y político, sino, también sociológico” (Chalco, 2014, pág. 186). Dicho en otras palabras, para saber qué es poder político, primero hay que preguntarse acerca de qué es *poder*. Se procederá, entonces, a consultar las teorizaciones acerca del poder de diferentes autores que se han dedicado al estudio del mismo.

Dentro estos teóricos se encuentra el sociólogo Max Weber, quien “afirma que rechazando el reconocimiento de una naturaleza social, las estructuras de poder solo pueden entenderse como voluntades arbitrarias que se imponen sobre otras voluntades; estas voluntades se traducen en estructuras de poder o dominaciones” (Trujillo, 2009, pág. 13). Weber, entonces, concibe al poder como la dominación de unos sujetos, que deciden y actúan de acuerdo a su voluntad, sobre otros, que se ven en la obligación de obedecer los mandatos de aquellos. Como definición, establece que el poder es “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Trujillo, 2009, pág. 23).

En su obra *Poder*, Niklas (Luhmann, 1995) habla acerca del poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, de la siguiente manera:

“Basta con entender al poder —como a cualquier otro medio de comunicación simbólicamente generalizado— en términos de limitación del ámbito de selección del otro. (...) El poder no es concebible como una propiedad o capacidad de uno solo de los involucrados en la relación. Antes bien, el poder ha de ser entendido como una comunicación dirigida por un código. (pág. XXIII)

Por otra parte, en la obra de (Foucault, 2002, pág. 28), el poder ha sido relacionado con el saber, así lo afirma cuando dice que “poder y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder”. “Así, Foucault ofrece una descripción, una construcción científica de cómo opera el poder, (...). Quizá porque, como él mismo reconoce, no está interesado en construir una propuesta teórica general del poder, sino más bien en estudiar su arqueología y consecuente genealogía” (Zamorano & Rogel, 2013, pág. 963).

En *El Leviatán*, Hobbes (1983, p. 223) afirma que “durante el tiempo que los hombres viven sin un poder, que les obligue a todos al respeto, mantienen la condición que se llama guerra; una guerra de todo hombre contra todo hombre”. (Trujillo, 2009, pág. 84)

Una última definición que se puede mencionar acerca de qué es *poder* es la otorgada por Bodenheimer, quien también habla en términos de imposición de la voluntad. Así, pues, ve el *poder*, a partir de una visión sociológica, como “la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. (Naranjo, 2000, pág. 119).

Después de una breve revisión de las diversas conceptualizaciones del *poder*, es momento de ocuparse de la teorización alrededor del concepto más específico de *poder político*. Existe un disenso doctrinal sobre la definición de dicho concepto, de tal magnitud que “el economista y polemista francés Bastiat ofreció un millón de lises de oro a quien fuera capaz de dar una noción convincente del poder, y no se tiene constancia de que se haya llegado a otorgar el premio” (Chalco, 2014, pág. 188). Sin embargo, sí es posible citar algunas definiciones relevantes para el presente proyecto investigativo.

En primer lugar, cuando Burdeau se refirió al poder político, lo hizo explicando que toda sociedad “se ordena en torno a un cierto ideal de vida común, se expande a un estado de conciencia nacido de la solidaridad por la cual sus miembros se sienten unidos. Pero ella no puede vivir y convertirse en una realidad histórica, si no es estimulada por una fuerza impulsadora que desencadene y controle los movimientos por los cuales es agenciado el organismo social” (Naranjo, 2000, pág. 82); la fuerza de la que habla no es otra cosa que el poder político. Es decir, que éste aporta cohesión al tejido social, propiciando así su duración en el tiempo.

Al hablar acerca de poder político se debe advertir que parte importante de este concepto es el elemento de la fuerza; Como se mencionó anteriormente cuando se abordó la conceptualización del *poder* como concepto general que engloba al *poder político*, una parte determinante consiste en que quienes obedecen no lo hacen por decisión propia, sino que requiere de la imposición de la voluntad por parte de aquellos que detentan el poder, de la coerción y de la limitación de elección de los subordinados. Es por ello que se ha definido al *poder político* como aquel que “consiste en el gobierno directo de los hombres, bajo la amenaza de sanciones penales” (Chalco, 2014, pág. 191). Se evidencia, entonces, que los que obedecen los mandatos de las autoridades lo hacen porque están siendo obligados a ello. En efecto, Naranjo describe al poder político como “un poder cuya obediencia está asegurada por sanciones impuestas al individuo y no a sus bienes” (Naranjo, 2000, pág. 130).

Al respecto de la fuerza o coerción que impulsa a los individuos a seguir órdenes, es conveniente mencionar la concepción weberiana según la cual el poder político “tiene el monopolio de la violencia, lo cual equivale a afirmar que la violencia es su medio específico y exclusivo” (Trujillo, 2009, pág. 84).



De lo anterior se sigue otro aspecto importante relativo al poder político: la distinción de dos grupos conformados, en primer lugar, por quienes dan las órdenes y ejercen la fuerza o coerción y, en segundo lugar, por aquellos que no tienen más opción que obedecerlas. Esto es así por cuanto éstos piensan que aquellos están legitimados para hacerlo, de hecho, se ha dicho que el poder político “aparece cuando aquellos que obedecen creen, además, que es normal para ellos obedecer y que ello es bueno, justo y legítimo” (Naranjo, 2000, pág. 85).

Después de haber revisado cuál es la concepción que autores como Weber, Luhmann, Foucault y Bodenheimer tienen de la noción general del *poder*, y luego de precisar qué se entiende por *poder político*, junto con los dos elementos que conforman su esencia, a saber, la distinción entre quienes dan las órdenes y quienes las obedecen, así como también el ejercicio de la fuerza por parte de aquellos; se puede concluir diciendo que el poder implica una relación en la que prevalece la voluntad del emisor y la permisividad del receptor de aceptar la influencia. En su concepción más restricta, el poder implica fuerza física sobre el receptor, caracterizada como coacción o dominación. En un ámbito más moderno esta relación de poder admite la discrepancia u oposición por parte del receptor. El poder político es la demostración de la división de la sociedad y la necesidad de cohesión, esto es, el ejercicio de autoridad para el correcto funcionamiento de la vida en sociedad.

### **2.3. Poder político y democracia**

Para poder relacionar efectivamente al poder político con la democracia, hay que entender, como primera medida, qué es la democracia así como también resulta provechoso no perder de vista el concepto de poder político, ya explicado anteriormente.

En la antigüedad, para los griegos la democracia significaba “lo que la palabra quiere decir literalmente: poder del demos” (Bobbio, Teoría general de la política, 2009, pág. 402), es decir, poder del pueblo; cuando ellos pensaban en democracia, se imaginaban al pueblo reunido tomando personalmente las decisiones. Sin embargo, en la actualidad se tiene un tipo distinto de democracia, la representativa.

En efecto, se distinguen dos tipos de democracia, por un lado, la democracia directa, y por otro, la democracia representativa. El politólogo italiano Sartori (2007) ha dicho que el primer tipo “es un ejercicio en propio y, en este sentido, directo del poder” y que el segundo, en cambio, “es un sistema de control y de limitación del poder” (pág. 201)

Como se explicó, la democracia directa fue la acogida en la Antigüedad por los griegos pero evolucionó hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos por democracia. Al respecto, Bobbio (2009) atribuye ese cambio a “la mutación histórica [que] consistió en el paso de la ciudad-Estado a los grandes Estados territoriales”, adicionalmente cita a Rousseau quien explica que “una de las razones por las que una verdadera democracia nunca había existido y jamás existirá, radicaba en que exigía un Estado muy pequeño ‘en el que el pueblo sea fácil de congregarse y en que cada ciudadano pueda fácilmente conocer a los demás’ ” (pág. 407).

Es precisamente Bobbio quien ofrece una conceptualización de la democracia y la define en los siguientes términos:

La democracia es el “conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” ya que “todo grupo social tiene la necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo”. Desde esta perspectiva, se subraya que la democracia consiste –en

primera instancia (visión mínima procedimental) pero no exclusivamente—en un conjunto de procedimientos que sirven para determinar la forma en que se maneja y distribuye el poder político. (Instituto Interamericano de Derechos , 2012, pág. 30)

A partir de lo anterior, se evidencia la relación existente entre democracia y poder político, siendo aquella la manera en que se determina quién y cómo se ejerce el poder político. En un estado democrático, el pueblo “no es solo origen y portador del poder político, sino que también lo ejerce. En otros términos, el pueblo no solo legitima sino que mediante su participación en iniciativas (peticiones e iniciativas legales) o decisiones (elecciones y votaciones) también gobierna, es decir, colabora en la formación de la voluntad estatal” (Caballero & Anzola, 1995, pág. 134). Otra definición de democracia, que también muestra el nexo entre ésta y el poder político, es aquella según la cual es “una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los ciudadanos de una nación. (Banco de la República, 2015)”

En resumen, la democracia es de origen griego y aunque en la modernidad no se implemente de la manera en que originalmente fue concebida, sí conserva la misma idea básica según la cual el poder político reposa en manos del pueblo. Se ve, además, la conexión entre poder político y democracia cuando se entiende por ésta una forma o un conjunto de reglas que determina cómo se toman las decisiones.

## **2.4. El poder como Objeto de Control**

Una vez revisado el concepto de poder político como aquel que está en manos de un sector reducido de la sociedad, legitimado para ello (en la sociedad moderna está a cargo del Estado) y que impone su voluntad mediante la fuerza o coerción sobre quienes obedecen sus órdenes porque ven en ellos una autoridad legítima; se debe aclarar que quienes detentan el poder no deben hacerlo de manera absoluta, tienen que existir límites o, dicho de otra manera, el poder debe ser objeto de control. Debe ser así, por cuanto éste es “una fuerza (...) que puede transformarse en una pasión negativa y peligrosa”. (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM)

Una de las maneras como se controla el uso del poder es, tal como se mencionará más adelante, el principio de separación de poderes bajo el planteamiento de que “al dividir el poder en distintos elementos que pueden actuar como contrapesos entre ellos mismos, no hubiese un único poder que lo ejerciera de manera independiente y en contra de los derechos ciudadanos. (Torres, 2014, pág. 88). Separando el poder en tres ramas con distintas funciones, se logran disipar los ánimos despóticos de los hombres quienes, si tuvieran en sus manos la totalidad del poder político, incurrirían en abusos y en violaciones a los derechos fundamentales de la población. En suma, lo que se propone con la separación de poderes es “que la fuerza expansiva del poder político, que concentrada en un individuo o grupo produce relaciones de dominación, puede utilizarse como antídoto contra sí misma, si el poder se distribuye en partes que contienen y canalizan la fuerza expansiva de las partes restantes” (Fuentes, 2011, pág. 54)

## **2.5. Factores de poder en Colombia**

### **2.5.1. La Constitución Política de 1991**

En medio de un contexto de crisis generalizada que vivía el país hacia finales de la década de 1980 y principios de 1990, el Gobierno Nacional de manera decidida tomó las riendas para reformar la Constitución del año 1886, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991.

Amplios sectores de la sociedad estuvieron representados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sin embargo, para la historia quedó escrito que no fue suficiente la representación de campesinos, estudiantes, obreros y demás sectores populares. Es de destacar la notoria ausencia de las primeras guerrillas del país: FARC, ELN y algunos sectores del EPL, quiénes negaron su participación al no acceder a las condiciones de desmovilización que les fueron ofrecidas por el Gobierno Nacional. Los anteriores factores, impidieron que, en los años subsiguientes a la expedición de la Carta Política de 1991, se lograra acabar con varios de los factores de violencia del país.

Los principales grupos políticos y sociales del país buscaban, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de la totalidad del Estado Colombiano, el restablecimiento del orden público, económico y social, el respaldo del pueblo a las instituciones y la estabilidad política que no se había logrado con el acuerdo del Frente Nacional. Estos acuerdos, que incluían a diversos sectores de la población, abrirían camino para llevar adelante el modelo económico aperturista.

La Constitución Política de 1991, como lo afirma el autor Jorge Child, se caracteriza porque "...apunta hacia un modelo de descentralización, participación democrática, y

privatización e internacionalización de la economía con el concepto de eficacia para redefinir la función social de las empresas y de la propiedad. Paralelamente a la libertad de empresas se compromete el Estado en la administración y prestación de los nuevos derechos sociales consagrados en este texto constitucional" (Child, 1994, pág. 25). Se conciben "los derechos como poderes en cabeza de individuos" -al decir de César Gaviria-, o, como mejor afirma Child, se inscribe en "la filosofía postmodernista que juega con la contingencia, con la micrología y con la deslegitimación de movimientos unificadores en busca de una totalidad con destino histórico" (Child, 1994, pág. 8).

Nos encontrábamos en un contexto de competencia abierta, en el que el tejido social se encontraba descompuesto y se destacaba al individuo como el empoderado para hacer valer sus aspiraciones. Sin embargo, "los individuos necesitan el respaldo de organizaciones gremiales, sindicales y políticas para validar sus derechos" (Child, 1994, pág. 30)

La prosperidad debe partir desde el individuo, quien con su accionar y su participación, se constituye en la fuente de creación de la equidad social. Aparece el individuo y la participación ciudadana en el terreno político, mediante mecanismos individuales como el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato, la consulta popular, el cabildo abierto y la elección de gobernantes (Art. 103, Constitución Nacional) que, en el marco de la tradicional cultura clientelista, no ofrecen la alternativa de una real transformación de las costumbres políticas sino, más bien, el traslado del viejo esquema nacional a los ámbitos regional y local. Jorge Child demuestra su preocupación quién resalta que "frente a la opción de una reglobalización de la política, la nueva Constitución nos propone con mayor énfasis la atomización de los grandes partidos y movimientos políticos en círculos de amigos y vecinos dentro de un pragmatismo de grupo y de taller...Claro que esta

microutopía vendrá a consolidar la realidad de los grandes poderes multinacionales dominantes anónimos, los cuales son los que en realidad moldean la sociedad y desempeñan el papel de persuasores escondidos de su opinión pública" (Child, 1994, págs. 47-48).

Child concluye que: "En economías subdesarrolladas, sin infraestructuras básicas y permanentes de producción, la intervención del Estado en la construcción económica nacional debe prevalecer sobre cualquier aventura coyuntural del mercado. Pero el espíritu y la letra de la Constitución de 1991 está más del lado del mercado que de la intervención directiva del Estado en el desarrollo económico nacional" (Child, 1994, pág. 65)

En el año 1991 se aumenta la brecha entre ricos y pobres. Se destapan varios escándalos de corrupción y crece visiblemente la violencia en Colombia.

#### 2.5.2. La insurgencia y el poder

El 5 de febrero de 1991, mientras era instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, quién lanzó un crudo ataque en 6 departamentos del país, dejando un saldo de 12 atentados contra la red de oleoductos, 15 vehículos incendiados, 10 torres de energía voladas, 17 miembros de la Fuerzas Armadas muertos y 10 secuestrados. Para este momento la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar la integraban las FARC, la UC-ELN y el sector del EPL que no se desmovilizó. Habían salido de ella el M-19, el PRT, el MIR-Patria Libre y el Quintín Lame que se desmovilizaron y se reinsertaron a la vida civil. Sin embargo, hay que anotar que las organizaciones no desmovilizadas constituían, en conjunto, la mayor fuerza militar de la CGSB, tanto en número como en capacidad de acción.

Algunos de estos hechos ocurrieron en cercanías a la ciudad de Bogotá, siendo protagonistas jefes guerrilleros que llegaron a dar entrevistas en noticieros de televisión. Con estas acciones la insurgencia mostró que su potencial bélico no podía ser ignorado ni por el gobierno ni por la sociedad en su conjunto y además ganó una iniciativa política propia de cara a la propuesta de diálogo, un tanto más flexible, que había hecho el gobierno de César Gaviria.

Durante las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera paralela la guerrilla se pronunció tratando de persuadir a la opinión pública y demás actores en Colombia, con la finalidad de participar en la Asamblea, pero sin llegar al desarme. Como esta opción no se hizo realidad, durante los meses de avances en la Asamblea Nacional Constituyente, se continuaron con disputas de índole político entre el gobierno y la guerrilla, que culminó con el inicio de los diálogos entre ambos, en Caracas, el 3 de junio del mismo año. En Venezuela, llegaron a celebrarse 4 rondas de conversaciones, cada una aproximadamente de 15 días, hasta el dos de octubre.

Los elementos mencionados nos dan cuenta de una nueva situación respecto al conflicto armado con la insurgencia : 1) Por vez primera se iniciaban diálogos sin la necesaria precondition del cese al fuego ; 2) se admitía sus celebración en un país extranjero, lo cual implicaba el involucramiento, de algún modo, de actores internacionales en el conflicto colombiano ; 3) en el diálogo mismo se buscaban fórmulas nuevas de cese al fuego, reconociendo con ello otras dimensiones de las guerrillas con las que se conversaba ; 4) participaban de la mesa de conversaciones personalidades, gremios y organizaciones sociales y políticas y, 5) en la agenda de conversaciones se introducían una serie de temas centrales de la realidad nacional que le abrían espacio al protagonismo político de la Coordinadora, en condiciones nunca antes vistos en ese escenario.



La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar agrupaba a tres organizaciones disímiles que, en conjunto, no representaban un proyecto unificado, aunque eventualmente podían existir coincidencias tácticas y estratégicas y acuerdos políticos y militares de tipo coyuntural. La Coordinadora se definía como tal, una coordinación, más no frente de lucha común como sí alcanzaron a configurarlo los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por ejemplo.

Hacia el año de 1997 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- contaban con 62 frentes rurales y 4 urbanos y entre 13 y 15 mil hombres. Los frentes se agrupaban por bloques (6 en total) con un criterio estratégico militar. Cada bloque posee una estructura de mando vertical, representada por un individuo en la cima. El máximo mando lo integra el Secretariado General, compuesto por 7 personas. Este tipo de estructura le ofrece un cierto margen de maniobra autónoma a cada bloque y a cada frente, en las operaciones militares y en la política de consecución de recursos financieros. Aunque están localizadas en muchas regiones del país, su influencia mayor la ejercían en el sur.

El Ejército de Liberación Nacional –ELN-, de otra parte, para llevar adelante su proyecto, se organizó por frentes de guerra con base en criterios estratégicos militares y de desarrollo socioeconómico. En cada Frente de Guerra (5 por todos) hay frentes guerrilleros rurales (32), frentes suburbanos (3) y frentes urbanos (10). En la actualidad, en relación a su estructura, cada frente urbano y rural y cada frente de guerra tiene una dirección que depende de la dirección nacional y específicamente del Comando Central (COCE), integrado por 5 miembros. Se orientan por planes nacionales definidos colectivamente desde la cúpula. Su poder se encuentra sobre todo en el norte del país.

En relación al poder, cada organización logra su máxima fortaleza principalmente en las zonas rurales. Sus modos de operar no les han permitido hacer una presencia política y

social en las áreas urbanas, aunque sí lo han intentado a través del impulso de grupos milicianos que operan dentro de las ciudades con criterios guerrilleros y en incursiones esporádicas en zonas de la capital de la República. Así las cosas, su poder real es de tipo regional y bastante alejado de la opinión pública urbana que representa la mayoría del país. El historial de la insurgencia en Colombia les ha permitido asimilar y resignificar las características culturales de muchas regiones, con lo que se cierran hacia adentro y se separan de las demás franjas de la población colombiana. El drama de la insurgencia está en que no ha encontrado los caminos para superar su marginalidad social. La insurgencia mantiene su ideal de recurrir insistentemente a la violencia armada para tratar de dar a conocer sus puntos de vista como de imponer sus criterios en las zonas de más o menos control. No obstante, se constituye como su mayor debilidad dentro de la opinión ciudadana, más aún si reconocemos el progresivo distanciamiento entre la vida rural y urbana de un país que se fragmenta y rompe muchos circuitos tradicionales de interacción de estos dos ámbitos.

En un contexto de rechazo absoluto por parte de la población colombiana, contradictoriamente, los grupos guerrilleros encuentran mayor apoyo, en el presente, en los escenarios internacionales desde los cuales se dirigen al país. Desde fuera existen expectativas de diferentes sectores que aspiran a jugar un papel en la resolución del conflicto armado de nuestro país. Aun cuando se haya firmado la paz con las FARC, se está aún distante de una convivencia pacífica entre la población.

### 2.5.3. Actores Externos

No pueden explicarse los factores de poder en Colombia sin mencionar la presencia del gobierno norteamericano en nuestro país, especialmente durante la administración del presidente Ernesto Samper.

La intervención del gobierno norteamericano ya es considerada como permanente. Más allá una tradicional cooperación militar o logística y de los condicionamientos en política económica para los préstamos internacionales, la Embajada norteamericana, el Departamento de Estado y sectores del Congreso estadounidense opinan, presionan y exigen sobre de la política antinarcóticos de nuestro país, en materia de derechos humanos y sobre el desarrollo político interno.

Debido al alto volumen del narcotráfico en Colombia, el gobierno de Washington tiene como política de Estado con Colombia la lucha antidrogas, los asuntos comerciales y elementos de seguridad en control marítimo, territorial y aéreo.

La principal preocupación del gobierno estadounidense en Colombia tiene como objetivo garantizar que el sistema político colombiano no afecte el control estratégico y geopolítico del área y del subcontinente por parte de los norteamericanos. La posición geográfica de Colombia es privilegiada para tal objetivo, así como las riquezas en recursos naturales y en biodiversidad.

Nos encontramos en una posición interna donde las presiones del gobierno norteamericano y de sus políticas nos conducen a cambios estructurales de nuestro sistema político y a una relación bilateral con los Estados Unidos donde son ellos los que colocarían los términos y la agenda de la misma.

De igual forma, Colombia ha recibido presiones del Congreso de los Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, principalmente respecto de los derechos humanos. Son muchas las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, quiénes mediante informes condenan a nuestro país por sus altos índices de violencia.

Este aspecto ha crecido tanto que han abierto las puertas a actores extranjeros en la participación política, sobre todo en lo relacionado con el conflicto político y la lucha por el respeto a los derechos humanos.

Observamos una tendencia a la participación de actores foráneos en la búsqueda de una solución a los distintos factores de violencia, desigualdad e irrespeto de los derechos humanos en Colombia. Pero hacer parte de la realidad colombiana, desde cualquier perspectiva, significa asumir una postura frente al conflicto armado y a las expresiones de violencia y guerra que atraviesan a nuestra sociedad y a nuestra geografía nacional. Esto hace que nuestro particular proceso de globalización sea especialmente complejo, con un alto costo en vidas humanas y en destructividad social, mientras se reconocen los actores con sus intereses encontrados.

#### 2.5.4. El poder del Estado colombiano

Colombia se caracteriza por tener disperso los distintos factores de poder que enmarcan el orden político, económico y militar, todos los cuales dicen representar el interés general de toda la sociedad. De una u otra forma cada uno de los factores se ha visto inmerso en algún caso de corrupción o de actuación al margen de la ley.

No aparece en Colombia un agente que logre regular la sociedad o solventar los distintos conflictos que afectan la convivencia pacífica de sus ciudadanos. Muchos de los actores, se ha demostrado, actúan por un interés personal de enriquecimiento y de la búsqueda infinita del acceso al poder.

En algunas ocasiones el Estado ha tenido que actuar conforme a las presiones de actores nacionales y extranjeros que, con mayores recursos de poder, le han impuesto las reglas del juego en los campos económico, político y social. Y finalmente, si se trata de la definición de políticas oficiales, en la mayoría de los casos éstas han tenido que ver con iniciativas de tipo económico o coercitivo que favorecen los intereses de las élites, mientras que los proyectos sociales en favor de las mayorías se quedan a mitad de camino por la escasa destinación de recursos para los mismos.

Colombia se considera como un Estado con fallas estructurales y cuyas instituciones no representan el clamor del pueblo y en consecuencia no cuentan con mayor poder de injerencia sobre el mejoramiento de la vida nacional.

La propuesta de recomposición del Estado en la Asamblea Constituyente de 1991, ha decantado en la expansión de los grandes agentes económicos nacionales y multinacionales en detrimento del Estado y de los organismos sociales de base. Las entidades del estado fueron centralizadas en instancias de control económico (Junta Monetaria, Junta Directiva del Banco de la República) y de fuerza (Consejo Nacional de Seguridad, Comandancia de las Fuerzas Armadas) donde políticamente el ejecutivo nacional concentra sus esfuerzos y su poder.

En relación a las primeras, las facultades se reducen a la toma de medidas macroeconómicas que obedecen a directrices de organismos internacionales como el

Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, así como a la presión de empresas multinacionales que invierten en Colombia. El interés público quedó reducido a sus dimensiones técnicas, esto es, a la eficiencia mensurable de las metas macroeconómicas y de las políticas sectoriales consignadas en "planes de desarrollo"...El Frente Nacional acentuó la necesidad de crear consensos entre los distintos sectores de las élites empresariales y sociales (los terratenientes tradicionales, por ejemplo) en torno a un modelo de desarrollo económico que privilegió al empresario buscador de rentas. Fuerte concentración del ingreso, consumo conspicuo de los grupos de ingresos medios y altos, bajas tasas de inversión y ahorro, índices bajísimos de fiscalidad, fuga de capitales, han caracterizado dicho módulo" (Palacios, pág. 14).

El poder económico de los principales agentes en Colombia ha conllevado al debilitamiento del sector agropecuario y la industria nacional, al favorecimiento del sector financiero y de la práctica especulativa. Asimismo, se han acrecentado los mercados ilegales de estupefacientes y de productos para el consumo inmediato.

Las Fuerzas Armadas por su parte se encargan de funciones de protección a la seguridad de los grupos más aventajados económicamente, en detrimento de la defensa de la soberanía nacional.

Podemos concluir afirmando la pérdida, que ha tenido Colombia desde 1948, de una ideología de regulación estatal, lo que ha conllevado al hecho cultural de carecer de elementos reales de integración nacional, en torno a los cuales se identifiquen los colombianos. Cuando se apela al discurso de defensa de las instituciones, de la Constitución y de las leyes, no se consigue una defensa ciudadana del orden establecido sino una resignación a aceptar el orden de cosas dado.

Lo anterior permite sustentar el poder en los aparatos coercitivos -los militares y los judiciales- a los que dedica, año tras año, la mayor parte del presupuesto nacional. De otro lado, trata de obtener su legitimidad mediante el contaminado recurso del clientelismo : la transacción impuesta, acompañada de chantaje y de soborno, la negociación oscura de la mayoría de agentes públicos que deciden sobre los recursos, en últimas, el sistema legitimado de la corrupción que derrota la alternativa de la concertación diáfana, democrática y honesta.

Nos encontramos, pues, con un difícil entronque de un Estado colombiano, lleno de avatares y distorsiones, con el proyecto modernizador diseñado para otros contextos de occidente y adaptado a las expectativas espurias de los sectores de poder en Colombia. De él se han asimilado sus tendencias modernistas, que contradicen el espíritu transformador de la modernidad y el progresista de la "modernización como aventura" de la que hablábamos en el capítulo introductorio. Por ese modernismo se ha instalado la idea de que el progreso es aumentar la capacidad de consumo y para ello sólo basta hacer más rentable el dinero y generalizar la técnica en las relaciones sociales. Marco Palacios lo sintetiza muy bien : "La trama histórica de muchos pueblos, entre ellos el colombiano, puede enunciarse así : las modernizaciones, es decir, los recursos y métodos disponibles para alcanzar los tres atributos modernos (independencia política nacional, expansión de la ciudadanía e industrialización) suelen ser contradictorias entre sí y hasta ahora tales contradicciones no parecen resolverse dentro de los moldes de la institucionalidad liberal, y en algunos casos inducen o bien el autoritarismo, o bien la violencia endémica" (Palacios, 1994, pág. 8)

En palabras de Palacios "El problema central del Estado colombiano es antes político que administrativo o técnico. Si las estructuras institucionales implican estabilidad y

predictibilidad, el mandato popular significa dinamismo y negociación. Un gobierno gana parcelas de legitimidad desplazándose razonablemente en el plano de estas dos coordenadas. Por ello, debe permitir que se movilicen partidos y organizaciones partidistas, asociaciones cívicas, gremios, sindicatos, en defensa de sus intereses y aspiraciones. Para canalizar los conflictos que de allí surjan, debe crear y fortalecer instituciones idóneas, eficientes, transparentes, cuyos gestores rindan cuentas. Esto requiere saber repartir costos y beneficios entre grupos sociales, regiones, sectores de la economía. Es decir, el Estado debe rescatar las funciones de gobierno justo...tarea mucho más ardua y compleja que los ejercicios rutinarios y despóticos del ajuste macroeconómico y del diseño de políticas sectoriales" (Palacios, 1994, pág. 26).

En virtud de lo anterior, si un plan estratégico de estas magnitudes no se pone en marcha en Colombia se seguirá abocado a la fragmentación social y política, alimentadas por las rígidas dinámicas internas y por la tendencia globalizadora del actual capitalismo.



## **CAPITULO III. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA JUSTICIA EN COLOMBIA**

### **3.1. El Estado Social de Derecho**

#### **3.1.1. Colombia Estado social de Derecho**

La Constitución política de Colombia inicia definiendo, en su primer artículo, al Estado colombiano como un Estado social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista.

El Estado social de derecho surge a partir de la crisis que sufrió su antecesor, el Estado liberal de derecho, y fue mencionado por primera vez después de la segunda guerra mundial en la Ley Fundamental de Bonn (Álvarez & Tur, 2013, pág. 56) (Caballero & Anzola, 1995, pág. 89)

El Estado Social de Derecho es un modelo de Estado que “busca una nueva dimensión de la libertad, dirigida hacia la consecución de los derechos sociales, económicos y culturales, acordes con la dignidad del hombre, mediante prestaciones efectivas y positivas de parte del poder público” (Caballero & Anzola, 1995, pág. 93). Denota una evolución respecto del Estado de derecho en la medida en la que busca garantizar efectiva y materialmente los derechos de los ciudadanos, y para cumplir este cometido se dice que este modelo estatal “pretende ayudar a la sociedad haciéndola beneficiaria de servicios públicos y receptora de diversos tipos de prestaciones sociales. Aunque sus políticas públicas abarcan a la sociedad en su conjunto los esfuerzos más importantes se dirigen a las personas con

mayores dificultades, especialmente a quienes se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social” (Brey, 2015, págs. 123-124).

El carácter *social* del Estado social de derecho viene dado por una de sus características distintivas, la consagración de derechos sociales: es importante aclarar que el término social en el Estado no se refiere, explícitamente, a la sociedad sino a los derechos sociales, que son considerados básicos para que los individuos puedan desarrollarse en sus contextos y que provienen de complejos procesos internacionales de transformaciones estatales y constitucionales, convirtiéndose los derechos sociales en el elemento diferenciador de este modelo estatal, donde las instituciones estatales están dirigidas a cumplir con los derechos sociales para beneficio de los ciudadanos (Velasco, 2017, págs. 51-52).

De esta manera, el Estado social de derecho se presenta como “la forma de organización jurídico - política de una nación en la que lo primordial son las personas, no solo individualmente consideradas, sino sobre todo, entendidas como grupo social y (...) sólo tiene razón de existir si está al servicio de la protección efectiva de los derechos, principios y deberes que la misma constitución establece”. (UNAD, 2013)

Conociendo que Colombia es un Estado social de derecho y explicado sus orígenes y su caracterización, debemos establecer las implicaciones sobre el hecho de que Colombia sea un Estado social de derecho. La Constitución política de 1991, Colombia introdujo este modelo de Estado trayendo consigo importantes aportes, dentro de los cuales se pueden mencionar “la prevalencia y superioridad del texto constitucional ante el resto del ordenamiento jurídico en lo sustantivo y lo práctico; amplio catálogo de derechos individuales y sociales; y la creación de la Corte Constitucional, entre otras

transformaciones constitucionales que innovarían el derecho colombiano”. (Velasco, 2017, pág. 59)

A partir de la Constituyente de 1991, Colombia se define como un Estado Social de Derecho; un nuevo modelo de organización de poder centrado en las personas. Este paradigma novedoso en Colombia estipula que el poder político emana del pueblo quien a su vez lo ejerce. La Constitución Política de Colombia reconoce al hombre de nuevos derechos y garantías sociales, destacándose la protección efectiva, la participación ciudadana y la consolidación de una nueva forma de democracia.

El ciudadano colombiano adquiere derechos y obligaciones que le permiten tener iniciativas para modificar la constitución, convocar referendos y ejercer su soberanía al elegir directamente a sus representantes. Igualmente puede ejercer el control sobre el poder de los funcionarios de elección popular, como lo son el Presidente, Vicepresidente, Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles.

El Estado Social de Derecho comprende una democracia participativa y que se hace valer mediante el voto popular, la fiscalización de la gestión de los gobernantes, el derecho de petición para efectuar solicitudes respetuosas a las autoridades, las acciones populares y de grupo para proteger los derechos sociales y la acción de tutela o ley de amparo para la protección de los derechos fundamentales.

Con la Constitución del año 1991 se busca garantizar la convivencia, la igualdad, el conocimiento, la libertad de los ciudadanos colombianos, enmarcados en un orden económico, social y político justo.

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general como lo define la Constitución Política de Colombia (Gómez Sierra, 2013).

Este mandato implica de manera categórica que el Estado de Derecho es un pilar del Estado Colombiano, lo que establece que todo ejercicio público y privado se encuentran enmarcados en el respecto de las normas jurídicas vigentes.

La expresión “Estado Social de Derecho” fue definida en Colombia por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en representación del pueblo colombiano, organizada para la reforma de la Constitución que regía desde el año 1886.

Antes de la Constitución de 1991, el Estado colombiano estaba conformado como un estado de derecho centralizado conformado con sujeción al ordenamiento jurídico, en el que se pretendía garantizar libertades individuales, en detrimento de los derechos sociales y colectivos. Este Estado se caracterizaba fundamentalmente en el respeto estricto a lo escrito en la norma jurídica; sin tener en cuenta que el ser humano debe estar siempre por encima de cualquier ley.

El Estado Social de Derecho implica una nueva gama de derechos fundamentales, así como mecanismos efectivos para su protección, la estipulación de la democracia como principio rector del Estado y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Adicionalmente impera como principio constitucional el respeto a la dignidad humana

Aunado a lo anterior, la grave situación de violencia ocurrida en la década de los ochenta en Colombia y otros factores como la monopolización del poder, la exclusión e intolerancia social y política, la represión estatal y las demandas sociales insatisfechas dieron nacimiento a la formulación de nuevas expectativas políticas y de Estructura del Estado de Derecho hacia un Estado Social de Derecho.

La noción de Estado Social de Derecho surge como reacción a la desigualdad creada en las relaciones del siglo XIX favorecidas por la aplicación del principio liberal del dejar hacer, dejar pasar, que pasó luego a ser contrarrestado por el intervencionismo del siglo XX, que dotó al Estado de instrumentos para orientar la economía hacia el logro de los fines sociales y con ello garantizar el bienestar general y la justicia social. Esta nueva concepción de estado nace de la necesidad generada primero por un Estado liberal en extremo y luego por un Estado que regula todas las relaciones sociales. La naturaleza Social del Estado es un desarrollo posterior de dicha orientación. Los derechos sociales y económicos y culturales son expresión y consecuencia concreta de este precepto (Moreno Younes, 2012).

La expresión Colombia es un Estado Social de Derecho, hace significar que es no sólo es un estado de Derecho como el Estado liberal clásico, sino que además apela al sentido de lo social, esto es, que adicionalmente existe una sujeción material a unos contenidos esenciales inherentes a la sociedad; en el primer caso es un elemento relativo a la validez el segundo a la justicia.

Cuatro componentes fundamentales integran la esencia del Estado Social:

El ser humano como epicentro del derecho: en este sentido toda norma jurídica debe anteponer el respeto a la dignidad humana a cualquier otro interés.

El objetivo social del Estado: la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales toma especial relevancia.

La concepción democrática del poder: los ciudadanos cuentan con mayores prerrogativas para participar en las decisiones del Estado y en la elección de sus dignatarios.

La sumisión del poder a la disciplina del Derecho: el ejercicio de todo servidor público debe estar enmarcado en un respecto estricto a sus funciones legales

El Estado de Derecho es aquel en el que sus autoridades y funcionarios velan porque se cumplan la Constitución y la Ley. Además respeta y protege los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta el reconocimiento de derechos de índole individual y de orden colectivo (económicos, sociales y culturales con una idea de propiedad privada pero sumada a la existencia de una función social, con una importante intervención del Estado en todos sus niveles.

El Estado social propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad.

De acuerdo con la definición de Estado Social de Derecho, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, tenemos que es de derecho, por cuánto se rige por el gobierno de las leyes. En este sentido no gobiernan los individuos, sino que se está bajo la directriz de las normas de ese Estado. El estado de derecho se sujeta a normatividad que él mismo emite, en tanto las autoridades y gobernantes lo hacen supeditados a esos mismos preceptos.

Al incluir el concepto de lo social, se involucran los intereses colectivos y a las acciones que se dirigen desde allí. El Estado Social hoy es por antonomasia democrático y pluralista: conforme se establece en muchos lugares de la Constitución Política de 1991, se tiene una concepción pluralista, democrática que hace parte de la caracterización del Estado Social de derecho, que la entiende allí mismo expresada.

Un Estado Social de Derecho se rige bajo los siguientes ejes:

Igualdad y Libertad: como derechos fundamentales que el estado debe defender.

Estado como gestor: de manera intervencionista pero no controladora.

Velar por los derechos sociales: garantizando la protección de los más desfavorecidos. Entre estos derechos encontramos la educación, la vivienda digna, la salud, la seguridad social, la asistencia sanitaria, el acceso a los recursos culturales, entre otros. Debe garantizar estos derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación.

Principio democrático: respetando los principios de las democracias liberales.

Bajo estos preceptos, un Estado Social de Derecho, debe proveer la integración de las clases menos favorecidas, evitar la exclusión, la marginación y las desigualdades. Además debe brindar instrumentos como la educación y sanidad, financiados con aportes sociales.

Dentro de sus objetivos esenciales encontramos el dar un marco regulatorio al capitalismo a fin de asegurar que las reglas de la Competencia -economía- realmente se implementen y que los beneficios de la actividad económica se extiendan a la sociedad entera, en relación a los esfuerzos de cada persona, evitando llegar al extremo de la privación, la inequidad o las injusticias.

Por supuesto otro de los pilares lo constituye el hecho de contar con una debida administración de justicia: que proteja haga efectivos los derechos, las libertades y la garantía de la nación entera. De igual forma se definen deberes y obligaciones que le asisten a la administración y a los ciudadanos. El Estado Social de Derecho busca alcanzar la convivencia social y pacífica manteniendo la concordia nacional, asegurando la integridad de un orden político, económico y social justo.

Para la consecución de los fines y cometidos del Estado resulta muy importante la participación y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad.

Respecto de la Administración de Justicia, cada vez se reclama con mayor énfasis una justicia seria, eficiente y eficaz. La justicia en el actual estado de derecho colombiano ha pasado de ser servicio público más a convertirse en una verdadera función pública como lo define el artículo 228 de la Constitución Política: La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones son públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ella prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo (Gómez Sierra, 2013). La estabilidad del país y de sus instituciones depende de que se imparta una justicia adecuada, lo que redundará en mayor desarrollo económico y social.

La Constitución Política de Colombia establece como fin esencial del Estado el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella; la Administración de Justicia implica la posibilidad de que cualquier ciudadano solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos consagrados por la Constitución y la



ley. Sin embargo, el acceso a la justicia sólo es efectivo o se logra cuando bajo determinadas circunstancias y con arreglo a la ley el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega al libre convencimiento, aplica la Constitución y, si corresponde, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados. (Galindo, 1992)

Cuando el juez o magistrado actúa conforme estos principios y postulados, la sociedad confía y da validez a los pronunciamientos de juzgados y tribunales. De otra parte, cuando por una u otra razón se aparta de ellos, el ciudadano va perdiendo credibilidad en la institución judicial y con ello se va deteriorando la legitimidad del tribunal y de la justicia.

### 3.1.2. División tripartita del poder en Colombia

Para comenzar desde la idea más básica, se puede decir que la teoría de la división de los poderes “consiste en descomponer el poder del Estado atribuyendo competencias distintas a diferentes órganos dentro del mismo”. (Brey, 2015, pág. 313) Bajo esta teoría, el poder se descompone en tres ramas; por un lado, el poder legislativo; por otro, el poder judicial; y por último, el poder ejecutivo.

Adicionalmente, resulta ineludible la mención del filósofo y jurista Montesquieu (1906), por ser él a quien se le atribuye la articulación del principio de separación de los poderes. Acerca de este principio dice lo siguiente:

Hay en todos los Estados tres especies de poder: el *legislativo*, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por el primero, el príncipe ó el magistrado hace leyes, para algún tiempo ó para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz ó la guerra, envía ó recibe

embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes ó juzga los pleitos de los particulares. Éste último debe llamarse *poder judicial* y el otro simplemente *poder ejecutivo* del Estado. (Montesquieu, 1906, pág. 227).

Asimismo, el desarrollo y, en general, la conceptualización que ha tenido la teoría de la división del poder lleva a hablar acerca de su principal finalidad: el control o limitación del poder como medida para evitar regímenes despóticos. Esta finalidad hace parte, pues, de las distintas definiciones atribuidas al principio de separación de poderes. Una de estas establece que “se funda en la necesidad de evitar que el poder público se concentre de manera tal que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictámenes (...) De manera que al dividir el poder en distintos elementos que pueden actuar como contrapesos entre ellos mismos, no hubiese un único poder que lo ejerciera de manera independiente y en contra de los derechos ciudadanos” (Torres, 2014, pág. 88)

Las concepciones clásicas consideran que la existencia del Estado se encuentra fundada en proteger al hombre de otros hombres. El ser humano entrega su libertad por la seguridad de no ser afectado en su derecho a la vida, propiedad e integridad. La historia misma ha escrito que la existencia del Estado no es sinónimo de protección del hombre contra sus semejantes, y menos aún del mismo Estado que puede llegar a oprimirlo, dado el poder que ha recibido del hombre.

El ejercicio del poder del Estado estuvo durante muchos siglos fundamentado en monarquías absolutistas que practicaban el despotismo y cuyo actuar implicaba las funciones de crear las leyes, ejecutarlas o ponerlas en práctica y finalmente resolver los conflictos que se generaran. La forma de buscar alejarse del despotismo vino gracias al planteamiento del concepto de la separación de poderes y de entregar las funciones del

Estado en autoridades distintas, quiénes debían realizarlas de manera independiente de los demás.

Se ha entendido “la fórmula de los tres poderes como un verdadero arquetipo del poder político, aun frente al antagonismo dualista del mando y la obediencia, abriéndose de tal manera más posibilidades del equilibrio y la libertad.” (Caballero & Anzola, 1995, pág. 205)

Ahora bien, yendo más específicamente al caso Colombiano, tenemos que “el constituyente primario colombiano se decidió por un régimen democrático con una muy definida separación de poderes”. (Villa, 2005, pág. 57) La Constitución Política de 1991, se ocupa de la división tripartita del poder en su artículo 113 que divide cada poder en ramas, así: la Rama Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial. La primera está compuesta, de conformidad con el artículo 114 superior, por el Congreso de la República al cual le corresponde “reformular la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”.

La segunda, de acuerdo con el artículo 115, comprende al Gobierno nacional “formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos” así como también se encuentran incluidas “las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado”. Por último, del artículo 116 se sigue que la tercera rama la integran “la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces” cuya función es administrar justicia.

En el país, entonces, existe una clara segmentación entre ramas y es por ello que, por ejemplo, “lo que no puede ser decidido por el legislador no puede ser ampliado por la

Corte Constitucional sin una clara e irrefutable base constitucional porque, de otra manera, se corre el peligro de que esta se convierta en un órgano soberano”. (Villa, 2005, pág. 58); no obstante, ello no significa que las tres ramas no deban cooperar entre sí ni propender por un funcionamiento coordinado y armonioso del Estado. Todo lo contrario, una división del poder corresponde a “un sistema de frenos y contrapesos para mantener el equilibrio del poder, en beneficio de la colectividad y de salvaguarda de la libertad”. (Caballero & Anzola, 1995, págs. 206-207)

La división tripartita del poder es, pues, lo que permite la puesta en marcha del Estado ya que de no ser así, todo el poder se concentraría en un mismo sujeto lo que acarrearía violaciones a la Libertad y a muchos otros derechos fundamentales de los ciudadanos.

La (Corte Constitucional de Colombia, 2004) en reiterada jurisprudencia ha manifestado que el principio de separación de poderes es la esencia de la necesaria independencia y autonomía de los distintos órganos del Estado a fin de que puedan cumplir sus funciones. No obstante a cada uno de los órganos del Estado les es exigible colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales, lo que no determina necesariamente que una deba inmiscuirse en las funciones de la otra.

### **3.2. El Congreso de la Republica funciones constitucionales**

El Congreso de la República, cuyos orígenes se remontan al “27 de noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de Federación de la Provincias Unidas de la Nueva Granada” (Senado, s.f.), es definido como “un cuerpo colegiado, es decir, que está conformado por varios miembros, y que cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad”. Está integrado por una parte, por el Senado y por otra, por la Cámara de Representantes.

Al Congreso de la República, de manera general, y como órgano rector de la rama legislativa, le corresponde hacer las leyes. Por medio de éstas ejercer diversas funciones, descritas en el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia.

Asimismo, se habla de las funciones del Congreso dividiéndolas en ocho categorías diferentes, así:

Función constituyente: facultad inherente al Congreso mediante la cual puede reformar la Constitución Política. Los proyectos se denominan “actos legislativos”.

Función legislativa: mediante la cual se crean las leyes, las interpreta, las modifica o las deroga.

Función de control político: por medio de la cual el Congreso puede citar a miembros del Gobierno como los ministros para conocer el desarrollo de sus actuaciones y eventualmente formular acusaciones por el mal ejercicio de sus cargos.

Función judicial: excepcionalmente puede ejercer una función jurisdiccional contra altos funcionarios del Estado.

Función electoral: el Congreso tiene la facultad de elegir al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, así como al Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta de este.

Función administrativa: el Congreso ejerce una función ejecutiva cuando establece su funcionamiento y organización interna: nombra a sus funcionarios y ejecuta su presupuesto.

Función de control público: gracias a ella cuenta con la posibilidad de citar a cualquier persona para que rinda declaraciones sobre asuntos o hechos que investiguen las comisiones de Senado y Cámara de Representantes.

Función de protocolo: implica la autorización para recibir de jefes de estado o de gobierno de otras naciones (Senado de la República de Colombia, 2018).

En la sociedad colombiana, la institución del Congreso es considerada como una de las más desprestigiadas del sector público. Muchos son los escándalos en los que se han visto inmersos los congresistas lo que ha decantado en la pérdida de credibilidad por parte del pueblo. Sin embargo, el Congreso de la República refleja el fundamento de la democracia y la entrega del poder del pueblo a personas encargadas de regular la vida en sociedad.

Los principales politólogos y constitucionalistas del país como Herrera Llanos (2003) expresan que el órgano legislativo se fundamenta en la representación popular y encarna la separación de poderes y la efectiva protección de los derechos fundamentales del Estado. El Congreso de la República es una entidad nombrada desde la base social y en ella se refleja la verdadera potestad soberana, el interés del pueblo.

Como se indicó antes, la rama legislativa en Colombia ha ido en decadencia en cuanto su imagen en los últimos años, lo que ha coadyuvado a que la rama ejecutiva se destaque por encima. Lo anterior aunado al hecho de que en las democracias presidencialistas, el desarrollo económico y social está sobre los hombros del ejecutivo.

Ya desde la Constitución de Colombia de 1886 se ampliaron las potestades gubernamentales y el Congreso de la República se le otorgaron facultades electorales y burocráticas. Antes de la Constitución de 1991, el órgano legislativo había generado desinterés de parte del pueblo, siendo un órgano sin prestigio ni confianza social. Con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, para dicha época se suspendieron las funciones del Congreso.

Con la Constitución Política de 1991 el órgano legislativo adquiere una nueva dimensión. Adquiere relevancia superior el concepto del equilibrio de poderes y se dictan nuevas reglas para el ejercicio de la democracia. No obstante, este equilibrio se ha visto desmejorado en los últimos años con el nacimiento de la Corte Constitucional, quién con sus decisiones, constantemente choca con el Congreso de la República.

El artículo 150 de la Constitución política de Colombia define las funciones del Congreso de la República, dentro de las que podemos destacar (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018):

Interpretar, reformar y derogar las leyes: constituye la función esencial y la razón de ser del Congreso: mediante ella regula todos los aspectos de la vida en sociedad de Colombia. Todo el actuar de las distintas entidades del Estado deben estar acorde a las funciones que el órgano legislativo previamente defina en las leyes.

Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas: el Gobierno Nacional debe previamente señalar la forma en que va a ejecutar su presupuesto con la definición de los recursos y apropiaciones que se autoricen y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de estos.

Definir la división general del territorio nacional: con base en esta función establece las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

Determinar la estructura de la administración nacional: le permite crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades públicas, definiendo sus funciones, fuentes de financiación y estructura orgánica;

Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia: aun cuando en la práctica es el ejecutivo quién vela porque se cumplan las leyes en los distintos aspectos económicos y sociales, quién establece la forma es el legislativo a través de una regulación específica, imponiéndole asimismo límites a su ejercicio.

Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales: teniendo en cuenta la representatividad del pueblo por parte del congreso, se le entregan funciones de control político sobre el gasto público, cuando son erogaciones representativas y de interés nacional.

Autorizar al presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley: por razones de conveniencia pública o necesidad especial. Estas facultades tienen límites; el gobierno no puede expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni para decretar impuestos.

Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración: fija con precisión el destino de los ingresos nacionales por concepto de tributos.



Determinar la moneda legal: de manera general regula todos los aspectos económicos, incluyendo la convertibilidad y el alcance del poder liberatorio de la moneda.

Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados: a fin de garantizar la conveniencia y el interés nacional, el Congreso ejerce un control posterior a las relaciones internacionales cuando culminan con un acuerdo que implique compromisos para el Estado.

Conceder indultos por delitos políticos: por razones de conveniencia pública y relevancia nacional, el legislativo cuenta con una facultad que a primera vista pareciera del resorte del órgano jurisdiccional.

Dictar las normas generales en materia económico: lo que incluye aspectos de crédito público, comercio exterior y régimen de cambio internacional. Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva: como encargado de la emisión de la moneda legal en Colombia, el Banco de la República cuenta con regulación precisa, que permite a los demás órganos del Estado llevar un seguimiento y control de su actividad.

De lo anterior podemos concluir que el Congreso de la República influye en las principales decisiones sobre el devenir del Estado Colombiano lo que le permite:

Participar efectivamente en el trámite de la Planeación del Desarrollo Nacional;

Precisa los fines, alcances y límites a la libertad económica;

Establece los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para su intervención en el sector financiero, la regulación del crédito público y del comercio exterior, entre otros;

Limita a su mínima expresión el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente, ejerciendo su rol con propiedad desde la Carta de 1991,

El Congreso de la República en Colombia se aleja de la idea general de que es el órgano cuya única función es la de elaborar las leyes; el artículo 6° de la Ley 5ª de 1992 (Congreso de la República, 1992), su Estatuto General, dispone que esta corporación cumple dentro del estado colombiano distintas funciones de van desde las que originariamente le asigna la Constitución en el artículo 150, para encargarse, por medio de leyes, de diversos aspectos del funcionamiento de la actividad política, social, económica y financiera del país, hasta la de cumplir con otras actividades como las de protocolo: recepción de jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones, como lo establece el artículo 141 de la Constitución Política.

Dentro de estos aspectos diferentes a expedir las leyes, encontramos, por ejemplo, las funciones de control político, dispuestas en el artículo 135 constitucional, mediante la cual puede requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado para determinar la responsabilidad política de éstos a través de una moción de censura o de observaciones, según el caso (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018);

De igual forma se observa la facultad de actuar en ejercicio del poder constituyente secundario mediante la reforma de la Constitución Nacional, tal y como lo dispone el artículo que se refiere el artículo 114 constitucional; Además juzga excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por la Responsabilidad Política que le corresponda por los hechos y omisiones ocurridos en el desempeño de sus cargos, tal como prevén los artículos 174 y 175 constitucionales: ésta resulta una de las funciones más controversiales que la Constitución le otorga al Congreso teniendo en cuenta que le da la autoridad para investigar y juzgar, aunque sea de manera excepcional a los altos funcionarios del Estado, entre los cuales se encuentran los magistrados de la Corte Constitucional, y los de las otras altas cortes: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura.

Este órgano legislativo también cuenta con funciones de carácter electoral, como lo es la faculta de nombrar al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y el Vicepresidente de la República, en los casos de faltas absolutas.

En relación a su funcionamiento interno, el Congreso cuenta a su vez con facultades de carácter administrativo o ejecutivo. En ese sentido, establece la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes, como lo ordena el numeral 20 del artículo 150. De igual forma nombra sus funcionarios internos.

Finalmente destacamos que esta corporación ejerce un control público, que es diferente al político, y que según lo dispuesto en el artículo 137 constitucional, consiste en la potestad de emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rinda declaraciones orales, escritas, con o sin juramento, sobre hechos relacionados con las

indagaciones que la Comisión adelante. El Congreso de la República cuenta con el poder de conceder amnistías o indultos generales, esto es, el perdón del delito (extinción de la acción penal) y el perdón de la pena (extinción de la sanción penal) respectivamente. Es de destacar a este respecto que se refieren a aquellas amnistías e indultos generales por delitos políticos, para lo cual se exige que el Congreso lo decida mediante una mayoría de las dos terceras parte de los votos de los miembros del Congreso y que, además, se produzcan graves motivos de conveniencia pública. Como se afirmó antes, resulta una función más cercana al órgano judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia en su más alta esfera.

### 3.3. La Corte Constitucional funciones constitucionales

Al interior de la rama judicial, se encuentra la Corte Constitucional como máxima corte de la jurisdicción constitucional. Fue una de las novedades que trajo la Constitución Política de 1991 y como organismo perteneciente a la rama judicial, es confiada con “la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política” (Corte Constitucional de Colombia, 2018). Ello implica que su principal función es la de salvaguardar la norma fundamental de las demás normas del ordenamiento jurídico que estén en contravía, así como garantizar que la vida en sociedad al interior del Estado Colombiano se rija bajo los principios y valores constitucionales.

Hablar acerca de sus funciones remite al artículo 241 de la Constitución Política de Colombia. Al realizar un análisis de ellas podemos destacar las siguientes:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra los actos que reformen la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación: cualquier ciudadano tiene la potestad de demandar de cualquier acto legislativo si considera que el Congreso de la República o el ente competente incurrió en algún yerro a la hora de seguir con el procedimiento especial que

surten los actos que pretenden realizar cambios en la constitución. Comoquiera que la Constitución es la norma fundamental del Estado Colombiano, se vigila con rigurosidad cualquier acción que pretenda modificarla.

2. Decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo o a Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación: antes de llevar a votación popular cualquiera de estas iniciativas, a la Corte Constitucional le compete verificar el cumplimiento estricto del procedimiento de expedición de la ley con las que se da inicio a este procedimiento.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos: es deber de la Corte garantizar que estos mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales se busca modificar las leyes y tomar decisiones de trascendencia nacional, cumplan con un fin acorde a los principios y valores de la constitución nacional.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes: como garante de la Constitución, la Corte Constitucional se encarga de analizar y decidir sobre las acciones que cualquier ciudadano presente contra aquellas leyes expedidas por el Congreso que vayan en contravía de los principios, valores y normas constitucionales, pudiéndolas eliminar del ordenamiento jurídico colombiano.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de la autorización del Congreso: teniendo en cuenta que en casos excepcionales el Gobierno cuenta con la facultad de expedir normas con la misma fuerza que las leyes del Congreso de la República, a la Corte Constitucional le compete realizar el mismo análisis de correspondencia constitucional.
6. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno: en caso de guerra exterior, grave perturbación del orden público o afectación grave del orden económico, social y ecológico del país, el Presidente de la República puede decretar el “estado de excepción”, con base en lo dispuesto en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. Declarado lo anterior, el Presidente cuenta con la potestad de expedir decretos con la misma fuerza que las leyes que son expedidas por el Congreso, y asimismo la Corte Constitucional el deber de realizar el control constitucional respectivo.

7. Decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias: en el primer caso, teniendo en cuenta que existe un conflicto entre lo decidido por el Congreso de la República y el Presidente de la República de no sancionar la ley, es deber de la Corte Constitucional decidir si se expide o no la norma. Ahora bien, en relación a las leyes estatutarias, se le otorga la facultad a la Corte de verificar la constitucionalidad de estas normas antes de su vigencia debido a que son aquellas que regulan los derechos fundamentales.
8. Revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela: este mecanismo judicial es considerado como la herramienta esencial para preservar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia. Vista su relevancia, le compete a la Corte Constitucional la revisión eventual de aquellas acciones de tutela en las que considere que no se han cumplido con los principios y valores contenidos en la Constitución Política.
9. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben: la Corte Constitucional recibe del gobierno todos los tratados internacionales a fin de que ésta verifique su correspondencia con la Carta Política y el cumplimiento del procedimiento para aprobarlos.

Antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, el control de constitucionalidad de las leyes se encontraba en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, integrada por cuatro salas, incluyendo la Sala Constitucional cuyo origen data del año 1968. Se encargaba de elaborar los proyectos de fallos relacionados con la constitucionalidad de las normas. Las decisiones se tomaban en Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Con el nacimiento de la Corte Constitucional como un órgano independiente, a partir del año 1991, se buscó separar la protección del texto de la constitución de los intereses de los demás jueces, así como la posibilidad de que existiera contradicción entre los distintos magistrados sobre el alcance de las disposiciones constitucionales.

De otra parte, se buscaba tener un amplio número de jueces que participaran en la decisiones relativas a la protección de los derechos constitucionales y de la integridad misma de la constitución. Esto se evidencia en la Acción de Tutela o recurso de amparo como mecanismo de salvaguarda de este tipo de derechos y de la cual conocen la totalidad de los Jueces de la República de Colombia (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018, pág. artículo 86). A su vez, se aseguró que todos los jueces de la República se convertirán en guardianes de la integridad de la Constitución, creando mecanismos como la excepción por inconstitucionalidad, mediante la cual se pueden apartar de la aplicación de normas que consideren inconstitucionales.

Con la expedición de la Constitución Nacional de 1991 también se buscó crear mecanismos de fácil acceso para las minorías y sectores de la oposición política al Gobierno de turno; evitar que la dispersión de los procesos relacionados con los alcances de la Constitución, congestionar otros despachos judiciales.

Finalmente y no menos relevante se procuró unificar la jurisprudencia en materia constitucional en un sistema basado en decisiones de la Corte Constitucional de Colombia y que son de obligatorio cumplimiento para los demás jueces de la república. Estos últimos son los encargados de amparar los derechos fundamentales y de resolver sobre la vigencia de las normas aplicables en cada caso.

Bajo las anteriores consideraciones, la Asamblea Nacional Constituyente estipuló la supresión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por cuatro miembros, y crear la Corte Constitucional de Colombia, confiándole la salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política de Colombia del año 1991.

La primera Corte Constitucional que sesionó en Colombia, y con un carácter excepcional, lo hizo entre el 17 de febrero de 1.992 y el 28 de febrero de 1.993, estableciendo los siguientes principios.

La norma constitucional es una norma racional dinámica: el juez que la interpreta no debe quedarse en un solo enunciado.

La interpretación de la Corte Constitucional: Una interpretación superior.

Imposible jerarquía jurisdiccional.

(Molina Betancurt, 2010)

Con la creación de la Corte Constitucional se incluye en la Constitución Política de Colombia de 1.991, en el Título VIII De la Rama Judicial, Capítulo IV De la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 241, el cual nos define la competencia de la Corte.

La Corte Constitucional fue misionada para dar protección a las garantías y el cumplimiento pertinente de la norma fundamental, y es en este ejercicio en el que empieza a encontrarse con las funciones de los demás órganos judiciales como la Corte Suprema de Justicia. En el análisis de una Acción de Tutela puede llegar a derogar decisiones tomadas por otros jueces, vr. gr. la Corte Suprema de Justicia, al considerar que se incurrió en una contradicción con la Constitución en el respeto de los derechos fundamentales.

Tres son principalmente las funciones de la Jurisdicción Constitucional según lo dispone (Tobo Rodriguez, 2006, pág. 88), a saber:

Una función jurisdiccional propia, relacionada con el deber de pronunciarse sobre el reparto de competencias normativas previsto por la Constitución.

Una función política propia, vinculada con el deber de establecer límites a la acción de poderes públicos, regulando la distribución de la autoridad dentro del Estado.

Una función normativa propia, relacionada con la participación específica por vía jurisprudencial en la producción de la ley y el derecho constitucional.



La Corte Constitucional dos tipos de control; un control abstracto y un control concreto. (Tobo Rodriguez, 2006, pág. 61) describe estos controles así:

Control abstracto: Se presenta cuando una norma de naturaleza legal o de rango inferior es comparada con la Constitución, sin que la norma revisada esté siendo o vaya a ser aplicada en un caso concreto. Si la norma es declarada inexecutable no puede ser aplicada en ningún caso, pues se entiende que sale del ordenamiento jurídico.

Control concreto: Ocurre cuando en el curso de un proceso judicial, el juez correspondiente considera que la norma de la cual depende su decisión podría ser contraria a la Carta Política. Si se presentan dudas sobre la exequibilidad de la norma, el funcionario judicial deberá plantear ante el órgano de la Jurisdicción Constitucional competente la cuestión de inconstitucionalidad, sin que ello implique suspensión del proceso. Si el órgano competente resuelve que la aplicación de la norma en dicho caso representa una violación de la Constitución, el juez debe abstenerse de hacerlo. En este evento la decisión sólo tiene efectos en el caso concreto y únicamente frente a los interesados.

## **CAPITULO IV. CONFLICTO DE PODER Y SOCIEDAD**

### **4.1 Relación entre el poder político y la sociedad**

El poder político se ha definido como la capacidad del Estado de asegurar la obediencia de los ciudadanos con la amenaza de sanciones o del uso de la fuerza. Nace por la necesidad de cohesión de las personas para mutuamente suplir sus necesidades.

De esta definición se decanta la necesidad de relacionar este concepto con el de sociedad. En este sentido el poder político supone necesariamente la existencia de un grupo de un grupo de personas, denominados gobernantes, quienes dirigen sus órdenes hacia los gobernados, a los que se les reconoce igualmente como sociedad.

En tiempos modernos el uso de la fuerza, aun cuando necesario, ha dejado de cobrar tanta relevancia como antes. La discusión entre el ejercicio del poder político del Estado y su acatamiento por parte de la Sociedad ha llegado a un punto en el que es más importante el grado de legitimación con que se ejerza dicho poder. En palabras de (Echeverri Uruburu, 2002, pág. 7) se necesita “un conjunto de creencias y valores dirigidos a justificar el ejercicio del poder, que se representan en la conciencia de los gobernados como demostrativos de la necesidad del poder político y de la legitimidad de quienes lo ejercen”.

Para el tranquilo funcionamiento de la vida en sociedad resulta esencial la aceptación de parte de la sociedad del poder político del Estado y más concretamente de quiénes los gobiernan. Bajo ese entendido la legitimidad es el ejercicio del poder político por parte de los gobernantes pero con un reconocimiento por parte de los ciudadanos comoquiera que

la titularidad del poder es consecuencia de la asunción del cargo del gobernante y la evidente aceptación del mismo por los asociados (Rúa Delgado, 2013, pág. 91); la sociedad justifica la existencia y permanencia del poder político, al tener ver que es quién le permite suplir las necesidades que individualmente le sería imposible. Max Weber lo define como “la legitimidad corresponde a una creencia de los dominados en hacerse sumisos a la autoridad, lo cual asegura la capacidad de ésta para hacer cumplir sus decisiones”. (Rúa Delgado, 2013, pág. 93)”

La explicación de la relación entre el poder político y la sociedad lleva necesariamente a la explicación que los filósofos contractualistas plantearon. Así, por ejemplo Rousseau , (2003, pág. 14) planteó que la primera consecuencia de los principios establecidos es que la voluntad general se debe limitar únicamente a dirigir las fuerzas del Estado conforme los fines de la institución, esto es, el bien común. Si bien la oposición de los intereses particulares es lo que ha hecho posible la conformación de las sociedades, el ajustamiento de esos mismos intereses es lo que permite la existencia de ella. Se debe buscar un común denominador entre esos intereses y es lo que define el vínculo social; de no existir esos intereses comunes, no podría existir la sociedad. Culmina indicando que la soberanía es el ejercicio de la voluntad general pero que ésta es inajenable, quién ostenta el poder es un ser colectivo, quién no puede ser sustituido, so pena de alejarse de la voluntad del pueblo.

Otra posición contractualista de la sociedad frente al poder político la explica Thomas Hobbes citado por Pizzolo (2004, págs. 96-97) señala que el ejercicio del poder político se encuentra legitimado en el consenso de las personas por la necesidad de unirse en sociedad. Toda obligación que se le ha impuesto al hombre deriva de un acto de su propia voluntad, quién por naturaleza es libre. En la añorada necesidad de terminar con el estado de guerra y buscar la paz y seguridad de cada individuo, los hombres deciden conforma la

sociedad. Lo anterior constituye el fin por el que el individuo abandona su estado de naturaleza y da nacimiento al Estado.

La teoría del contrato social de Rousseau dictamina que el titular del poder es el pueblo; que es la unión de voluntades para la protección del bien común y en general por alcanzar objetivos convergentes. Se aleja de Hobbes, quién lo relaciona más con la sumisión del hombre. La legitimidad del poder político se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos trazados por la voluntad general. En la modernidad esta voluntad del pueblo es plasmada en leyes que luego deben ser cumplidas a cabalidad. La sociedad entonces determina si el ejercicio del poder es legítimo o no y si resulta compatible con la voluntad general.

La aceptación del ejercicio del poder político, por parte de la sociedad, es más importante que el uso de la fuerza, a fin de lograr la existencia pacífica y prolongada del Estado. En su obra Rousseau (2003, pág. 8) indica que siempre existirá una diferencia entre someter una multitud y gobernar una sociedad. Si varios hombres dispersos se someten uno al otro, por numerosos que sean siempre van a tener un dueño y los demás serán esclavos; no existe entonces el concepto de pueblo y gobernante. No se consideran entonces una asociación, pues carecen de bien público y de cuerpo político. Por más de que el hombre logre someter a un número grande de personas, siempre será considerado un particular y su ejercicio de poder es siempre en interés privado. Si llega a perecer, así lo hará su imperio, sin unión ni adherencia.

Es fundamental para el funcionamiento de la sociedad una correcta relación con el ejercicio del poder político. El empleo de la fuerza dista de esa estrecha relación, y si se quiere, la aleja. Resulta necesario el consenso de la sociedad, así como el reconocimiento del poder político y la entrega de las libertades individuales, para culminar en la

satisfacción de las necesidades que son el bien y los intereses comunes; para Fernando Badía (1972, pág. 24) “todo Poder es una mezcla de violencia y creencias”.

Las teorías contractualistas por su parte nos enseñan que los hombres libres deciden someter su libertad a la voluntad de un soberano para vivir tranquilamente en sociedad. El gobernante ejerce el poder político con legitimidad dado que se le ha entregado por la voluntad general. Naturalmente el ejercicio del poder político depende del contexto histórico y del sistema de valores vigente para la época; en la medida que la sociedad acepte ese poder político, éste se irá consolidando, siempre que a su vez cumpla con el fin de satisfacer el bien común.

#### **4.2 Factores reales de poder en Colombia**

Todas las fuerzas de alguna manera relacionadas con el poder político son consideradas como factores de poder. En un ámbito más específico, se entienden aquellas instituciones como las iglesias, los medios de comunicaciones, los partidos políticos, las fuerzas militares y las mismas entidades públicas, quiénes comprenden el accionar político de un Estado. Tienen en común que no ejercen presión política esporádica sino continua, y no sobre asuntos particulares sino sobre todos los ámbitos de la vida en sociedad. Las decisiones siempre deben ir en consonancia con el interés de estas instituciones a fin de garantizar la estabilidad política y social.

Comprender el conflicto de poderes existente entre la Corte Constitucional de Colombia y el Congreso de la República exige un conocimiento previo sobre el surgimiento del poder político, esto es, de donde provienen las presiones sociales a las que deben atender cada uno de estos órganos estatales.

En Colombia, el reconocimiento del poder político y el sustento de todo el ordenamiento jurídico se encuentra en la norma fundamental contenida en la Constitución Política del año 1991: producto de un consenso nacional plasmado a través de la Asamblea Nacional Constituyente en la que se logró abarcar un amplio número de sectores sociales y que gozan hoy de respaldo del pueblo. Es posible afirmar que los factores de poder en Colombia encuentran su fundamento en la Carta Política.

Históricamente la Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido el resultado de una gran variedad de constituciones que rigieron en el país a partir de la declaratoria de independencia de España, pero que no consiguieron consolidarse y obtener una aprobación social eficaz.

En palabras de Lasalle (1964, págs. 48-98) la constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que los rigen. Más que un concepto jurídico, debe asociarse el concepto de constitución a asuntos sociológicos y políticos. Señala que se distinguen dos clases de constituciones: la real y efectiva, integrada por la suma de factores de poder que mandan y rigen en la sociedad, y que es la que se debe dar en la realidad. De otra parte, una constitución denominada “la hoja de papel”, como aquel documento en el que se estipulan por escrito normas jurídicas.

La constitución real es la acumulación de fuerzas políticas y concretas de la sociedad, debe ser anterior a la escrita, y propia de los estados modernos. La misión de las constituciones escritas está en poder resumir y estatuir en un documento, todas las entidades públicas vigentes en un país determinado. Continúa Lasalle (1964) afirmando que una constitución escrita permanece en el tiempo cuando se acerca a la constitución real, a la que es producto de los factores reales de poder vigentes en un país. Una constitución que no cumpla con esta característica está destinada a sucumbir ante la constitución real.

Los problemas de las constituciones no son de carácter jurídico sino más bien políticos o de ausencia de poder. Una verdadera constitución, según Lasalle (1964) se fundamenta en los factores reales y efectivos de poder que mandan en una sociedad organizada. La constitución se vuelve en una hoja de papel o un escrito sin valor cuando la realidad global discrepa de lo escrito en el documento. En ese momento de la historia, se hace necesario redactar un nuevo pedazo de papel que esté acorde a la realidad social del país. Es el caso ocurrido en Colombia hacia el año 1991, cuando la realidad social y política evidenció la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para dar nacimiento a una nueva constitución.

Estos factores reales de poder son definidos por Lasalle (1964) como aquellas instituciones que aparecen en los distintos ámbitos de la vida del hombre y que terminan por ser la esencia de las relaciones de cada sociedad. Entre ellos se encuentran los bancos, el poder ejecutivo, las multinacionales, los sindicatos, los militares, el poder legislativo, el poder judicial, los empresarios y las iglesias.

En Colombia las teorías planteadas por Lassalle no son de efectiva aplicación. Nuestro Estado ha demostrado estar amparado bajo un riguroso principio de legalidad y por constituciones ideológicas, en las que casi siempre son segregados algunos factores reales de poder o sectores de la sociedad no representados.

La historia colombiana ha demostrado que los problemas nacionales se buscan solucionar mediante la imposición de normas, más allá de tener en cuenta a los sectores que deben ser representados. En la obra de Patiño Villa (2013) se describe que, producto de las tendencias al legalismo en Colombia, se han expedido ocho constituciones nacionales y cerca de 16 reformas a la Constitución de 1886. La historia colombiana ha girado alrededor de constantes guerras, un ganador y la demostración de la victoria a través de

una norma escrita. Cita de ejemplo el autor a la constitución del año 1832 que elimina por completo a los denominados Bolivarianos; luego en el año 1863 se expide una constitución liberal, para luego llegar a la instituida en el año 1886 en la que se observan ideologías marcadamente conservadoras.

Posteriormente, manifiesta el autor, que Colombia se arraiga hacia un sistema bipartidista, en las que el ganador de cada elección dejaba por fuera completamente a la otra colectividad. Ello provocó que hacia el año 1958 apareciera el denominado Frente Nacional, en el que se excluyen del poder notoriamente a los movimientos de izquierda y se establece un sistema en el que el poder es entregado de manera alternativa entre el partido conservador y el liberal.

Otros factores reales de poder excluidos en Colombia lo conforman la iglesia, institución que en la Constitución del año 1863 dejó de conformar las fuerzas del gobierno, así como los pueblos indígenas e incluso las mujeres que solo hasta el año 1945 adquirieron la ciudadanía y posteriormente el derecho al voto.

En la actualidad esa falta de representación, o inclusión como factor real de poder, la podemos observar en la abstención electoral, o incluso en el voto en blanco, manifestaciones ciudadanas de desprecio y descontento hacia los gobernantes y en general hacia la democracia colombiana, jugando en contra de la legitimidad del sistema.

La Constitución Política de Colombia del año 1991 fue un mecanismo innovador como quiera que incluyó mayores factores reales de poder. En materia religiosa, por ejemplo, trajo consigo la libertad de culto y un estado secularizado. Se reconoce el pluralismo político, ideológico y racial, así como la defensa de derechos y libertades públicas.



Sin embargo, Colombia enfrenta en la actualidad muchos otros retos en aras de lograr la integralidad en la inclusión de los factores reales de poder. Ejemplo de ello es la falta de presencia del Estado en algunos territorios nacionales, en los que aún no llegan con calidad los organismos de salud, de defensa de los derechos humanos, la educación y el poder judicial. Estos territorios están compuestos principalmente por los campesinos, que representan un número importante de habitantes del país pero que no se encuentran representados debidamente en el ejercicio del poder.

A la luz de lo expuesto del pensamiento de Lasalle (1964) encontramos que los cambios sociales siempre deben estar reflejados dentro de la constitución de un pueblo, para que sean más acordes con la realidad. Estos cambios sociales terminan convirtiéndose en nuevos factores reales de poder. Son muchos los casos en que ello se evidencia: la aprobación del aborto en casos especiales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, generan comunidades que ejercen presión en los gobernantes, y que en últimas pueden ser considerados factores de poder en Colombia.

#### **4.3. La legitimidad e Institucionalidad del Congreso**

De acuerdo con lo expresado por Norberto Bobbio (2005), la legitimidad de la Corte Constitucional colombiana debe analizarse mediante tres etapas: La conformación de comunidad política, la estructura del régimen y el ejercicio de los actos de autoridad, que debe ser acatada.

Bobbio, (Diccionario de política 2005), señala que el término legitimidad parte de dos significados: uno de carácter general que se emplea como el equivalente a justicia y otro de carácter particular, vale decir, específico, que tiene que ver en el lenguaje de lo político como el aplicable a las formas de organización política.

Cualquiera que sea el concepto que se seleccione, el de justicia o el de política, no se puede separar el concepto de legitimidad con el contenido de lo ético; es decir, de la aprobación de la sociedad, de la aprobación general, por lo cual la legitimidad de una actuación, es sinónima de moralidad, y éste concepto a su vez entraña un juicio de valor realizado sobre esta nueva institución colombiana que es la Corte Constitucional, de acuerdo con criterio materiales y formales; desde el punto de vista material se responde a los intereses sociales, es decir la Ley responde a determinados intereses sociales, se refiere a todo acto emanado del Estado, que contenga una regla de derecho Objetivo; en cuanto al sentido formal se refiere, implica a pensar en la Ley como todo acto emanado del poder Legislativo. Lo material, entonces se refiere a los intereses de la sociedad, a sus necesidades y motivaciones; en tanto que lo formal es asociado a la legalidad o licitud.

Es esta doble forma de valoración de la legitimidad de la Corte Constitucional, a que desarrollamos en este trabajo tomar lo legítimo como lo moralmente correcto y lo legalmente establecido, lo que en el texto El poder Constituyente del escritor italiano NEGRI, (Antonio. (1994). El poder constituyente, Madrid. Libertarias Prodhufi), se denomina poder constituyente y poder constituido.

El poder Constituyente, en Colombia que radica en el pueblo “ El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano” expresa de manera taxativa en el preámbulo de la Constitución y el poder constituido son las instituciones creadas a través de la Asamblea Nacional Constituyente La Corte Constitucional por ejemplo.

#### 4.3.1. La legitimidad Originaria

Norberto Bobbio (2005) plantea que el proceso mediante el cual se legitima cualquier institución política pasa, generalmente, por tres estadios de análisis: el origen, la creación

o constitución de la comunidad política, la composición, la estructura del régimen institucional y el funcionamiento, el ejercicio de actos de autoridad.

Para poder establecer la legitimidad de la creación de la Corte Constitucional colombiana, es necesario, para seguir el hilo conductor de este trabajo, centrarnos en el estudio del concepto de poder legítimo, que no es otra cosa que la autoridad aceptada por los asociados, en términos de (BOBBIO 1992), los individuos que participan en las relación de poder.

Desde el punto de vista del poder político del pueblo, quienes participan en las relaciones de poder, la autoridad del pueblo dio como resultado la escogencia de una asamblea nacional constituyente que creo y aprobó la Constitución Política de 1991, esa misma Asamblea Nacional Constituyente, estableció las condiciones y diseñó el proceso para la designación de los miembros de la Corte Constitucional, los nueve Magistrados y estableció la duración del periodo de cada magistrado, ocho (8) años; también la Asamblea Constituyente decidió que para la elección los integrantes de la Corte participaran los tres (3) poderes clásicos del Estado La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado como representantes de la rama judicial; el Presidente de la República como representante del ejecutivo y de entre esos candidatos el Senado de la República, de la rama legislativa .escogiera cada uno de los candidatos presentados por las otras ramas del poder público.

De todo lo anterior se puede inferir que la creación, la integración cumple plenamente con los requisitos y presupuestos para alcanzar la legitimidad material y la legitimidad formal:

Es el pueblo, el poder soberano, el que elige, de manera directa al Senado de la República,, existiendo por tanto un mandato político y jurídico, por consenso de la sociedad el cual encarga a los miembros de la Corte Constitucional a guardar la Constitución, que se erige como la materialización del poder soberano del pueblo; este mismo poder soberano estableció las competencias de la Corte, entonces la Corte Constitucional tiene en su esencia una legitimidad primaria derivada del propio constituyente original.

La defensa de la Constitución y el amparo de los derechos fundamentales hizo posible que la Corte Constitucional hubiese ganado o generado credibilidad en ella, sus decisiones basadas en el criterio de garantista que tiene el Estado colombiano le dieron a esa Institución un reconocimiento y una autoridad, que en los últimos tiempos se ha puesto en tela de juicio, en duda, por las actuaciones de algunos de sus miembros; sus conductas han traspasado la esfera de sus competencias, la línea de la eticidad hasta caer en la comisión de delitos.

## **CAPÍTULO V. COMPROBACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA.**

En desarrollo del tipo de investigación cualitativa que nos propusimos, abordamos la hipótesis de manera empírica se decidió realizar una entrevista semiestructurada a un grupo calificado de integrantes de las instituciones en conflicto y obtener de ellos información veraz, escuchar sus opiniones, conceptos sobre cada uno de las variables y categorías presentes en el estudio.

La entrevista estructurada se realizó a un grupo de magistrados y a un grupo de congresistas de modo que los resultados fueran equilibrados y guardaran una ecuánime y consistente coherencia.

### **5.1. Método**

Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, especialmente por ser de tipo dialógico, conversacional que posibilita la interacción cara a cara y de comunicación abierta entre el investigador y el interlocutor, creando un ambiente flexible, es un diálogo, en lo posible entre iguales que supera la conversación de solo preguntas y respuestas; ello permite una mayor profundidad y en medio del conversatorio se pueden superar y aclarar malentendidos conceptuales y semánticos, siempre hay una espacio abierto a respuestas inesperadas

El material logrado, insumo de la investigación, se transcribió respetando cada palabra del entrevistado, respetando igualmente la solicitud de cada uno de no tomar sus nombres para una mayor fluidez en el diálogo

Previo a la realización de las entrevistas se realizaron dos pruebas pilotos en las que hubo que reestructurar y reformular algunas preguntas y quitar otras que no conducían a dar respuesta a la pregunta problema,. Esta prueba piloto fue de gran utilidad pues el diseño final fue un óptimo cuestionario que no permitió confusiones en la población objeto de las entrevistas.

La investigación se planteó a partir de varios ejes temáticos El eje central del trabajo sobre el cual gira el estudio es probar la existencia de un conflicto de poder entre dos ramas del poder público el poder legislativo, representado por el Congreso de la República y el poder judicial, caracterizado por la Corte Constitucional; alrededor de este gran eje gravitan temas como el papel de legislador que asume la corte cuando en su papel de intérprete natural de la Constitución desborda su papel de juez constitucional y desplaza al congreso legislando sobre materias que corresponden al legislativo, por vía de ejemplo, la adopción de niños por parejas homosexuales, la legalidad del aborto en algunos casos.

Otro eje importante es el papel que desempeña la Corte cuando por autorización de la propia Corte Constitucional, nombra candidatos para que sean designados en altos cargos del alto funcionarios del Estado, es el caso de Contralor general de la Nación. Quien es elegido por el Congreso de la República de terna enviada por un candidato de la Corte Suprema de justicia, un candidato del Consejo de Estado y uno por la Corte Constitucional.

Se ha organizado el trabajo partiendo de la base del principal eje temático del conflicto de poder que existe entre el Poder legislativo y el poder judicial centrada la investigación en la existencia de este litigio entre la el Congreso de la República de Colombia y la Corte Constitucional; alrededor de este eje giran otros ejes que permiten estructurar el problema y delimitar las funciones de cada uno de ellos; tales ejes temáticos son:

Las funciones que a cada una de esas instituciones entregó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que se encuentran escritas en la Constitución Política vigente en el país desde ese mismo año; La dualidad de funciones que esta misma Constitución política ha entregado tanto al Congreso como a la Corte Constitución; es así como al legislativo Congreso de la República le ha fijado entre muchas otras funciones la de investigar judicialmente a los altos dignatarios del estado y a los magistrados de las alta cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral; además el Congreso tiene una función electoral ya que le corresponde elegir al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El Congreso de la República tiene, además funciones judiciales, a través de la Cámara de Representantes: tiene la facultad de acusar ante el Senado, al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación; debe conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, basar en dichas razones la acusación ante el Senado.

Otro eje sobre el cual giró la investigación es el de la intromisión de la Corte Constitucional en las tareas del Congreso de la República que ha horadado la credibilidad de ambas instituciones; igualmente se ha tenido en cuenta la violación por parte de congresistas y magistrados de los regímenes de inhabilidades y las prohibiciones, cayendo ambas instituciones en abusos de poder que llegan hasta la comisión de delitos, por los cuales

han sido algunos miembros de ambas instituciones, con lo cual han perdido la investidura de Magistrado y de Congresistas.

Empleamos la técnica de la entrevista semiestructurada para conocer de manera directa, los conceptos, las opiniones, de quienes están inmerso en el conflicto, en dichas entrevistas encontramos que los participante reconocen el fenómeno, señalan con claridad las deficiencias, Señalando incluso que es una práctica que se ha dado en todos los tiempos de la democracia colombiana, sólo que ahora se ha profundizado el problema , por el tema de la corrupción a gran escala y por la sensibilización que ha provocado el parecimiento de las redes de comunicación que han permitido la generalización del problema.

## **5.2. Participantes.**

Cinco miembros de cada institución, quienes solicitaron la no inclusión de sus nombres, ni en las entrevistas ni en los resultados de la investigación.

## **5.3. Muestra**

La actividad de la investigación se realizó en dos tiempos el primero que tuvo que ver con la realización de las entrevistas las que se vieron mediadas por las dificultades propias del trabajo de los senadores y magistrados.

Fue dispendiosa la actividad realizar las entrevistas, por los tiempos de agitación electoral en que se presentó, épocas de elección y de estudios y votación de normas referentes a los acuerdos de paz con los insurgente de la FARC las autodenominadas (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y que después de las negociaciones realizadas en la Habana



(Cuba), y después del acuerdo logrado pasaron a llamarse Fuerza alternativa revolucionaria del común), que actúa como un partido político).

El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación se ha realizado utilizando la herramienta denominada MAXQDA 18, que facilitó la sistematización y categorización de los datos obtenidos.

El análisis de los resultados se ha llevado a cabo empleando la herramienta MAXQDA 18. La utilización de este programa es para efectuar el análisis de los documentos a estudiar ha permitido la sistematización y categorización de los datos obtenidos en los documentos de

análisis, además ha permitido conocer los contenidos e identificar en ellos las variables de estudio propuestas, así como realizar un estudio más detallado.

#### **5.4. Análisis de Resultados**

El análisis de los resultados de la investigación se detallan y explican así:

- Codificación general de las variables.

- Para observar cada categoría y sub categoría.

- Distribución y frecuencia general de las variables.

- Para observar en representación la mención de cada una de las categorías.

- Análisis de la distribución y frecuencia por variable en general.

- Comentarios de los porcentajes en los hallazgos de referencias de cada subcategoría de cada categoría.

- Análisis de las respuestas presentadas por el grupo profesionales seleccionados para la entrevista semiestructurada.

Resultado general de las variables.

La investigación pretendió resolver la incógnita de Cuáles son los factores que han determinado la pérdida de legitimidad del Congreso de la República y de la Corte Constitucional en Colombia, ante este problema y para darle consistencia y viabilidad al trabajo nos propusimos como objetivo: Determinar los Factores que han originado la pérdida de legitimidad del Congreso de la República y de la Corte Constitucional. Con este propósito se construyó la hipótesis siguiente:

Los factores que han determinado la deslegitimación la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el congreso y la Corte Constitucional son:

La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización.

La pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional.

Poder político del Congreso.

Con fundamento en esta repuesta anticipada al problema de la deslegitimación de la justicia en Colombia se construyeron tres variables: la pérdida de la institucionalidad o desinstitucionalidad, la Incredulidad en ambas instituciones, y la falta de credibilidad en estos cuerpos colegiados.

Cada una de estas variables fue contrastada con indicadores confiables que pudieran probar con certeza la deslegitimación de la justicia en nuestro país.

Para la variables Pérdida de Institucionalidad, se eligieron los indicadores desconfianza, control judicial y revocatoria

La variable incredulidad se verificó con los indicadores, inseguridad jurídica, corrupción, desacreditación y clientelismo

La variable poder político del Congreso fue evaluada con los indicadores intromisión, investigación, control político y legislación.

#### 5.4.1. Pérdida de la institucionalidad de la corte y del congreso

Puede definirse la Institucionalidad como un estado en el que las instituciones cumplen a cabalidad sus objetivos y propósitos; igualmente la institucionalidad es un estado en el que las ideas, los valores, las normas y las representaciones colectivas le brindan seguridad a la sociedad y a la propia institución, es el resultado de un proceso de consolidación de conductas e ideas, de permanencia, de uniformidad de las instituciones que permiten alcanzar el fin social y político para el cual fueron creadas. (Piu daeza 2016); en fin un estado de institucionalidad se reconoce cuando el derecho es el principal instrumento del derecho; cuando la ley es capaz de guiar la conducta de los hombres y que los poderes la interpreten y apliquen en forma pertinente y congruente y sin distorsión alguna

La desinstitucionalización es el proceso absolutamente contrario ocurre cuando se ha perdido la credibilidad, cuando se ha deteriorado la confianza de la gente, si no existe acceso real y material a la justicia

Los entrevistados estuvieron de acuerdo que en Colombia, se ha perdido la confianza en las instituciones, se ha deteriorado la credibilidad, tanto el Congreso de la Republica como la Justicia, especialmente la de la Corte Constitucional ha perdido su institucionalidad.

Se afirma que la institucionalidad se ha perdió, cuando la Corte pierde su norte y conmina al Congreso a que legisle sobre determinada actividad o determinado tema, como el caso de las corridas de toro.

La Corte Constitucionalidad pierde institucionalidad cuan extralimita sus fueros cuando sus decisiones pierden el carácter o el sentido jurídico y se convierten en decisiones políticas, la Corte ha sido influenciada, señala un entrevistado, por factores económicos, desconociendo en ocasiones derechos fundamentales, como es el caso de las madres comunitarias, cuando se observa la responsabilidad de Estado y la Corte lo desconoce

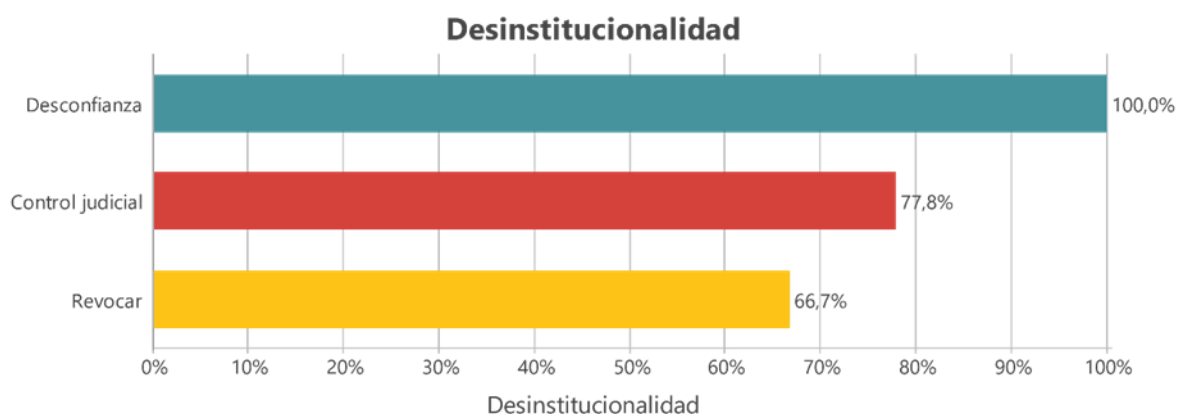
Es claro que con estas actuaciones, fue señalado por los entrevistados, los coasociados y los otros Estados, no miran la fortaleza de las instituciones, y lo que los choques entre estas dos instituciones producen es deteriorarse en su credibilidad y generar cuestionamientos en sus decisiones, debilitan su solidez.

Debe definirse la desinstitucionalidad o ausencia de institucionalidad como la pérdida de seriedad de una institución, es una ausencia de legitimidad.

La falta de institucionalidad en la justicia en Colombia se muestra con la desconfianza que la sociedad tiene de esa institución y que se prueba, con las dudas que recaen sobre el cumplimiento y ejercicio.

En Colombia, tal como lo demuestran los resultados de la investigación tanto el Congreso de la república como la Corte Constitucional reconocen el fenómeno.

**Gráfica 1 Pérdida de institucionalidad**



Como puede apreciarse en la gráfica No 1, construida con los resultados de la investigación, el 100% de los senadores y magistrados señalan que son conscientes de este fenómeno, pero que no es un elemento estructural de la justicia, sino un problema coyuntural.

Treinta y cuatro (34) menciones obtuvo la expresión desconfianza, ella fue señalada por la totalidad de los entrevistados, expresando que la desconfianza que sobre ellos recae es como consecuencia del conflicto entre las instituciones, por la intervención inadecuada de sus funciones, por la intromisión en asuntos que no son de su competencia funcional ni institucional, además por la corrupción de algunos de los miembros de las dos instituciones que salpica a la totalidad de los congresistas y magistrados.

Algunos de los entrevistados señalaron entre otros aspectos que:

“los choques entre estas dos instituciones hacen es deteriorarse en su credibilidad y generan cuestionamientos en sus decisiones, debilitan su solidez”.

Otro señalaba que el choque:

“genera sombra de duda por la llamada puerta giratoria , yo te elijo y tu no me investigas o fallas a favor mis iniciativas lo cual deslegitima las actuaciones de ambas instituciones”.

Otra de las apreciaciones obtenidas durante las entrevistas explicaba:

“Un Estado que tiene crisis institucional sobre todo en las de garantías de derechos no puede hablar de democracia porque democracia es derecho, es participación ciudadana y libertad”.

En ese sentido a pesar de existir vacíos en la Ley que regula temas específicos, o no existir regulación alguna, esta alta Corporación, en ocasiones ha sido influenciada por factores económicos o políticos, desconociendo derechos fundamentales.

Puede apreciarse, entonces, que el indicador pérdida de la institucionalidad se muestra corroborada en los resultados de la entrevista y se nota que el ciento por ciento (100%) de los entrevistados es consciente y reconoce que el fenómeno es real y palpable, así lo siente la sociedad.

En cuanto al indicador control judicial que ejerce, la Corte Constitucional sobre las decisiones política que realiza el congreso se puede apreciar que el (77%) setenta por

ciento de los entrevistados señalan que existe el fenómeno porque esa es una función de la Corte Constitucional, señalado expresamente en la Constitución artículos 240 a 245:

“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

1º “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en formación”.

Puede observarse que la Corte Constitucional puede, previa demanda de cualquier ciudadano, revisar y anular cualquier decisión que tome el legislativo —Congreso de la República—, Aquí es donde, se origina, el conflicto de poder entre ambas instituciones, por cuanto la Corte no siempre realiza estas actividades de revisión bajo el amparo de la objetividad, sino que lo hace de manera subjetiva, dado que ella tiene, constitucionalmente la potestad de interpretar la propia Constitución

2º “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.

Más aún la Corte Constitucional tiene el poder, otorgado por la propia Constitución, por la vía de la demanda que cualquier ciudadano haga de una ley, o de un artículo de la misma, de interpretar y anular cualquier ley de la República, con el agravante, que Ella, es en este sentido de interpretar en el que se extralimita en sus funciones de control judicial y ejercer control político

Quince —15— veces fue mencionada este indicador del Control judicial que ejerce la Corte, como factor de deslegitimación, de la justicia en Colombia, Algunos de los entrevistados se expresó así en este acápite:

“Tanto como invadir no; expresa un participante, sin embargo, en varios eventos, por ejemplo, cuando difiere la existencia de leyes que ha decidido declarar inexecutable o cuando declara la constitucionalidad condicionada a lo lineamientos de entendimiento de su sentencia”;

Es decir, la Corte aprovecha su papel de intérprete legítimo de la Constitución para realizar control judicial y político; imponer posiciones al legislativo, al ejecutivo y a la sociedad, apartándose en muchas ocasiones de su papel de administrador de justicia constitucional y asumiendo un papel político y demostrando poder sobre el legislativo.

Otro de los entrevistados señala que si bien la Corte ha desempeñado ese papel de control judicial, lo realiza

“cuando es evidente que el Congreso se sale de la órbita va en contra de ello, ésta sale a la salvaguarda a través de los controles de constitucionalidad”

El magistrado entrevistado reconoce que la Corte desempeña un papel judicial pero que lo hace siempre en defensa de la Constitución y que ese es precisamente la función que le ha encargado la Constitución por decisión del constituyente primario, vale decir, la Asamblea Nacional Constituyente.



Otro de los partícipes en la entrevista ha señalado, ampliando con su postura el horizonte de la pérdida de institucionalidad:

“Un Estado que tiene crisis institucional sobre todo en las de garantías de derechos no puede hablar de democracia porque democracia es derecho, es participación ciudadana y libertad.”

Puede apreciarse en el análisis de este indicador del Control judicial, que el setenta y siete por ciento (77%) de los entrevistados comparte la opinión que mediante el control judicial la Corte Constitucional, supera los límites de su poder judicial y se toma el poder político.

Ha podido advertirse al observar los resultados de la investigación y que se muestran en la tabla anterior, que un 23% de los entrevistados, no cree que la Corte haya superado los límites que le traza la Constitución y que por el contrario no hace actividad distinta que un control constitucional, que por derecho le corresponde a las leyes, a los actos legislativos y a los decretos leyes que realiza el Congreso y en ocasiones el ejecutivo.

Lo anterior se corrobora con lo expresado por algunos de esos entrevistados que se apartaron de la mayoría en sus conceptos y opiniones:

“Considero, dice un magistrado, que para fortuna de los ciudadanos la justicia en este orden mantiene su independencia, sería grave para un orden justo que la injerencia se causara”.

Para este jurista no hay injerencia de la Corte en las tareas que le corresponde al Congreso. En el mismo sentido otro de los juristas expresa:

“Considero que el Norte de la Corte Constitucional es mantener las instituciones y las normas que materialicen el Estado Social de Derecho y

cuando es evidente que el Congreso va en contra de ello, esta sale a la salvaguarda a través de los controles de constitucionalidad.; puede apreciarse que para algunos integrantes de los entrevistados La Corte Constitucional, cumple a cabalidad sus funciones Constitucionales, estatutarias y reglamentarias”.

Otro explica que cuando el Congreso omite el cumplimiento de su labor legislativa, la Corte lo hace por la vía de interpretación normativa y quien pierde credibilidad es el Congreso, pero que la institucionalidad del estado permanece Intacta.

En síntesis puede afirmarse que la mayoría de los entrevistados, congresistas y magistrados son de la opinión que si existe un control por la vía judicial a la labor del Congreso de la República

#### 5.4.2. Revocatoria.

Se define la revocatoria, como el proceso, mediante el cual se anula una norma legal, un decreto o una sentencia, por parte de un juez o una autoridad competente. El acto constitucional mediante el cual la Corte Constitucional, por virtud y autorización de la Constitución, declara mediante sentencia, que una ley aprobada por el congreso de la república es declarada nula.

Otro de los indicadores seleccionados para analizar la variable desinstitucionalidad o pérdida de la institucionalidad es la que tiene que ver con la capacidad y autoridad legal que tiene la Corte Constitucional de revocar, es decir, anular las normas que haya aprobado el Congreso de la República, como ejercicio del control de constitucionalidad que hace la institución, incluso de oficio, sin necesidad de que ningún órgano de la Administración, o ningún ciudadano así lo soliciten o demanden

Esta competencia ha sido otorgada a la Corte por la Asamblea Nacional Constituyente, en El artículo 241, de la Constitución Política. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución,.

Se hace preciso previo al análisis e interpretación del estudio, precisar el alcance y significado e cada una de estas expresiones para alcanzar el máximo grado de comprensión de los resultados del estudio.

“Si algo ha quedado claro es que el sistema judicial está descompuesto gracias a la corrupción, a la politización de la justicia y a la judicialización de la política”

La palabra descompuesto utilizada por el entrevistado es en este caso sinónima de deslegitimación y señala tres razones para esa “descomposición”:

“corrupción, politización de la justicia y judicialización de la política”

Corrupción en la justicia pues este problema ha llegado hasta los más altos tribunales; en cada uno de ellos se han descubierto, denunciado y juzgados a varios de estos magistrados, están cumpliendo condenas intramurales y otros en procesos de juzgamiento, por casos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Que el poder judicial se ha deslegitimado se prueba, dice un legislador, por el lamentable espectáculo de la “rendición de cuentas” de la Corte Constitucional, donde salieron con un “chorro de babas” y sin poder desmentir la denuncia que ha hecho el magistrado Pretelt de otros de sus colegas por tráfico de influencias, sin que a ellos les pase nada; El magistrado Pretel de quien habla el entrevistado, no es otro que un magistrado, de la

Corte Constitucional que fue juzgado y condenado por tráfico de influencias, abuso de poder y corrupción, en un proceso de amplia difusión en el país que fue conocido como “el cartel de la toga”

Otro de los entrevistados señaló:

“ que el poder judicial se ha deslegitimado se prueba por el hecho de que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan renunciado en supuesta protesta por lo que acontece en el tribunal constitucional, pero que curiosamente, dicha magistrada una de las dimitentes, haga efectiva su dimisión ¡dentro de dos meses!, cuando apenas faltarán días para su retiro forzoso. Esta es la magistrada que condenó a diez y siete años a un exministro por firmar un contrato con una reconocida entidad internacional”.

La deslegitimación de la justicia es, si se quiere, el síntoma más grave de la descomposición de nuestro Estado de derecho. Y no se supera con paños de agua tibia ni con remedios formulados por los propios responsables de esta catástrofe. Hay que apelar al soberano para que ponga fin a esa situación entrópica, explica uno de los entrevistados señalando como se puede ver que la respuesta a la corrupción, a la politización y a la deslegitimación de la justicia es convocar al soberano, es decir al constituyente primario para que se exprese a través de una asamblea nacional constituyente.

#### 5.4.3. La desconfianza

Se define como una emoción negativa que implica la falta de seguridad sobre las acciones y “individuo que tiene como base suponer que el otro va actuar mal y esto alimenta la desconfianza. Explica un entrevistado afirmando:

“ Los más reciente hechos acaecidos en la Corte Constitucional han minado la confianza que el ciudadano común tenía sobre esta Corte, pues se la tenía como símbolo de pulcritud y credibilidad”.

Este es un indicador que muestra el deterioro de la institucionalidad de la Corte y del congreso El ciento por ciento (100%) de los entrevistados señaló que la pérdida de la confianza en el legislativo es real, que lo sienten y lo perciben en su relación con la comunidad, especialmente la comunidad en donde cada uno tiene o ejerce su influencia y su poder

La desconfianza es un sentimiento negativo, que implica inseguridad sobre las acciones futuras de otra persona. Es opuesta a la confianza, que consiste en creer una hipótesis que se espera sin incertidumbres, es decir teniendo la seguridad de que algo suceda como se lo espera, o que alguien actúe de determinada manera. La gente desconfía tanto del Congreso de la República como de la Corte constitucional

El “siglo de los jueces” no duró un año. El deterioro de la percepción de la opinión pública sobre el sistema judicial no solo se explica por los carruseles de corrupción de magistrados y políticos que han sido evidenciados por los medios de comunicación ni por la resistencia de los altos tribunales a reformarse o a recortar su poder. También influye la ineficiencia y la ineptitud de una administración de Justicia que deja libres a los delincuentes, toma años para decidir, solo reacciona rápido ante los casos “célebres” en los medios, y es literalmente para los de ruana”.

El daño que hace al sistema democrático una Justicia corrupta, soberbia, politiquera y desconectada de las urgencias ciudadanas es incalculable. Mucho más grave en medio de

la implementación de los acuerdos con las Farc en los que el Gobierno Santos negoció sacrificar Justicia a cambio de paz

Sin embargo uno de los magistrados señala que la intervención de temas sensibles obedece a la omisión y debilidad en el cumplimiento de sus funciones

“La intervención de la Corte Constitucional en las leyes aprobadas por el Congreso responde a la debilidad institucional de ese órgano, quien no realiza un efectivo desarrollo normativo de temas fundamentales”.

Los temas a que hace alusión el entrevistado son entre otros la adopción de menores por parejas de la comunidad LGTB; o revocar la decisión del Congreso de anular el Consejo Superior de la judicatura, disposición legal que había sido bien vista por la ciudadanía, pues se tiene a esta institución como inoperante ineficaz y altamente politizada

Uno de los magistrados entrevistados señaló:

“Los congresistas no asumen con responsabilidad sus funciones, no asisten a las plenarias, se excusan bajo cualquier supuesto y lo peor, es que no tienen equipos interdisciplinarios que aporten información fundamental en la elaboración de los proyectos de ley”.

Expresando que el Congreso tiene menos credibilidad que la Corte Constitucional. Otro magistrado se expresó afirmando que:

“en Colombia más que el descredito sobre la corte se evidencia más sobre su congreso por no cumplir fielmente como órgano de control político y por su permisividad ante la interferencia del poder presidencialista en las decisiones del parlamento”;

Lo cual implica que el Congreso de la República incumple el papel que la Constitución le asigna, razón por la cual pierde su institucionalidad.

Uno de los legisladores dijo durante la entrevista que:

“en Colombia la democracia no se concibe desde los derechos sino desde la participación política lo cual es totalmente equivocado ese pensar”

Ese pensamiento coincide con el de algunos otros entrevistados que señalaron que a pesar del Estado Social de Derecho, de corte garantista que se pregona en el país desde la promulgación de la Constitución de 1991, La democracia se ejerce más de acuerdo con la participación en la política en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos.

Los últimos acontecimientos en los que aparecen involucrados algunos magistrados en conducta han minado la confianza en la justicia por parte de los ciudadanos; la justicia y la presencia del congreso no se materializan en la práctica cotidiana lamentablemente, cotidianamente nuestra sociedad da muestras de ausencia de justicia y de legisladores, esta crisis de credibilidad y desconfianza desestabiliza al Estado. La justicia por mano propia se está imponiendo, llevándonos a una dramática espiral de violencia.

Los escándalos en la Corte Constitucional produce serios estragos que difícilmente podrán corregirse si no se replantea el pacto constitucional de 1991.

En primer lugar, ha desaparecido la certeza de honestidad que tenía la Corte Constitucional, como órgano de cierre de tutelas, es decir de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos La acción de tutela es una verdadera revolución institucional en Colombia. De hecho, la Constitución de 1991 tiene un valor esencial por su inclusión, toda vez que es el mecanismo idóneo para realizar los derechos fundamentales. Sin embargo, el escándalo ha sembrado dudas y desconfianzas que se traducen en incredulidad. Ahora el ciudadano comprende que sus derechos pueden ser transables,

vale decir se pueden comprar y vender. Se ha probado por parte de la Justicia que hay magistrados que trafican sentencias.

En segundo lugar se plantea una deleznable idea sobre la composición de la Corte Constitucional, no llegan los mejores, la manera de ser seleccionados no es la más idónea, además que varios de ellos están implicados en delitos como solicitar dineros para influenciar sobre sentencias tutelares y otros por faltas disciplinarias graves, violaciones al código disciplinario de los abogados, algunos han sido denunciados antiguos poderdantes por faltas a la ética. Fue tan grave y de tanta trascendencia el problema que el propio gobierno solicitó investigar a fondo las denuncias de corrupción en la Corte Constitucional

Un tercer elemento es el cuestionamiento de la idea de jerarquía de la justicia en Colombia; cuando la Asamblea nacional Constituyente de 1991, instituyó la Corte Constitucional, se la tenía como máximo referente de la justicia, era un modelo a seguir, un punto de llegada para abogados y jueces. Los escandalosos hechos, los delitos denunciados juzgado y probados están haciendo un gran daño a la institucionalidad, ya no se la tiene como paradigma digno de imitar; lo preocupante es que de la crisis se puede pasar a la anarquía en la justicia. Es un peligro latente.

Finalmente empieza a tomar forma una idea trazada en los diálogos de la habana de realizar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para la reconstrucción de la justicia en Colombia; igualmente aprovechando esta crisis sectores políticos de extrema derecha han planteado también la idea de hacer reformas a la constitución que reestructuren a la justicia, y que se recorte el alcance de la acción de tutela y se limite la protesta social, es



decir, se aprovecha la desinstitucionalización de la Corte y el Congreso para sacar ventaja política.

Otro ingrediente es la desconfianza del ciudadano del común, no cree en la institución, la idea de justicia se deteriora en la conciencia del ciudadano; no encuentra árbitros idóneos, imparciales ni probos para sus problemas. Una profunda desconfianza se apodera del ánimo de la ciudadanía que mira como las instituciones que representan la democracia y la justicia pierden legitimidad, se desacreditan y se produce la pérdida de institucionalidad

Es una realidad que tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional han perdido credibilidad, la ciudadanía desconfía de su trabajo.

#### 5.4.4. Control judicial.

Es un indicador mencionado en quince ocasiones por los entrevistados; los del Congreso, se expresaron en el sentido de decir que “Tanto como invadir no; sin embargo, en varios eventos, si lo han realizado, por ejemplo cuando La Corte Constitucional difiere la existencia de leyes que ha decidido declarar inexecutable o cuando declara la constitucionalidad condicionada a los lineamientos de entendimiento de su sentencia”, lo cual pone en tela de juicio de eficacia del Congreso frente a la Sociedad.

Por otra parte, los magistrados de la Corte han señalado que la Institución tiene poca participación en eso de invadir espacios políticos del legislador y la Corte, dicen, ha salido adelante y lo único que hacen es cumplir el control constitucional a las leyes que aprueba el

congreso; dicen además, que para fortuna de los ciudadanos la justicia en este orden mantiene su independencia, sería grave para un orden justo que la injerencia se causara.

La Corte Constitucional, expresan los entrevistados de ese órgano judicial, que su labor es la de salvaguardar la Constitución:

“cuando es evidente que el Congreso va en contra de ello, ésta sale a la salvaguarda a través de los controles de constitucionalidad; La Corte Constitucional ejerce control a través de las demandas de inconstitucionalidad que cualquier ciudadano puede ejercer”.

Algunos fueron mucho más allá y señalaron que:

“la Corte Constitucional ha debido poner freno a otro número plural de aprobaciones legislativas”.

El control de oficio que de la ley hace la Corte Constitucional no siempre es muy efectivo, sin embargo, existe las demandas por inconstitucionalidad, que hacen que los ciudadanos quienes pueden, por autorización de la Constitución Política, solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de cualquier ley, en cualquier tiempo.

El meollo del conflicto es que Constitucionalmente hay control político y no solo jurídico de la Corte Constitucional sobre el Congreso de la República. Es decir la Corte al declarar que una ley aprobada por el Congreso es inexecutable, esta no se aprueba y lo que hizo el Congreso pierde valor, lo cual es no solamente un control jurídico, sino la demostración y el ejercicio de un poder político; es en este poder de decisión en donde entran en choque, en controversias.

La mayoría de los entrevistados, tanto los magistrados como los congresistas afirmaron que el Estado que tiene crisis institucional sobre todo en las de garantías de derechos no puede hablar de democracia porque democracia es derecho, es participación ciudadana y libertad y acá en nuestro medio lamentablemente eso no se cumple eficazmente, el usos de las libertades y la defensa de los derechos no se observa plenamente.

Algunos integrantes de la Corte expresaron que el Conflicto de poderes alcanza su punto más álgido con la Ley de equilibrio de poderes aprobada por el Congreso de la República mediante el acto legislativo sobre reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional-Supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sustituye parcialmente la Constitución Política de 1991, ante esta reforma Constitucional del año 2015, Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015 emanado del Congreso de la República la Corte respondió con la Sentencia C 285de 2016, en la que expresó sus reparos al Acto Legislativo diciendo:

Que el mecanismo de la reforma constituyente fue utilizado de manera ilegítima por el Congreso de la República, no para introducir cambios sustantivos en el sistema de gobierno y administración del Poder Judicial, sino con el propósito de materializar un interés político que no se había logrado a través de otros mecanismos, como es la destitución de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, pero dejando intactos los elementos estructurales del modelo anterior, con algunos retoques artificiosos, es decir se trata de horadar el poder de la rama judicial.

En la sentencia producida por la Corte Constitucional se señaló que:

Desde hace varios años distintos núcleos políticos tenían el interés de destituir a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Tal como se encuentra registrado por los propios medios de comunicación. Como puede apreciarse el conflicto político se agrava y las mutuas recriminaciones hace daño a ambos actores y la situación repercute de manera negativa en la sociedad.

Tras varios intentos fallidos, dice la Corte estos actores, refiriéndose al Congreso de la República decidieron apelar a la reforma constitucional, transmitiendo el mensaje errado de que esta tendría por objeto incorporar un nuevo modelo de dirección y administración del Poder Judicial, cuando el esquema fue dejado intacto y solo se materializaron cambios de orden nominal, y cuando el único efecto jurídico real y concreto fue efectivamente la destitución de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, encubierto bajo la fachada de una reforma constitucional. Es decir, utilizaron su poder legislativo para violar la propia constitución y disminuir el poder de la Rama judicial

El experto Osuna Patiño (2003) explicó que el Acto Legislativo dejó incólumes los problemas estructurales de la administración de justicia en el país, en la medida en que la reforma no fue concebida para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, sino como un mecanismo para materializar y viabilizar el interés de algunos segmentos políticos de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, sustituyéndolo por otro órgano que asumiría sus funciones y su rol institucional. Por este motivo, la reforma constituye una oportunidad perdida para afrontar los problemas y las dificultades reales de la justicia en el país, y su impacto en esta materia será escaso o nulo.

Frente a este señalamiento, el experto jurista Diego López Medina (2018) sostuvo que entender el Acto Legislativo 02 de 2015 como una revancha política o como un acto punitivo, constituye una aproximación inadecuada. A su juicio, este marco de análisis en el

que se concibe la reforma constitucional como una especie de proceso disciplinario realizado por el Congreso a la Rama Judicial, y que habría concluido con la sanción sui generis de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, es poco provechoso porque únicamente alimenta orgullos lastimados, y pierde de vista y descuida el problema fundamental de la reforma, que es el usuario de la justicia.

En este orden, la Corte constitucional confirma su poder para valorar el ejercicio de la competencia de reforma el Congreso de la República, constituyente derivado o secundario por la presunta supresión de los ejes fundantes del ordenamiento superior.

El principio de separación de poderes obedeció históricamente a dos fundamentos básicos: en primer lugar, a la necesidad de limitar el poder, a efectos de evitar concentraciones de autoridad que nacen necesariamente en regímenes autocráticos y autoritarios opuestos al principio democrático y al modelo republicano; y en segundo lugar, a la de potenciar la realización de los derechos y libertades fundamentales propias del Estado garantista. Del nuevo Estado social de Derecho, a través de la diferenciación y especialización de las funciones estatales, y su atribución a órganos separados y autónomos.

En cumplimiento de esos objetivos, el principio de separación de poderes tiene dos tipos de exigencias: Por un lado, se requiere identificar las funciones estatales, y asignar a cada una de las ramas y órganos del Estado, en principio de manera exclusiva y excluyente, los roles institucionales derivados de los fines esenciales de la organización política.

Los papeles desempeñados corresponden a las actividades legislativa, ejecutiva y judicial, de modo que cada una de ellas se asigna a los tres poderes clásicos del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial. No obstante, en la medida en que la vida social se ha tornado más compleja, y en la medida en que el Estado ha debido asumir nuevas tareas para dirigir la vida social en su nueva dimensión, han surgido otras tareas como la función electoral y la función de control, y en esta medida han aparecido nuevos órganos separados de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, como acontece con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, la institucionalidad al interior de cada rama se ha incrementado, con el objeto asumir las nuevas responsabilidades estatales. En cualquier caso, la reconfiguración del Estado ha estado orientada por esta misma lógica impuesta por el principio de separación de poderes.

Y por otro lado, el principio de separación de poderes exige la independencia y la autonomía de los órganos a los que la Constitución atribuye las funciones esenciales del Estado, entendiendo por independencia la ausencia de injerencias externas en el desarrollo de los cometidos constitucionales del respectivo órgano, y por autonomía, el otorgamiento, a cada uno de tales órganos, de la capacidad para desenvolverse y desplegar sus actividades por sí mismos, y para autogobernarse. De hecho, la separación de poderes, como instrumento de limitación del poder y como garantía institucional de las libertades y de la eficacia en la actividad estatal, no tendría ningún sentido y tampoco podría materializarse, si los órganos que asumen de manera separada las funciones y los roles del Estado no contaran con instrumentos para garantizar su independencia.

#### 5.4.5. Incredulidad en la Corte Constitucional.

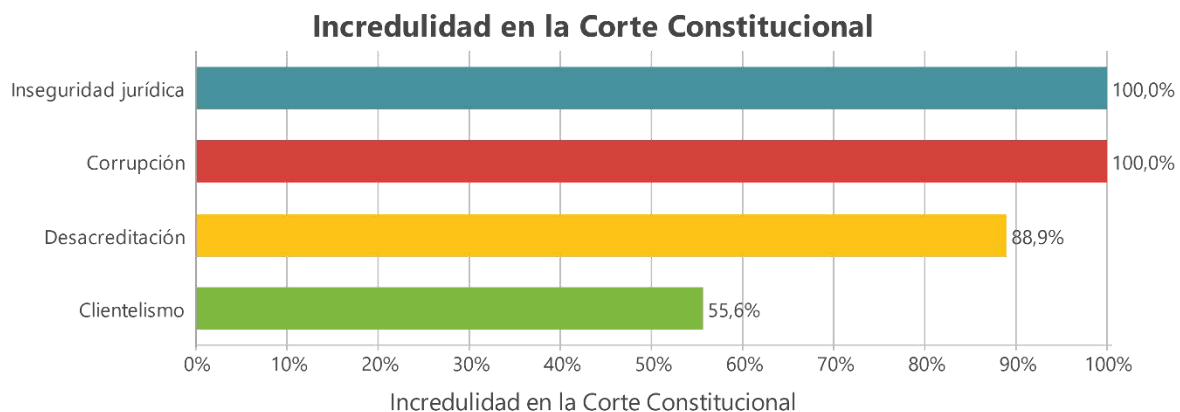
La importancia que otorga la legitimidad, se traslada en un poder de autoridad, esto se basa en que la legitimidad otorga eficacia al poder, que nace de las mismas fuentes de donde emana en la sociedad, a través del poder originario del Constituyente primario; que se formaliza y obtiene su fuerza en la obligatoriedad que le da la ley y en su propia competencia, puesto que al ir cumpliendo de manera eficiente su papel, va obteniendo credibilidad

El problema del deterioro de la legitimidad y de la credibilidad se hace visible también en la medida en que el manejo de la idoneidad es deficiente, sus actuaciones, en ocasiones apartadas de la ética, mostrándose virtuosas, cuando no lo son y la legitimidad que antes tenían plenamente se va perdiendo y con ella la credibilidad que de ella tienen los otros estamentos

El universo entrevistado para el desarrollo de esta investigación mostró que tanto congresistas como magistrados reconocen que la pérdida de credibilidad tanto en las decisiones y actuaciones de la Corte genera inseguridad jurídica, entendida ésta como la ausencia de las garantías dadas al individuo por el Estado, que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y si esta situación se diera, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.

En síntesis, la inseguridad jurídica es la ausencia de certeza en el derecho y en la política que tiene el individuo de modo que su situación jurídica podría ser modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados, por actuaciones alejadas de la Ley, de la ética y aún de las buenas costumbres

**Gráfica 2 Incredulidad en la Corte Constitucional**



Fuente: Elaboración propia

En la gráfica sobre la Incredulidad en la Corte Constitucional, desarrollada con los resultados de las entrevistas realizadas a magistrados de la Corte Constitucional y a congresistas, se observa cómo los entrevistados reconocen en un ciento por ciento (100%) que en los momentos de crisis política que atraviesa el país, las actuaciones antiéticas,



inmorales y aledas de la ley, han producido en el país una inseguridad jurídica que no permite la confianza de los ciudadanos e las instituciones.

Igual porcentaje obtuvo el indicador Corrupción un ciento por ciento (100%) de los entrevistados manifestó su aceptación del hecho incontrovertible de que este mal ha permeado la estructura del poder en Colombia y las ramas legislativa y judicial no escapan de este flagelo, del que indican es una pandemia.

Se observa también en los resultados del proceso de investigación que el 88% de los entrevistados reconoce que ambas instituciones están desacreditadas, y que ganarse la confianza y la credibilidad de la sociedad colombiana es tarea difícil, sobre todo que no aparecen conductas que den alguna muestra de querer cambiar las costumbres de aprovecharse del cargo para obtener ventajas individuales del cargo que desempeñan.

Puede apreciarse en la gráfica, que otro de los indicadores que demuestran la poca institucionalidad de la Corte, es el fenómeno del clientelismo. Salomón Kalmonoviz Krauter economista y politólogo colombiano señala, en un artículo titulado Corrupción y clientelismo Krauter (2017) expresa:

“La corrupción no es solo un problema de malandros. Se trata de un sistema político clientelista basado en un intercambio de votos por dinero y apoyos electorales por contratos. Los incentivos en su interior premian el castigo y castigan la probidad, promueven a los oportunistas y hunden a los buenos”.

Lo expresado por el científico social es una situación ampliamente conocida por la comunidad, los medios de comunicación lo divulgan, lo denuncian pero no pasa nada. El ex director del Banco de la república ahonda en su comentario y continúa diciendo:

“Una de las condiciones de la corrupción es que la justicia misma sea corrupta, desgredada e ineficiente. Los corruptos saben que aún si son descubiertos sus fechorías no serán castigados, pues los jueces también se prestan a intercambios de nóminas y posiciones para mantenerse en la cúpula de la justicia”

La característica incredulidad en la Corte y en el Congreso hace referencia a la ausencia de seguridad jurídica. La seguridad Jurídica se reconoce en el ambiente político y jurídico de una sociedad como un fundamento esencial que consiste en la convicción, en la certeza que tienen los asociados sobre el alcance y las limitaciones que tienen las decisiones políticas, las normas que una sociedad tiene como su valor máspreciado. La seguridad que los derechos y obligaciones tienen plena vigencia y serán defendidos y reconocidos por las autoridades y por los propios ciudadanos

Debe entenderse que el cumplimiento de la seguridad jurídica implica la reafirmación del concepto de justicia.

El legislativo produce las Leyes y corresponde a los jueces todos conferir seguridad en los casos puesto a su conocimiento para su determinación; cuando esto no ocurre se siembre inseguridad, desconfianza y anula la credibilidad en las instituciones.

Cuando, como ocurre en estos tiempos las instituciones irrespetan su compromiso de no invadir los espacios de poder político y jurídico de cada una de las instancias y ramas del

poder público, la consecuencia inmediata es la aparición de un ambiente de inseguridad; la lucha y la demostración de poder causa desazón en el espíritu colectivo de la nación

Antes de eso, también la Corte Suprema había desacatado el año anterior sendos fallos de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, también en materia de amparo, fundándose en una mal entendida intangibilidad de sus providencias. Y sabemos que ella no puede ser reconocida cuando el juez de tutela encuentra configurada una vía de hecho, como aconteció en esos casos.

La investigación desarrolló cada uno de los indicadores de las características planteadas.

#### 5.4.6. Inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica que fue mencionada veintitrés (23) veces, en las respuestas de los entrevistados, ha generado desconfianza en el conglomerado pues se vislumbra falta de profesionalismo en la elaboración de las leyes y sentencias y distanciamiento en la prevalencia del interés general, expresó uno de los entrevistados

De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, la inseguridad jurídica ha sido propiciada por los escándalos de los últimos años, de los cuales han sido protagonistas varios de los magistrados incluyendo dos expresidentes del máximo tribunal hacia la Corte Constitucional se da por los reiterados escándalos de corrupción en que se han visto involucrados varios magistrado de la Corte, expresan varios de los participantes en las entrevistas. El fenómeno es visto por ellos mismos como una catástrofe pues a la entidad se la tenía como órgano de cierre y que posibilitaba y permitía el alcance la justicia, en cuando a las garantías constitucionales y derechos fundamentales se refiere.

Dos de los entrevistados expresaron que la Corte Constitucional ha sido timorata al desarrollar los derechos trascendentales, que hoy han sido tomado por los actores políticos, como banderas de poder, tales derechos son la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia.

Aseveran además, que la escogencia de candidatos por parte del ejecutivo, facilita la interferencia de éste en asuntos de su interés, por ello la sociedad los mira como magistrados del ejecutivo, que aprueban la constitucionalidad de algunas leyes de dudosa reputación por exigencias del ejecutivo. El hecho de que la presidencia de la república deba presentar nombres como candidatos a ser tenidos en cuenta por el Senado de la República como posibles magistrados de la Corte Constitucional, es una muestra de debilidad de la democracia, y un indicio de dependencia política

Por ello, dicen varios entrevistados que la toma de decisiones de interés político o particular, antes que defender la propia constitución o la guarda y defensa de los principios constitucionales, eso hace, expresan que la sociedad, que las otras instituciones, consideren que con esas actitudes y decisiones se afecta la credibilidad y se pierde la seguridad jurídica necesaria para la democracia.

La seguridad jurídica se ha perdido esbozan otros por cuanto no hay magistrados que vengan de la academia, la mayoría provienen del sector político y así se muestran en sus decisiones, liberales o conservadoras,, eso no brinda seguridad jurídica ni a la sociedad, ni a las propias instituciones gubernamentales.

La Corte Constitucional ha conminado al resolver demandas de inconstitucionalidad y acciones de tutela al Congreso para que legisle en diversas materias, merced al vacío, la

ambigüedad o la incompatibilidad de las leyes frente a la Constitución Política, generando cuestionamientos y roces entre esos órganos de poder.

El abuso de la función pública y la omisión en el cumplimiento del deber enlodian tanto al Congreso como a la Corte Constitucional. Se legisla en el Congreso, divorciándose de los valores que deben contener las normas, tales la justicia, la paz y el bien común.

La sociedad reclama que se implemente el concurso de mérito para acceder a las altas cortes, pues, dada la forma como se integran terminan politizándose, en tanto, tienen origen en su formación en ternas del ejecutivo. De tal manera, que sus miembros podrían comprometerse y actuar sin la libertad que debe regir al dispensador de justicia, es la manera de pensar de varios de los congresistas y aún de otros miembros de la Corte

Se apoderan, en el caso de la Corte, de una institución que debe ser imparcial, de tal manera, que termina defendiendo los intereses de un grupo con las decisiones judiciales que se emiten y no los intereses del bien común.

Yo no creo, expresa un magistrado que se aparta del concepto general que se haya afectado en mucho, recordemos que el Congreso de la Republica, desde hace mucho tiempo ha venido perdiendo credibilidad por los actos masivos de corrupción ,

Este conflicto, afecta de manera protuberante los fines propios del Estado, el ejercicio de la independencia de poderes, la credibilidad de las instituciones estatales, la legalidad de sus actuaciones y en general ponen en peligro la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Genera incertidumbre jurídica y afecta la inversión extranjera, ofrece muy poca credibilidad por parte de los ciudadanos por las razones antes expuestas

Precisamente las investigaciones que hace la Corte Suprema de justicia sobre magistrados de la Corte Constitucional y congresistas deslegitiman sus actos y ponen en entredicho sus leyes y las sentencias de la Corte Constitucional

Genera sombra de duda por la llamada puerta giratoria , yo te elijo y tu no me investigas La intervención de la Corte Constitucional en las leyes aprobadas por el Congreso responde a la debilidad institucional de ese órgano, quien no realiza un efectivo desarrollo normativo de temas fundamentales.

Podría considerarse que este tipo de conflictos desfigura el modelo o sistema de frenos y contrapesos acogido por Colombia como Estado Social de Derecho, consistente en una separación funcional de los órganos estatales en la cual cada uno se especializa en la materia que constitucionalmente le fue asignada. La mixtura creada por la Asamblea Nacional Constituyente no favorece el cumplimiento de este modelo.

Se afecta, la seguridad jurídica, cuando no se ejerce las competencias que la misma Constitución otorga a cada órgano ya que todos confluyen en garantizar ese modelo de Estado. Uno de los aportes al modelo de Estado Social de Derecho y su fortalecimiento es el desarrollo de lo que los constitucionalistas llaman el neo constitucionalismo.

Porque se entendería que no existe la independencia de la justicia y la neutralidad del poder político de los llamados a aplicar el derecho y la justicia. En un Estado que respete la institucionalidad y la independencia de las mismas, se fortalece el garantismo y la confianza ciudadana y bajo esta premisa la sociedad asume el sentido de la función de

juez natural de las cortes por parte del congreso. Por no mantener su posición neutral o mejor su independencia frente a las demás ramas del poder público

Un Estado que tiene crisis institucional, expresa un congresista, sobre todo en las de garantías de derechos no puede hablar de democracia porque democracia es derecho, es participación ciudadana y libertad. En un Estado de derecho cada una de las ramas o órganos estatales tienen sus funciones y en un estado de derecho no es permitido que una de las ramas del poder se abrogue competencias de facto.

La Corte ha invadido las funciones del Congreso, enfatiza otro congresista entrevistado, extralimita sus funciones, cuando bajo el amparo de interpretar la Constitución, ha declarado inconstitucional o inexecutable reformas constitucionales o leyes, que el Congreso en ejercicio de sus funciones y con el debido trámite ha emitido, pero que de una u otra forma afectan sus intereses políticos o su rango de poder, o el de otra corporación judicial; en mi opinión, continúa diciendo el legislador, la pérdida de credibilidad de la Corte ante la opinión pública, se debe a que en algunas ocasiones ha tomado decisiones que parece que hubiesen sido más por interés político, o particular de defender poderes o privilegios, que por interés en la protección y guarda de la constitución.

Se afecta, porque el conflicto entre poderes, deteriora la armonía y colaboración que debe existir entre las ramas del poder público, a efectos de lograr los fines del Estado, según la teoría de la democracia con división de poderes, entre ellos, el aseguramiento del ejercicio de los derechos fundamentales, a través de la acción de tutela, la cual viene siendo objeto de discordia en algunos casos

Se deteriora con la pérdida de confianza y credibilidad en ambas instituciones, porque se refleja el interés de cada institución en asegurar y mantener más poderes en detrimento de los otros y en el caso de la corte con el congreso, en no dejarse quitar los derechos o poderes que tiene, los cuales defiende a través de los fallos de constitucionalidad.

Igualmente se piensa que algunas veces es asunto de retaliación del congreso, por los fallos de inconstitucionalidad que profiere la corte en algunos casos de mayor interés para el congreso.

En virtud de la forma en que son elegidos los magistrados de la Corte Constitucional, los partidos políticos cobran una relevancia en las decisiones de esta misma corporación. Aunque en la práctica resulte difícil probarlo, algunos de los togados llegan a la magistratura debiendo favores políticos a sus electores –miembros de los partidos políticos- por conducto de los congresistas.

Igualmente se piensa que algunas veces es asunto de retaliación del congreso, por los fallos de inconstitucionalidad que profiere la corte en algunos casos de mayor interés para el congreso.

En Colombia más que el descredito sobre la Corte Constitucional se evidencia más sobre su Congreso por no cumplir fielmente como órgano de control político y por su permisividad ante la interferencia del poder presidencialista en las decisiones del parlamento.

La desgastada credibilidad del Congreso no mengua por estas decisiones; tales providencias corroboran la incompetencia de la Rama Legislativa. Es más: La Corte



Constitucional ha debido poner freno a otro número plural de aprobaciones legislativas, es el pensamiento de un magistrado

No se ha visto afectada realmente, en lo personal creo que son las dinámicas propias de un sistema democrático dividido en poderes públicos dinámicos, y frente a lo que creo que perciben la sociedad sobre este hecho, advierto que hay poca asunción del tema, algo de indiferencia y conformismo con las instituciones. Por lo tanto, más de lo que de por si están afectadas la credibilidad por este hecho no la percibo; señala uno de los magistrados partícipes del estudio

En mi criterio, dice, no se han roto, conservan su independencia y autonomía, podrá haber desacuerdos y opiniones encontradas, pero no existe el tan mencionado por prensa, choque de poderes, o de trenes como popularmente se expresa

No lo percibo, pero de llegar a darse , indudablemente las garantías y derechos de los ciudadanos podrían verse afectado dado que se estarían privilegiando intereses particulares sobre el interés de la comunidad

Creo que aun la afectación no sobrepasa la esfera de lo personal, se toman como conductas delictivas individuales, pero la corte como institución no ha sido afectada mayormente, lo cual si puede ocurrir con otras cortes o instituciones

Creo que aun la afectación no sobrepasa la esfera de lo personal, se toman como conductas delictivas individuales, pero la corte como institución no ha sido afectada mayormente, lo cual si puede ocurrir con otras cortes o instituciones

Se afecta por la falta de seguridad jurídica para resolver los conflictos no solo entre personas sino también institucional

#### 5.4.7. Corrupción.

Esta alta Corporación, en ocasiones ha sido influenciada por factores económicos o políticos, desconociendo derechos fundamentales, como por ejemplo en relación con el tema de las madres comunitarias, van es a favorecer intereses de ciertas personas o partidos políticos, entonces, como quien dice, te elijo pero el favor me lo devuelves de lo contrario no te elijo. Favor con favor se paga.

No ejerce un control político materialmente ni formalmente, no está en sus funciones, Sus funciones, descritas en el artículo 241 de la Constitución, consisten en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformativos de la Constitución

Las decisiones de la Corte Constitucional, son netamente políticas y no jurídicas, siendo ahí, quienes marcan, enseñan, siguen, adoctrinan, implementan o cumplen con una política diseñada que los caracteriza, son indudablemente los partidos políticos

Esta facultad de nombramiento puede conllevar como en efecto se ha presentado en los últimos casos conocidos, a una forma de clientelismo judicial, donde prima el intercambio de favores entre electores y elegidos, afectando el prestigio con que alguna vez contó el Alto Tribunal Constitucional.

Por las injerencias que muchos de estos tiene en la contratación en todas las áreas, como por ejemplo en el área de la salud, de la construcción por mencionar algunos.

A pesar de los últimos escándalos que sin duda han ocasionado una disminución en la favorabilidad de ese Tribunal. Por su parte la credibilidad del Congreso va en pique, la razón fundamental es la corrupción, lo que genera en la ciudadanía un repudio total frente a todas las actuaciones que emanen de dicho Órgano, sin olvidar que en materia legislativa son muchos los reparos y críticas constantes de la ciudadanía.

Para la sociedad una corte cuyos magistrados representan al ejecutivo necesariamente su objetividad se encuentra limitada a quien lo postulo, sino obsérvese el caso de los magistrados de la corte escogidos por el congreso y a quienes se le impuso el deber de avalar las leyes relacionadas con el proceso de paz.

Que ha primado el interés particular, parcializando la justicia No se ha resquebrajado. Su contubernio es permanente . Por no mantener su posición neutral o mejor su independencia frente a las demás ramas del poder público pretenden celebrar contrato estatales con los particulares, pero elevando los costos y obteniendo ellos un porcentaje de los dineros girados por el Estado. Los escándalos de los últimos años en los cuales han estado salpicado algunos Magistrados y congresistas, todo es corrupción

Pero si acuerdos de los candidatos que una vez lleguen hacer magistrados deben cumplir compromisos

En algunas de las sentencias se observa una inclinación hacia los intereses de la clase política dominante en el país, pero sobre todo en el Congreso de la República, las injerencias del Congreso en el ejecutivo para la consecución de cargos públicos y contratos

para su familia, para su grupo político o para terceros, en muestra evidente de corrupción política

Los recientes casos de corrupción de la Corte investigados por la comisión de acusaciones de la Cámara ha hecho que se pierda la fe y la credibilidad en ese organismo

Es claro que con estas actuaciones los coasociados y los otros Estados, no miran la fortaleza de las instituciones, y lo que los choques entre estas dos instituciones hacen es deteriorarse en su credibilidad y generan cuestionamientos en sus decisiones,

En el ejercicio de la función de administración de justicia por parte de la Corte Constitucional, y más exactamente en el control constitucional de las leyes, se han observado normas declaradas inexecutable más por motivos políticos que por defectos legales. Asimismo, se observa cuando por ser inconvenientes las normas, se buscan defectos y contradicciones con la constitución.

No resulta casual, en muchas ocasiones, que las decisiones de la Justicia, que en principio deben estar apegadas al principio de legalidad, se inclinen hacia una ideología política, más que a la exégesis de la norma o al bien mayor.

Lo primero es que La corte constitucional actúa conforme a las atribuciones que la carta política le confiere. Se entiende que en una división de poderes las ramas actúan independientemente aunque en el fondo y así lo reconoce la misma constitución actúan en armonía en el único y válido propósito del bien común de la sociedad sobre quienes tienen el deber

La Corte Constitucional vigilante de nuestra Constitución Política de Colombia, lo que busca es salvaguardar nuestros derechos fundamentales, que tal vez por la falta conocimientos jurídicos el Congreso expide leyes que contraria la carta política, de esta manera interviene la Corte Constitucional al velar que nuestros sean cuidados.

La Corte ha invadido las funciones del Congreso cuando bajo el amparo de interpretar la constitución, ha declarado inconstitucional o inexecutable reformas constitucionales o leyes, que el congreso en ejercicio de sus funciones y con el debido tramite ha emitido, pero que de una u otra forma afectan sus intereses políticos o su rango de poder, o el de otra corporación judicial.

Ambas instituciones estas desacreditadas por los escándalos Este conflicto, afecta de manera protuberante los fines propios del Estado, el ejercicio de la independencia de poderes ,la credibilidad de las instituciones estatales, la legalidad de sus actuaciones y en general ponen en peligro la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Generando una desconfianza e inconformismo en las actuaciones que realizan cada una de ellas y que de alguna manera la otra lo refuta o exterioriza su descontento, por lo que no se sabe en ocasiones quien tiene la razón.

Afecta la credibilidad porque siempre se les mostró la idea de que la Corte era la representación del pueblo en la justicia, que defendía la Constitución del 91, pero no ha sido así los recientes casos de corrupción de la Corte investigados por la comisión de acusaciones de la Cámara ha hecho que se pierda la fe y la credibilidad en ese organismo.

Ambas instituciones estas desacreditadas por los escándalos, de Pretell en la corte constitucional y el congreso por lo explicado anteriormente. Hemos perdido credibilidad

Por ello deben hacer lobby, es decir cabildeo, ante los senadores, conducta con la cual pierden institucionalidad pues su voluntad queda empeñada, sometida al a ese Senado que los elige.

#### 5.4.8. Desacreditación.

El término significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, “disminuir o perder la estimación pública de que se goza”; también significa denigrar, desautorizar, descalificar, desconceptuar, deslucir, deslustrar, difamar y embarrar

En Colombia esta armonía con el buen crédito, con el buen nombre se ha roto principalmente por los problemas políticos surgidos entre el legislativo y la Corte Constitucional, ya que muchos parlamentarios han tomado partido por el presidente de turno y consideran que la derogatoria de las leyes se debe más que a criterios jurídicos a retaliaciones políticas

Se afecta por la falta de seguridad jurídica para resolver los conflictos no solo entre personas sino también institucional; Expresan varios magistrados que la intervención de la Corte Constitucional en las leyes aprobadas por el Congreso responde a la debilidad institucional de ese órgano, quien no realiza un efectivo desarrollo normativo de temas fundamentales.

De otra parte, el Congreso través de sus miembros ha expresado su descontento con algunas decisiones tomadas por la Corte Constitucional hasta el punto de indicar públicamente que se sienten suplantados en sus funciones, uno de los casos más controversiales fue la llamada reforma al equilibrio de poderes tras el fallo de la Corte Constitucional que revivió la Sala Administrativa del

Podría considerarse que este tipo de conflictos desfigura el modelo o sistema de frenos y contrapesos acogido por Colombia como Estado Social de Derechos, consistente en una separación funcional de los órganos estatales en la cual cada uno se especializa en la materia que constitucionalmente le fue asignada.

Es por ello que frente a las acusaciones gravísimas de corrupción que se derivan en presuntas conductas punitivas, se pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de sus actuaciones, la ciudadanía pierde confianza en la institucionalidad, no se reconoce la solvencia moral, ética y experticia de sus miembros, escenario trágico para un tribunal de cierre constitucional.

La Rama Judicial pero en particular la Corte Constitucional tiene que estar blindada de toda “politiquería, porque de lo contrario sus decisiones, acciones u omisiones siempre serán cuestionadas en términos de transparencia y credibilidad.

Solo se considera según mi criterio la credibilidad del Congreso cuando por una omisión legislativa deja de desarrollar los principios constitucionales llamados a hacerlo por medio de leyes.

En un Estado que respete la institucionalidad y la independencia de las mismas, se fortalece el garantismo y la confianza ciudadana y bajo esta premisa la sociedad asume el sentido de la función de juez natural de las cortes por parte del congreso.

El debate no es sobre el papel y las competencias para designar o mejor postular, el debate era el ejercicio de esa potestad para la práctica de tú me eliges yo te elijo es por la falta de control político producido por los escándalos en el Gobierno Nacional, que maneja el congreso con maquinaria, señalan algunos magistrados

#### 5.4.9. Clientelismo

El clientelismo es una práctica de intercambio de favores: apoyo electoral o voto a cambio de concesiones, prestaciones, cargos públicos obtenidos en razón de la función pública o de contactos que se logran en ejercicio de sus funciones

El clientelismo es una práctica distorsionada de la política en la que se usa el poder de decisión del aparato legislativo, judicial o ejecutivo para favorecer a los clientes, con favores, prebendas o cargos y que estos compensen con su apoyo o sus votos para perpetuarse en el poder del funcionario o dignatario

Rudolf Hommes (2012), economista y político colombiano, señala que “en Colombia, los economistas han sido relativamente favorables al clientelismo, aduciendo que este es mejor (más barato) que el populismo”.



Es la manera que tiene la clase llamada política para apropiarse de recursos que son públicos y que pasan a ser manejados por ellos y sirven para aumentar su poder político, pero además para ampliar su fuerza económica y su influencia sobre los electores.

Esta distorsión delictiva de la política que usa el clientelismo para repartir beneficios de manera arbitraria entre votantes y afectos se hace siempre a través de una maquinaria política que se apropia con la mayoría de los dineros, causando con ello mayor desigualdad social, e inequidad

Pero el clientelismo, que reparte beneficios en forma arbitraria e inequitativa entre votantes, a través de una maquinaria política que se queda con una buena parte de lo que se podría repartir, no solo fomenta la corrupción en todo el sistema político, también es pernicioso para el crecimiento económico.

El fenómeno se ha crecido y se ha ampliado, por cuanto esta manera de lograr el voto y el apoyo del elector ha hecho tránsito a la justicia, y ha llegado a las altas cortes, La corte Constitucional es un ejemplo de los tentáculos del clientelismo.

Los entrevistados miembros del congreso y de la Corte lo han señalado de esa manera, afirmando que realmente es una minoría, la sociedad, sin embargo no lo ve así como consecuencia de ese fenómeno la Institución otrora símbolo de la legalidad, la moral y la justicia ha visto deteriorar su imagen y su credibilidad

En Colombia, los economistas han sido relativamente favorables al clientelismo, aduciendo que este es mejor —más barato—que el populismo.

Pero el clientelismo, que reparte beneficios en forma arbitraria e inequitativa entre votantes, a través de una maquinaria política que se queda con una buena parte de lo que

se podría repartir, no solo fomenta la corrupción en todo el sistema político, también es pernicioso para el crecimiento económico.

Es un vehículo para ‘privatizar’ recursos que son públicos, y que pasan a ser manejados y usufrutuados por los políticos clientelistas.

Estos recursos provienen del sector privado, vía impuestos y contribuciones, que si no existieran podrían haber sido usados para aumentar el consumo o la inversión, con efectos económicos más positivos.

Los entrevistados, congresistas y magistrados de la Corte Constitucional, al reconocer el problema expresaron en la entrevista semiestructurada que se aplicó:

“por las injerencias que muchos de estos tiene en la contratación en todas las áreas, como por ejemplo en el área de la salud, de la construcción por mencionar algunos”.

Las decisiones de la Corte Constitucional, son netamente políticas y no jurídicas, siendo así, quienes marcan, enseñan, siguen, adoctrinan, implementan o cumplen con una política diseñada que los caracteriza, son indudablemente los partidos políticos.

Esta facultad de nombramiento puede conllevar como en efecto se ha presentado en los últimos casos conocidos, a una forma de clientelismo judicial, donde prima el intercambio de favores entre electores y elegidos, afectando el prestigio con que alguna vez contó el Alto Tribunal Constitucional.

En algunas de las sentencias se observa una inclinación hacia los intereses de la clase política dominante en el país, pero sobre todo en el Congreso de la República.

Porque se somete demasiado al ejecutivo, rompiendo el verdadero equilibrio de poderes que sostiene el sistema democrático.

Señala uno de los legisladores:

“la pérdida de credibilidad de la Corte ante la opinión pública, se debe a que en algunas ocasiones ha tomado decisiones que parece que hubiesen sido más por interés político, o particular de defender poderes o privilegios, que por interés en la protección y guarda de la constitución. La credibilidad, se percibe deteriorada y que cada uno busca obtener más beneficio propio que institucional en desarrollo del estado social de derecho”.

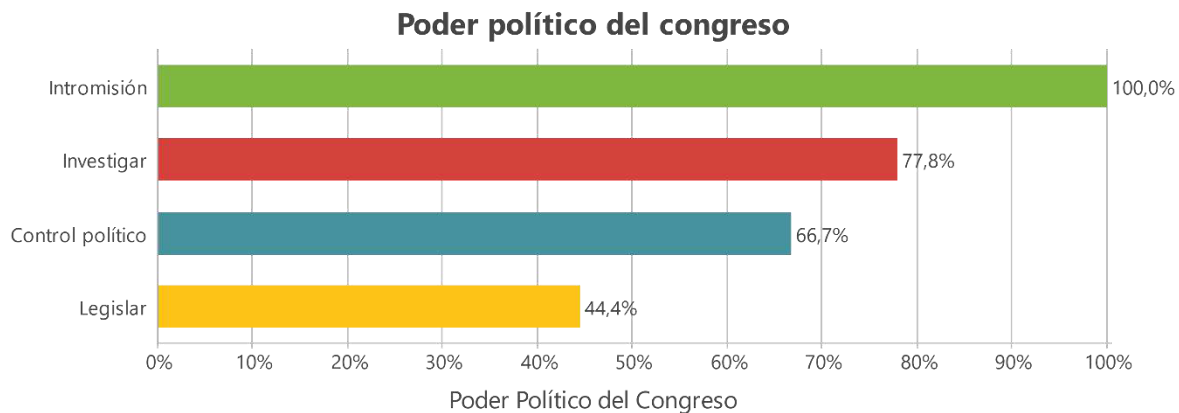
Observando, indagando e investigando el vínculo laboral y/o contractual que algunos parientes o amigos cercanos de los miembros de la Corte, llegan a tener con la entidad u órgano de control para los cuales son elegidos o designados en altos cargos del estado. No se ha resquebrajado. Su contubernio es permanente.

Los mismos integrantes de las Cortes a futuro reclaman cuotas oficinescas que deterioran la imparcialidad judicial. Los recientes casos de corrupción de la Corte investigados por la comisión de acusaciones de la Cámara ha hecho que se pierda la fe y la credibilidad en ese organismo .

La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el propio Presidente presentan candidatos, estos deben hacer cabildeo ante los senadores práctica que les hace perder el carácter institucional del cargo y su voluntad queda empeñada, sometida al senado que lo elige.

#### 5.4.10 Poder Político del Congreso

Gráfica 3 El Poder Político del Congreso



El poder político, cuyo significado como la capacidad de hacerse obedecer, de ejercer influencia sobre algunas autoridades, funcionarios o sobre la propia población. En Colombia, de acuerdo con el mandato de la Constitución Política de Colombia y por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente el poder descansa en el pueblo; por derivación ese poder está en manos del legislativo, del ejecutivo y de los jueces de la República

A este respecto uno de los entrevistados manifestó que el legislativo es una de las instituciones más desacreditadas en Colombia y señaló:

“En Colombia, de las instituciones más desacreditada y deslegitimada está la del congreso de las república, (yidis política, FARC-política, Marco jurídico para la Paz etcétera) algunos doctrinantes hablan de tal desacreditación se debe a la forma de composición del mismo”.

Otro vinculó al ejecutivo debido a la injerencia injustificada de este en las labores del legislativo, pues desviaba la voluntad de los congresistas con prebendas; esto hace que la decisión de los legisladores se dirija más a favorecer las peticiones del ejecutivo, que cumplir con sus obligaciones constitucionales; este tipo de comportamientos desleales

con el cargo y con la misión que les encomienda la Constitución y el propio constituyente primario, deslegitima su actuación y cuestiona la legalidad de sus decisiones normativas. Dijo así el entrevistado:

“La deslegitimación del Congreso de la República se nota por la falta de control político producido por la injerencia del ejecutivo que brinda canonjías y prebendas especiales a muchos congresistas. Los gobiernos de turno tienen dominado al Congreso. Eso lo deslegitima”.

En este sentido puede expresarse que la sociedad se ha acostumbrado a estas intromisiones permanentes, e incluso lo observan como normal; pero la percepción que se nota en la sociedad y en la academia es que la democracia no está institucionalizada cabalmente; que no hay respeto por la separación de poderes ni por el sano equilibrio entre éstos.

#### 5.4.11. Legislar

Cuando por vía de precedentes crea reglas y subreglas de aplicación de una norma, más allá del contenido literal o el espíritu de ella.

Desgaste del ejercicio político, corrupción, falta de liderazgos positivos, falta de propuestas que convoquen el interés de los ciudadanos; esencialmente su interés personal ha primado sobre los intereses generales de la comunidad.

La anterior afirmación encuentra su sustento comoquiera que el Congreso de la República reúne o representa los distintos sectores de la opinión pública. Asimismo aglutina el interés nacional, lo que se convierte en una forma de ejercer el control político hacia la Corte Constitucional.

Principalmente por el número de leyes declaradas inexecutable cuando aparentemente no existe una contradicción con la Carta Magna. Adicionalmente, cuando los Proyectos de

Acto Legislativo son devueltos al Congreso por vicios de forma que denotan más un interés político.

Esta facultad de nombramiento puede conllevar como en efecto se ha presentado en los últimos casos conocidos, a una forma de clientelismo judicial, donde prima el intercambio de favores entre electores y elegidos, afectando el prestigio con que alguna vez contó el Alto Tribunal Constitucional

En virtud de la forma en que son elegidos los magistrados de la Corte Constitucional, los partidos políticos cobran una relevancia en las decisiones de esta misma corporación. Aunque en la práctica resulte difícil probarlo, algunos de los togados llegan a la magistratura debiendo favores políticos a sus electores –miembros de los partidos políticos- por conducto de los congresistas.

En todos aquellos eventos que legisla; de manera particular, cuando condiciona la aplicación de leyes

La comisión de Acusación de la cámara, es quien se encarga por razones de fuero de investigar a los magistrados de altas cortes.- Sin embargo muy pocas veces se ejerce este control aun cuando por la presión de la sociedad, en los últimos tiempos esta actividad se ejerce lo cual se traduce en un choque de poderes, lo que la comunidad ha llamado choque de trenes que desestabiliza la actividad de ambas instituciones.

Sin embargo muy pocas veces se ejerce este control aun cuando por la presión de la sociedad, en los últimos tiempos esta actividad se ejerce lo cual se traduce en un choque

de poderes, lo que la comunidad ha llamado choque de trenes que desestabiliza la actividad de ambas instituciones.

La comisión de Acusación de la cámara, es quien se encarga por razones de fuero de investigar a los magistrados de altas cortes.

#### 5.4.12. Intromisión

Por eso ante una Ley que atente contra derechos, se espera la intromisión de la Corte Constitucional para que le ponga coto a la norma cuestionada se espera la intromisión de la Corte Constitucional para que le ponga coto a la norma cuestionada, y los que más o menos entienden del sistema político en que vivimos, saben que la Corte Constitucional, en muchas ocasiones realizan a cabalidad su trabajo de salvaguarda de la Constitución y del Estado Social de Derecho en que nos desarrollamos, más aun si se tiene presente que las decisiones de esta alta Corporación, sus decisiones, no son jurídicas, sino netamente políticas.

Por los actos de corrupción masivos donde se encuentran involucrados congresistas, por vínculos de los congresistas con grupos al margen de la Ley, por las injerencias que muchos de estos tienen en la contratación en todas las áreas, como por ejemplo en el área de la salud, de la construcción por mencionar algunos.

Por las injerencias que muchos de estos tiene en la contratación en todas las áreas, como por ejemplo en el área de la salud, de la construcción por mencionar algunos. También señala este congresista que la credibilidad y la institucionalidad se afectan cuando no se ejercen las competencias que la misma Constitución otorga a cada órgano ya que todos confluyen en garantizar ese modelo de Estado, sino que se usurpan funciones legislativas cuando la constitución no se las ha dado.

Así mismo, se señala que Cuando se elige a los magistrados ya existe la primera presión sobre las decisiones de la Corte Constitucional hacia el futuro. Las últimas situaciones sucedidas dentro de la corte así lo demuestran, dice refiriéndose al cabildeo que deben realizar los candidatos a magistrados de la Corte Constitucional

No ejerce un control político materialmente ni formalmente, no está en sus funciones, sus funciones, descritas en el artículo 241 de la Constitución, consisten en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformativos de la Constitución

Las anteriores situaciones fungen como una forma de presión a nivel político, más que el ejercicio propio de la función legal.

Señala uno de los congresistas entrevistados que:

“las decisiones de la Corte Constitucional, en muchos de los casos, terminan permeadas de tintes ideológicos afines a los partidos políticos de donde provienen sus miembros. Resulta entonces que en efecto existe una injerencia directa y proporcional de los partidos políticos, conforme el apoyo ejercido a la hora de la elección de los magistrados”.

Por su lado los magistrados entrevistados expresaron igualmente sobre la injerencia o intromisión que realiza el Congreso de la República; así se expresó uno de ellos:

“ Se manifiesta en el contenido de las leyes y actos legislativos que aprueba el Congreso cuando ellas afectan de alguna manera la integración, competencias y funcionamiento de la Corte”.



Otro de los magistrados expresó que no solo era la intromisión del legislativo, sino que además también ejercían injerencias los partidos políticos. La injerencia de los partidos políticos en la Corte Constitucional, es la presión que se ejerce en el momento en que la corte selecciona sus candidatos para integrar ternas de las cuales escogen las personas que ocuparán altos cargos del Estado en los que ellos deben presentar candidatos. Los partidos políticos reclaman su representación en la Corte para hacer imperar sus ideologías.

Dos de los miembros de la Corte Constitucional señalaron que la intromisión comienza desde el mismo momento en que se va a conformar.

“Con la integración de la misma se inicia la injerencia; Es reprochable que la integración de esta Corte tenga punto culminante en el Senado”.

Ambas instituciones chocan en el ejercicio de sus funciones lo cual trae como consecuencia que se trabe el ejercicio de la autonomía de poderes y se pierda la institucionalidad de ambos organismos y con ello la credibilidad, expresó un magistrado próximo a culminar su período de ocho años.

Finalmente uno de los entrevistados expresó:

“a pesar de que, las personas acostumbran a estas intromisiones, y la comunidad en general, en ocasiones lo observa como normal, en realidad

en la sociedad se percibe que la democracia no está plenamente institucionalizada”.

## **5.5. Discusión de Resultados**

Como ha podido verse en el análisis de las variables y sus indicadores, es claro que tanto los legisladores como los magistrados de la Corte Constitucional coinciden en diversos puntos de vista en torno al conflicto de poder suscitado entre la Corte Constitucional y el Congreso de la República.

La hipótesis presentada como fundamento y guía de la investigación Conflicto de poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional señala que: Los factores que han determinado el deslegitimación de la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el congreso de la República y la Corte Constitucional son:

- 1.- La desinstitucionalización de ambas entidades
- 2.- La incredulidad en la Corte Constitucional
- 3.- El control político del Congreso de la República

A cada una de estas variables, factores, propiedades o atributos corresponden una serie de indicadores que pudieron ser conocidos y determinados en las entrevistas que se realizaron a los congresistas y magistrados.

Primera variable. Desinstitucionalidad

Para esta variable se escogieron como indicadores los siguientes:

- 1.- Desconfianza
- 2.- Control Judicial.
- 3.- Revocatoria.

Desconfianza.

Debe entenderse la desconfianza como emoción negativa, que se traduce en inseguridad sobre las acciones de una institución o una persona; contraria a la confianza que es la esperanza sin incertidumbres, vale decir, la seguridad que se tiene de la actuación de una institución o una persona

El resultado y codificación de las respuestas brindadas durante las entrevistas en este indicador señala que el ciento por ciento (100%) de los entrevistados coincidió en que la sociedad colombiana desconfía de las actuaciones tanto del Congreso de la República como de la Corte Constitucional.

Control judicial

Control judicial es una medida que restringe la libertad de personas e instituciones que las obliga a someterse a las decisiones de un juez; en este caso el Congreso de la República en Colombia está sometido a las decisiones que sobre las leyes que emite disponga la Corte Constitucional, incluyendo su revocatoria o nulidad. El problema que se presenta en este conflicto de poder estriba en que al decir de los Congresistas es que la Corte extralimitando sus funciones ejerce control político sobre el Congreso

En contravía de lo expresado por los legisladores, los magistrados de la corte Constitucional, señalan que el Congreso de la República, a través de la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que en Colombia forma parte del Congreso, se ejerce no sólo control judicial, sino además control político.

En desarrollo de la investigación se encontró que los entrevistados, magistrados y congresistas, en un 77.8 % creen que existe un control político y judicial de un organismo, lo que trae como consecuencia la ausencia de institucionalidad.

#### Revocar - Anular

El tercer indicador la competencia de revocar, es decir anular (declarar inexecutable) las leyes aprobadas por el Congreso), sin que exista ninguna posibilidad, ni recurso alguno para que se vuelva a examinar la decisión de la Corte, pues ella tiene el control de ser el máximo organismo de interpretación y defensa de la Constitución; lo que significa para los legisladores una competencia exagerada de una institución sobre otra, lo cual rompe el equilibrio de poderes que debe existir en toda democracia, más aún en tratándose de un estado Social de Derecho, como fue definido por la Constitución el Estado colombiano.

Para este indicador los resultados logrados, utilizando la técnica del MAXQDA, fue de un 66.7%, más de un cincuenta por ciento (50%) de los entrevistados evaluó y confirmó este indicador como creador y multiplicador de la institucionalidad tanto del Congreso como de la Corte Constitucional.

## Segunda variable: Incredulidad en la Corte Constitucional

El significado del vocablo incredulidad, aquí señalado es el de obstáculo, circunstancia, dificultad, o reparo de lograr creer o aceptar las decisiones de una institución o una persona, es la usencia del convencimiento.

La hipótesis señala que la incredulidad es un factor de deslegitima la justicia y un muestrario del conflicto de poder existente entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional Colombiana.

Los indicadores de esta variable de la hipótesis son:

1.- Inseguridad jurídica

2.- Corrupción

3.- Desacreditación

4.- Clientelismo.

Inseguridad Jurídica.

Siempre se ha afirmado tanto en la Ciencia del Derecho, como en el de la ciencia Política que uno de los fundamentos esenciales de todo ordenamiento jurídico y político estriba en la certeza del derecho, de los acuerdos, de lo convenios; es decir, la seguridad que tiene la sociedad sobre los alcances y limitaciones de sus derechos y obligaciones y las consecuencias de sus actos y de los actuaciones de sus instituciones política y jurídicas.

Por tanto, la inseguridad jurídica es el fenómeno contrario, es una percepción, un sentimiento que tienen las personas y la sociedad de que se ha perdido esa convicción de que los jueces incluyendo los constitucionales que no confieren seguridad ni confianza, que se encuentra sembrada la desazón.

En Colombia, desde hace algún tiempo los altos tribunales de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Justicia y hasta la Corte Constitucional, Creación de la Asamblea Nacional Constituyente, ha propiciado con sus actuaciones inseguridad jurídica que se transforma a su vez en inseguridad política, no hay seguridad en el ejercicio de poder

Corrupción.

La palabra corrupción en el lenguaje político, social y jurídico se define como la conducta humana que viola las normas legales y los principios éticos fundantes de una democracia, de un estado o de una comunidad.

Los resultados de la investigación realizada señalan que los entrevistados aceptan en un ciento por ciento (100%) que el fenómeno de la corrupción permea ambas instituciones; ello no significa en modo alguno que todos los magistrados o todos los congresistas son corruptos; lo que quiere decir es que la conducta anormal está inserta en las actuaciones de muchos legisladores que intercambian sus decisiones a cambio de favores políticos, de regalos, cargos burocráticos o dinero tal es el caso de los dineros entregados por la firma Odebrecht para la entrega de contratos que contó con la anuencia y favorecimiento de congresista que intervinieron en forma ilícita para el logro de los contratos para la

sociedad internacional; o el caso de la entrega de notarías a cambio de decisiones para la aprobación de un acto legislativo que permitió la reelección presidencial.

Lo mismo se puede señalar de la Corte Constitucional, ha sido probado judicialmente que algunos magistrados utilizaron su poder y colegaje para ejercer influencia sobre otros magistrados para favorecer en sentencias de tutela, intereses particulares, como es el caso de una acción de tutela en que se pedía condenar al Estado con una multimillonaria multa, acción que fue evitada gracias a la honorabilidad de uno de los magistrados que evitó el delito, por esta investigación de la propia Corte salieron del cargo varios magistrados de la Corte incluyendo varios presidentes del alto Tribunal.

#### Desacreditación

El sentido de la palabra, para los fines de este trabajo es el de disminución del buen nombre, crédito o fama que tiene una persona, también implica restar la opinión favorable que se tiene de una institución, su reputación o estimación por parte del colectivo; es la pérdida del valor del nombre de una persona o ente público que la conciencia colectiva posee sobre una persona o entidad.

La variable incredulidad tiene en esta investigación la desacreditación como indicador que se tiene para mostrar que efectivamente la sociedad ha dejado de creer en Instituciones como el Congreso de la República y la Corte Constitucional, porque ambas instituciones están desacreditadas.

La investigación realizada dio como resultado que el ochenta y ocho punto nueve por ciento (88.9%) de los entrevistados aseguro que efectivamente ellos tienen la percepción que la sociedad no las tiene en buen criterio, que tiene de sus actuaciones una pésima

opinión, una mala fama, y ampliar sus disquisiciones firman que ellos son autores de este descrédito, producto de las conductas antiéticas alejadas de la ley, la ética y las buenas costumbres

Clientelismo.

Es uno de los indicadores seleccionados para la comprobación y análisis de la variable incredulidad en la Corte Constitucional, el significado del término, empleado en este trabajo e investigación es la costumbre de favorecer, de manera no justificada a determinadas personas a cambio de un favor pasado, presente o futuro.

El clientelismo del que aquí escribimos es el denominado clientelismo político, entendiendo por este el intercambio no oficial de favores; en este proceso los poseedores de los cargos públicos entregan prestaciones, desde su cargo a cambio de apoyo electoral para él, o para el jefe o partido político que ampara el cargo oficial que desempeñan. Puede, en síntesis definirse como la toma irregular de decisiones que se realiza para favorecer intereses propios o de terceros, para ampliar o perpetuarse o en el poder, para lograr beneficios económicos o para perjudicar a otros funcionarios en menoscabo de su nombre y actuación.

La investigación realizada sobre el conflicto de poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional, mostró con este indicador que el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los entrevistados es de la opinión que efectivamente el clientelismo es un fenómeno político incrustado tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional.



La sociedad ha tenido como cierta esta práctica política de ello han dado cuenta politólogos, sociólogos y antropólogos lo que aparece como un fenómeno nuevo es que la misma haya hecho presencia en las justicias y que se encuentre probada su existencia en la Corte Constitucional.

Con el uso del clientelismo, se han aprobado cambios en la propia Constitución, como es el caso de la aprobación de la no extradición de colombianos, que fue revocada en razón de convenios internacionales sobre la materia y que pertenecen al bloque de constitucionalidad, Leyes sobre la Paz, sobre el presupuesto nacional y hasta sobre la participación de las regiones en el presupuesto, en las regalías y en el nombramiento de funcionarios de alto nivel, como ministros, superintendentes, directores de establecimientos públicos, Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación y lo grave la elección de magistrados de la Corte Constitucional.

#### Tercera variable. Poder político del Congreso

El poder político se entiende como la capacidad que tiene la rama legislativa, en Colombia en cabeza del Congreso de la República, que lo ejerce como autoridad y como herramienta para realizar veeduría sobre el poder ejecutivo y contribuir de esa forma a mantener el equilibrio del poder entre las diferentes ramas del poder público que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Lo lamentable es que este poder político que le otorga la Constitución es empleado de manera anormal, en beneficio de intereses poco ortodoxos.

La variable poder político del Congreso tiene cuatro indicadores que muestran que ciertamente con el uso anormal e ilícito del poder político se contribuye a la pérdida de legitimidad tanto del Congreso de la República como de la Corte Constitucional

Los indicadores son:

1.-Intromisión 100%

2. Investigación 77.8%

3.- Control político. 66.7%

4.- Legislación. 44.4%

#### Intromisión

El significado del término usado como indicador se esta variable es intervención no solicitada y además inoportuna en asuntos que no son de su competencia. Señala la acción y efecto de entrometer o entrometerse (Larousse Editorial, 2016)

En el indicador intromisión, correspondiente a la variable Poder político del Congreso el ciento por ciento (100%) de los congresistas entrevistados señaló que la Corte Constitucional, en el ejercicio de sus funciones se entromete en las funciones que le corresponden al congreso; específicamente cuando toma decisiones que no les competen ejemplo, la adopción por parejas del mismo sexo, El Derecho de Petición, el aborto, la objeción de conciencia.

#### Investigación.

Los magistrados de la Corte Constitucional, expresaron en la entrevista que el congreso de la República usa el poder político que le confiere la Constitución para realizar, a través de la Comisión Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Las actuaciones que adelantan tanto las Comisiones de Investigación y Acusación de la Cámara como la de Instrucción del Senado, así como las Plenarias de ambas Corporaciones legislativas en ejercicio de las atribuciones constitucionales consignadas en la Carta Política, tienen la categoría de función judicial Tiene efectos sólo para los efectos de acusar, no acusar y declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional entre los cuales se encuentran los miembros de la Corte Constitucional.

Es necesario señalar que la Cámara de Representantes tiene funciones judiciales para los efectos anotados, es decir, en orden a decidir si acusa o no ante el Senado a los funcionarios que gozan de fuero constitucional, La Cámara está facultada constitucionalmente para adelantar las investigaciones tendentes a determinar por parte de la Plenaria de la Cámara si existen o no razones que ameriten objetivamente la acusación o preclusión del proceso correspondiente o su continuidad para acusarlo ante el Senado

Los magistrados señalaron que estas facultades constitucionales que le da la Carta a los legisladores, implican realizar una labor para lo cual no están capacitados para ejercer este tipo de actividades y sobre todo porque con ese poder, y valiéndose de actividades no legales para solicitar canonjías a quienes investiga.

El 77. 8 % de los entrevistados señaló que efectivamente ese poder se extralimita y se usa para obtener provecho en la consecución de respuestas favorables en el ejercicio de las

labores de los magistrados De esta manera se deslegitima la labor tanto del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, se pierde la institucionalidad de la justicia, ésta pierde credibilidad y la democracia se convierte en una ilusión inalcanzable.

#### Poder Político

Entendido como el control que ejerce el Congreso sobre las decisiones del ejecutivo, sin embargo viciando este control, se ejerce ese poder político, desde el momento mismo en que se selecciona a los magistrados de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta más intereses partidistas o personales que las propias necesidades de la justicia; en definitiva no siempre se elige a los mejores.

En este sentido la investigación que hemos realizado mostró que un 66.7% de los entrevistados señala que la situación es real, que existe un empleo extralimitado de funciones, lo que trae que la justicia, esté coartada por el legislativo, desde los inicios de la elección de los magistrados y esta situación tiene su origen en la propia Constitucional que no hizo una separación estricta de poderes, sino que fundó una mixtura en la que el legislativo, juzga, el ejecutivo juzga y legisla y los magistrados juzgan y legislan.

#### Legislar.

Es el papel esencial de la rama legislativa del poder público. Legislar implica no sólo hacer las leyes, comprende también el debate para aprobar las leyes, para reformar la Constitución, pero también para la interpretación de la Constitución y de las propias leyes a través e normas interpretativas,

Pero esta función se tergiversa cuando se atiende más a los intereses partidistas o personales de los congresistas. Es el caso del acto legislativo mediante el cual se intentó

un cambio constitucional que quitó de la estructura del Estado el Consejo superior de la Judicatura, por creerla inoperante, La Corte Constitucional se opuso al acto legislativo de reforma constitucional y declaró inexecutable, es decir anuló la decisión del Congreso. De esta manera la administración de Justicia quedó tal y como lo había señalado la Asamblea Nacional Constituyente

## CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La investigación realizada estuvo orientada a demostrar que los factores que han determinado la deslegitimación la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional son: La pérdida de legitimidad de las instituciones investigadas, desinstitucionalización, la pérdida de credibilidad de la Corte Constitucional y el Poder político del Congreso de la República.

El estudio permitió mostrar que la pérdida de legitimidad tanto del Congreso como de la Corte se centra en indicadores como la desconfianza que la sociedad colombiana tiene sobre los miembros del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, situación que es reconocida por ambas instituciones.

La investigación igualmente mostró como resultado el hecho que el Control judicial que ejerce el Congresos de la República, se aparta de la legalidad y se usa como poder político para lograr que determinadas decisiones de la Corte Constitucional aprobando leyes o aprobando acciones constitucionales de tutela se produzcan como resultado de ese poder que constitucionalmente se le ha dado al Congreso, fortalecido además por el poder, otorgado al Senado de la República, de escoger por votación los nombres de los magistrados que hacen parte de la Corte Constitucional.

De otra parte contribuye también e este proceso de deslegitimación del Congreso de la República y de la Corte Constitucional el hecho de que esta entidad estatal goza de la competencia, otorgada también por la Constitución Política de revocar, es decir de anular las leyes aprobadas por el Congreso de la República; decisiones que en muchas ocasiones aparecen a los ojos de la comunidad como conductas revanchista y salida de todo orden jurídico y político, desdibujándose con ello no sólo la imagen que de esas instituciones

tiene el colectivo societario, sino que de esa pugna irreconciliable por el poder sale perjudicada la justicia, tal es el caso de la Ley, aprobada por el Congreso de la República mediante la cual acabó con el Consejo Superior de la Judicatura, normatividad que contaba con el beneplácito de la sociedad, por que las actuaciones de dicho Consejo eran más perjudiciales que beneficiosas para la democracia y para el propio Estado Social de Derecho; la Corte Constitucional declaró inconstitucional, por vicios de forma, la norma aprobada por el Congreso y dejando la percepción que dicha decisión no fue tomada consultando el interés general, ni atendiendo razones de derecho, sino a criterios propios de la Corte pues vieron en la ley aprobada por el Congreso, una amenaza política.

El trabajo de investigación, mostró también que la incredulidad, la falta de credibilidad que la sociedad tiene sobre las instituciones objeto de estudio, deslegitima la justicia y ello producto del conflicto de poder que tienen los integrantes de tales instituciones. En toda la vida republicana la sociedad ha creído que al Congreso no llegan siempre los mejores ciudadanos, ni los más preparados; pero a la Corte Constitucional se la tenía como un estandarte de legitimidad, probidad, preparación y responsabilidad; en la medida que fueron siendo elegidos por el Congreso de la República y por la costumbre del cabildeo que tienen que hacer los candidatos a la magistratura, empezó una relación de dependencia dañina, elecciones que pedían contraprestaciones futuras, esto dio paso a la pérdida de la autonomía de los jueces constitucionales en la toma de decisiones; fenómeno que se ha agudizado encontrándose en el seno de la Corporación, actuaciones indelicadas, ausentes de ética y conductas delictuosas; hemos asistido a todo tipo de actuaciones alejadas del derecho y de la justicia, saliendo ésta última maltrecha del encuentro conflictivo de poderes.

La investigación corroboró, además, que el Congreso de la República goza de un privilegio que le asignó la Asamblea Nacional Constituyente, cuando dejó plasmado en la Constitución Política el poder político que tienen los legisladores, especialmente el senado de la República, de elegir a los miembros de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presentan el Presidente de la República, La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; eso expresan el artículo 239 de la Constitución y el artículo 44 de la Ley 270 de 1996.

Con base en esa autorización constitucional y legal el Congreso de la República se entromete de manera irregular en las decisiones que deben tomar los miembros de la Corte, pues su elección obedece más a criterios partidistas y a intereses particulares de los senadores que hacen dicha elección comprometiendo la autonomía e independencia, característica que debe poseer la rama judicial, pero con esta extralimitación de la capacidad legal del legislador la administración de la justicia queda comprometida.

De otra parte, se logró mostrar con la investigación que la Cámara de Representantes, que es un componente de la rama legislativa, usa el poder de investigación que posee al tener la competencia, otorgada por la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución Nacional de preparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al Presidente de la República, a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Igualmente, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación.

La investigación mostró que también en el cumplimiento de esta función de investigación judicial, el Congreso de la República en cabeza de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y apartándose de los principios de legalidad, de transparencia



y de probidad que deben tener quienes gozan del privilegio de la elección popular, pues son representantes del pueblo, del constituyente primario, abusan y extralimitan su poder aplicando justicia condicionada a consideraciones partidistas o en beneficio de interés particular.

Puede inferirse de todo lo anteriormente expuesto que el conflicto de poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional subsiste, que el equilibrio y armonía entre las distintas ramas del poder público es una constante; el equilibrio de poderes en Colombia sigue roto.

La Corte Constitucional, ha denegado por la vía de la inexequibilidad, nulidad de normas aprobadas por el Congreso, los intentos de reforma a la justicia que se han presentado los gobiernos, fundamentados en que son ataques más que a la propia justicia a la Constitución Política; la lucha, el conflicto no es en el plano del derecho sino en el campo de la política.

La última propuesta presentada por el Presidente de la República y aprobada por el Congreso de la República, aún a costa de la pérdida de la capacidad de investigación que tenía la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes y reemplazada en esas funciones por un Alto tribunal de aforados que investigaría y juzgaría a magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación, fue declarada nula, es decir inexecutable, violatoria de la Constitución reviviendo la Comisión de Acusaciones por cuanto causa menos males que los podría llegar a causar la propia Cámara.

Los resultados de la investigación prueban la hipótesis propuesta que dice: Los factores que han determinado la deslegitimación de la justicia en Colombia a partir de los conflictos de poder entre el congreso y la Corte Constitucional son: La pérdida de

legitimidad de las instituciones, la desinstitucionalización y el control político y jurídico que ejerce el Congreso de la República.

Ello significa que la justicia en Colombia es deslegitimada esencialmente por los conflictos de poder que tienen el Congreso de la República y la Corte Constitucional; porque tanto el Congreso como la Corte se han perdido legitimidad ante la sociedad, por que han perdido su valor institucional, la sociedad no les cree.

La Nación se encuentra en un estado de inquietud, la percepción de inseguridad jurídica es palpable; la corrupción en ambas instituciones agrava la situación; la justicia se ha tornado lenta e ineficaz, la clase política parece tener el máximo poder y lo demuestra permanentemente.

Propuestas para una posible salida al conflicto.

Para evitar que continúe el conflicto por el poder entre el Congreso de la República y la Corte Constitucional que sólo se ocupe del estudio del equilibrio y separación efectiva del poder; se trata de brindar a cada rama del poder público: que el Congreso se dedique sólo a legislar, que se quiten tareas y competencias que corresponde otras instancias; no es legítimo que tengan un Congreso que además de legislar pueda juzgar, que pueda contratar, pueda escoger altos funcionarios, como el Contralor general de la Nación.

Tampoco es legítimo que las cortes tengan, además de su legítimo papel de aplicar justicia, la función de presentar candidatos para altos cargos del ejecutivo y la Cortes sólo deben dedicarse a la administración de justicia, para eso están preparadas

Es preciso fortalecer la conciencia política el ciudadano en cultura política, se hace necesario que estudie de manera obligatoria la educación La enseñanza de valores

democráticos comienza desde la familia, luego en las escuelas, colegios e Instituciones de Educación Superior. La educación de calidad es la clave.

Fortaleciendo la selección de jueces y magistrados por concurso de méritos, apartando de esa labor a los legisladores, esa tarea debería corresponder a universidades acreditadas que tengan facultades de derecho o ciencia política .

Ha quedado claro en esta investigación que la hipótesis ha sido aprobada; que la lucha por el poder entre el Congreso de la República y la corte Constitucional deslegitima el poder; que el ciudadano sin poder ni vinculación ha perdido la confianza,

## REFERENCIAS

- Álvarez, E., & Tur, R. (2013). *Derecho constitucional*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Andes, U. d. (2018). *Ciencia Política - Programas*. Obtenido de <https://c-politica.uniandes.edu.co/index.php/programas>
- Banco de la República. (2015). *La democracia como sistema político*. Obtenido de Banrepcultural:  
[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/democracia\\_sistema\\_politico](http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/democracia_sistema_politico)
- Bobbio, N. (1986). *El Futuro de la Democracia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- Bobbio, N. (2009). *Teoría general de la política*. Madrid: Editorial Trotta.
- Brey, J. (2015). *Dogmática constitucional: la estructura básica del Estado constitucional*. Madrid: Dykinson.
- Caballero, G., & Anzola, M. (1995). *Teoría constitucional*. Bogotá: Temis.
- Calamandrei, P. (2004). *La defensa Jurídica de la Libertad*. Bogotá: Ibañez.
- Cazorla, J. (2008). *Manual de introducción a la Ciencia política*. Granada: Fundación Nucleo de ESCO.
- Chalco, M. (2014). *Estado, poder y abuso del poder*. Bogotá: Temis.

Child, J. (1994). *El fin del Estado. Desestabilización Política, caos constitucional*. Bogotá D.C.: Editorial Grijalbo.

Congreso de la República. (1992). *Ley 5*. Obtenido de <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/ley-5-de-1992>

Copete Lizarralde, A. (1960). *Lecciones de derecho Constitucional Colombiano*. Bogota: lerner.

Corte Constitucional de Colombia. (2004). *Sentencia C-246*.

Corte Constitucional de Colombia. (2018). *Corte Constitucional de Colombia*. Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/>

Dana, S. (1968). El objeto, la finalidad y el método de la ciencia política. *Revista de estudios políticos*, 175 - 210.

Duque, J. (2014). LA CIENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA. Análisis de los planes de estudio, sus áreas y sus énfasis. *Papel político*, 377-411.

Echeverri Uruburu, A. (2002). *Teoría Constitucional y ciencia política*. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional.

editorial legis. (2017). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá : Legis.

Ferrajoli, L. (2013). *Poderes Salvajes*. Madrid: Minima Trotta.

Ferrando Badía, J. (1972). El Poder Político. *Revista española de la opinión pública*, 23-56.

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Fuentes, C. (2011). Montesquieu: teoría de la distribución social del poder. *Revista de ciencia política*, 47-61.
- Galindo, H. (Julio de 1992). Sentencia C- 543. *Gaceta Judicial*. Bogota, Cundinamarca, Colombia: Gaceta de la Corte.
- Gómez Sierra, F. (2013). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Leyer.
- Herrera Llanos, W. (2003). La rama legislativa del poder público en Colombia. *Revista de Derecho*, 363-406.
- Hommes, R. (12 de septiembre de 2012). El clientelismo como política de Estado. *Portafolio*, pág. 16.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. (s.f.). *Biblioteca Jurídica Virtual*. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/4.pdf>
- Instituto Interamericano de Derechos . (2012). *Poder, política y democracia: cuadernos didácticos sobre teoría y práctica de la democracia*. San José: CIEP - UCR.
- Kelsen, H. (2006). *¿Una Nueva Ciencia de la política?* Buenos Aires: Katz editores.
- krauter, S. k. (12 de febrero de 2017). Corrupción y clientelismo. *El Espectador*, pág. 7.
- Larousse Editorial. (2016). *Gran Diccionario de la Lengua Española*. Bogotá: Larousse Editorial, S.L.
- Lasalle, F. (1964). *¿Qué es una Constitución?* Buenos Aires: Siglo Veinte.
- Legis. (2107). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Legis.

- Lizarralde, A. C. (1960). *Lecciones de derecho Constitucional Colombiano*. Bogotá: Lerner.
- López, D. (2018). *El derecho de los jueces*. Bogotá: uniandes.
- Luhmann, N. (1995). *Poder*. Mexico, D.F.: Anthropos.
- Martinez Miguelez, M. (2006). *Ciencias y arte en la metodología*. Mexico: Trillas.
- Molina Betancurt, C. M. (2010). *Universidad Libre de Colombia*. Obtenido de <http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7459/PaezVillamilLuisaMaria2010.pdf?sequence=1>
- Montesquieu. (1906). *El espíritu de las leyes*. Madrid: Libreria general de Victoriano Suárez.
- montesquieu. (2015). *El Espíritu de las Leyes*. Madrid: Alianza.
- Moreno Younes, D. (2012). *Las Reformas del Estado y de la Administración Pública*. Bogotá: Ministerio Público.
- Naranjo, V. (2000). *Teoría constitucional e instituciones políticas*. Bogotá: Temis.
- Osuna Patiño, N. I. (2003). *El sistema colombiano de justicia constitucional*. Atenas: European Public Law Center.
- Palacios, M. (1994). Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales. *Análisis Político*, 14.
- Patiño Villa, C. (2013). *Guerra y Construcción del Estado en Colombia*. Penguin Random House.

Pizzolo, C. (2004). *Sociedad, poder y política*. Buenos Aires: Ediar.

Rousseau, J.-J. (2003). *El Contrato Social o principios de derecho político*. Biblioteca Virtual Universal.

Rúa Delgado, C. (2013). La Legitimidad en el ejercicio del poder político en el Estado Social de Derecho. Una revisión del Caso Colombiano. *Revista Ius Et Praxis Vol. 9 núm. 2*, 85-122.

Sáchica Aponte, L. C. (1992). *Nuevo constitucionalismo colombiano*. Bogotá: Temis.

Sáchica, L. C. (1996). *Nuevo Constitucionalismo Colombiano*. Bogotá: 1996.

Sartori, G. (2007). *¿Qué es la democracia?* Taurus.

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2018). *Constitución Política de Colombia*. Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

Senado de la República de Colombia. (2018). *¿Cuáles son las funciones del Congreso?* Obtenido de <http://www.senado.gov.co/legales/item/11161-cuales-son-las-funciones-del-congreso?tmpl=component&print=1>

Senado. (s.f.). *Historia del Congreso de la Republica en Colombia*. Obtenido de Senado.gov.co: <http://www.senado.gov.co/historia?tmpl=component&print=1>

Tobo Rodriguez, J. (2006). *La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad en Colombia*. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez.



- Torres, J. (2014). Los paradigmas del control de poder y el principio. *Justicia Juris*, 10(1), 87-101.
- Trujillo, M. (2009). *REsignificación del poder*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- UNAD. (2013). *Colombia, Estado social de derecho*. Obtenido de Datateca: [http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90140/Historias%20locales%20Agosto%20de%202013/leccin\\_3\\_colombia\\_estado\\_social\\_de\\_derecho.html](http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90140/Historias%20locales%20Agosto%20de%202013/leccin_3_colombia_estado_social_de_derecho.html)
- Velasco, N. (2017). Constitucionalismo y Estado Social de Derecho en Colombia. *Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales*, 49-65.
- Villa, I. (2005). *Los límites de la Corte Constitucional*. Bogotá: Legis.
- Zamitiz, H. (1999). Origen y desarrollo de la ciencia política: temas y problemas. *Convergencia*, 89-122.
- Zamorano, R., & Rogel, R. (2013). El dispositivo de poder como medio de comunicación: Foucault - Luhmann. *Política y sociedad*, 50(3), 959-980.